KAROL MODZELEWSKI
JACEK KURON

REVOLUCION POLITICA O PODER BUROCRATICO

I. POLONIA

Cuadernos de Pasado y Presente

PyP

22

Karol Modzelewski
Jacek Kuron

Revolución política o poder burocrático

En julio de 1965 Karol Modzelewski, dirigente de la juventud universitaria de Varsovia ya en octubre de 1956, e hijo del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de Polonia, y Jacek Kuron, uno de los organizadores de las actuales juventudes socialistas polacas, fueron condenados respectivamente a tres años y medio y a tres años de reclusión. Se los acusaba de haber redactado y difundido la "carta abierta al Partido Obrero Unificado Polaco (POUP)" que hoy publicamos.

Los autores efectúan una crítica global, desde un punto de vista revolucionario, de las sociedades en transición de Europa Oriental, la URSS incluida, mostrándolas como burocráticamente deformadas. A la vez elaboran el programa de una "revolución política contra el régimen burocrático con vistas a crear las condiciones de un auténtico desarrollo socialista

El punto clave de su trabajo está contenido en las últimas págimas donde establecen el nexo entre la revolución política antiburocrática en Polonia y la exigencia de un movimiento análogo en la URSS y en los otros "países burocrático industrializados". En términos generales la revolución antiburocrática aparece como un momento del movimiento revolucionario mundial, paralelo a los intereses de las fuerzas obreras y de los países subdesarrollados en su común hostilidad a los esfuerzos de la burocracia para estabilizar la situación interna e internacional. La burocracia se vuelve inevitablemente defensora del status quo, temerosa de todo cambio que pueda atentar contra los equilibrios internos, y partidaria de la repartición del mundo en esferas de influencia. Nos queda por agregar que el equilibrio internacional, además de ser un factor conservador, es un espejismo, dado que el imperialismo tiene real interés en extender su propia influencia a expensas de los vacíos de iniciativas revolucionarias y de la desintegración latente de las economías gestadas burocráticamente.

Derrotar a la burocracia es entonces indispensable para defender con éxito los resultados ya conquistados y profundizar la lucha de clases y la expansión del campo socialista.

Cuadernos de Pasado y Presente

1 / **Karl Marx,** Introducción general a la crítica de la economía política
2 / **Claude Lévi-Strauss,** Elogio de la antropología
3 / **Paul A. Baran,** Excedente económico e irracionalidad capitalista
4 / **Louis Althusser,** La filosofía como arma de la revolución
5 / **Ernesto Che Guevara,** Escritos económicos
6 / **Varios Autores,** Francia 1968: ¿Una revolución fallida?
7 / **Varios Autores,** Teoría marxista del partido político
8 / **Badiou-Althusser,** Materialismo histórico y materialismo dialéctico
9 / **Gorz-Macció,** Sartre y Marx
10 / **Varios Autores,** Teoría marxista del imperialismo
11 / **Cesare Luporini,** Dialéctica marxista e historicismo
12 / **Varios Autores,** Teoría marxista del partido político II
13 / **Rosa Luxemburg,** Huelga de masas, partido y sindicatos
14 / **Varios Autores,** La revolución palestina y el conflicto árabe-israelí
15 / **Varios Autores,** El marxismo de Trotski
16 / **Varios Autores,** El joven Lukács
17 / 18 **Evgeni Preobrazhenski,** La nueva económica
19 / **Varios Autores,** Gramsci y las ciencias sociales
20 / **Hobsbawm-Marx,** Formaciones económicas precapitalistas

Karol Modzelewski
Jacek Kuron

Revolución política o poder burocrático
I. Polonia



Cuadernos de Pasado y Presente / 22
Córdoba

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
JURISDICCION DE PATRIMONIO
SE TOMO RAZON
Registro Diario Nº F
Cla. Clas. Nº Inv.
Córdoba 8 de Febrero de 19 74
FIRMA Y SELLO

BIBLIOTECA FILOS. Y HUMAN.
INVENTARIO 33353
FECH 11-7-74

FAC. DE FILOSOFIA
SIGNATURA 32(438)
TOPOGRAFICA M692
Nº DE INV. 33353
COTIZADO POR Ubis
NOTA Nº
EXPED. Nº
FACT. Nº
FECHA INGRESO 11-7-74

Tapa: Miguel De Lorenzi
Traducción: Oscar Landi
Primera Edición: Marzo de 1971
© Ediciones Pasado y Presente
Casilla de Correo 80, Córdoba
Queda hecho el depósito de ley
Impreso en Impresiones Schmidel
Cosquín 1172 / Buenos Aires

En julio de 1965 y en enero de 1966 se han desarrollado en Varsovia dos procesos contra críticos de izquierda anteriormente expulsados del Partido Obrero Unificado Polaco; en el primero fue juzgado Karol Modzelewski, dirigente de la juventud universitaria de Varsovia ya en octubre de 1956 e hijo del Primer Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de Polonia, y Jacek Kuron, también dirigente universitario e hijo de un viejo cuadro del partido. Fueron condenados, respectivamente, a tres años y medio y a tres años de reclusión [1].

En el curso del segundo proceso fueron juzgados Ludwik Haas, Romuald Smiech y Kazimierz Badowski, y condenados a penas similares. Luego de varias protestas internacionales, entre las que figuraron las del Vietnam Day Committee de la Universidad de Berkeley y la carta abierta de Isaac Deutscher a Gomulka, Haas fue puesto en libertad en setiembre de 1966 por razones de salud. Dirigente trotskista antes de la segunda guerra mundial, L. Haas había sido arrestado en 1939 después de la ocupación soviética de parte de Polonia en función del pacto Ribbentropp-Molotov y la agresión hitleriana y, luego de 17 años de deportación, había regresado a Polonia en 1956 continuando la lucha por sus ideas. Haas constituyó probablemente uno de los nexos entre la tradición de la oposición polaca de izquierda (en la cual, antes de la

guerra, había participado también Deutscher) y la actual tendencia análoga difundida en algunos estratos de la juventud. Kuron y Modzelewski, como se verá, retoman explícitamente el programa de la oposición soviética de 1926-27 y rescatan algunos de los criterios de análisis trotskista de la burocracia y de la crítica del stalinismo.

La batalla de Kuron y Modzelewski se ha desarrollado esencialmente como una autocrítica y una revisión de la actitud "unitaria" asumida en octubre de 1956 por un conjunto heterogéneo de fuerzas de la sociedad polaca: en aquella ocasión se habían mezclado en la lucha contra el stalinismo y la amenaza de la intervención militar soviética diversos grupos; algunos criticaban desde la izquierda al régimen burocrático y a la URSS, otros auspiciaban una revisión "liberal" del sistema, en el sentido yugoeslavo, ampliándose el espectro hasta grupos católicos y burgueses. Esto tuvo como resultante la mediación del ala más liberalizante de la burocracia que bajo la dirección de Gomulka conquistó el poder, a través de la cual se dio satisfacción a algunos de los reclamos más urgentes (atenuación del régimen policial, aumento de los salarios reales, afirmación de la independencia nacional, etc.) y luego se buscó mantener el poder a través de compromisos y juegos de equilibrio, absorbiendo a los stalinistas vencidos y buscando recompensar la economía en crisis.

Pero, la mantención del estrangulamiento político y económico, el limitado reconocimiento de la necesidad de un desarrollo democrático, del que puede ser tomado como ejemplo la gradual restricción de la efectiva autonomía e influencia del movimiento de los consejos obreros surgidos al calor del octubre polaco, llevaban, por un lado, a la agudización de la crisis económica y social y, por otro, a la liquidación del agrupamiento político de 1956 y a la formación de una tendencia de izquierda autónoma. Muy pronto la actitud crítica antiburocrática de Kuron y Modzelewski les acarrearía la expulsión del POUP y de las organizaciones juveniles y las primeras

molestias administrativas; en noviembre de 1964 la policía secuestra un manuscrito que contiene la exposición de las principales críticas y tesis programáticas de los opositores, cuyo contenido, posiblemente, fue expresado en la *Carta abierta al* POUP que presentamos en la edición italiana, y que constituía una apelación a los afiliados al POUP contra las medidas que se habían tomado en su contra y una respuesta a las deformaciones de sus ideas difundidas por aquellos que los habían expulsado. La publicación de la Carta —contra la voluntad de sus autores— en un revista de emigrados polacos, provoca luego el proceso y las condenas a las que hemos hecho referencia anteriormente. El texto fue traducido al francés por el dirigente trotskista Pierre Frank para la edición de la IV Internacional, en cuyo prefacio, aunque manifestando ciertas reservas sobre las cuales volveremos más adelante, reconoció una afinidad entre las posiciones trotskistas y las de los dos escritores polacos.

Téngase en cuenta que el texto original no ha sido revisado y aún menos actualizado por los autores, por lo que presenta algunas carencias tanto en la redacción como en el aparato de documentación, datos, cifras, etc.

El trabajo se desarrolla orgánicamente a través del análisis del rol social de la burocracia y la consiguiente puesta en discusión de la definición oficial de Polonia como "país socialista". Tesis ésta que reposa en la identificación de propiedad social y de propiedad estatal de los medios de producción y por lo tanto en el cambio de un concepto político-económico por un concepto jurídico. Más allá de la forma, es necesario determinar con claridad quien ejerce una efectiva influencia sobre el conjunto de las decisiones económicas, y por lo tanto, en un régimen de economía nacionalizada, sobre el Estado-propietario. En este punto los autores señalan la presencia (capitalismo moderno) o, sin más, la dominancia (modo de producción asiático) de la propiedad estatal en regímenes no socialistas en los cuales el obrero no tiene ningún control sobre el producto de su trabajo, y

establecen una confrontación con los países de "democracia popular", en los que es fácilmente verificable la existencia de una "elite del poder" compuesta por los vértices del aparato estatal y del partido (único), que no es puesta bajo el efectivo control popular, sobre todo por parte de los productores, y que decide unilateralmente el empleo de los medios de producción y la relación acumulación-consumo. Queda, sin embargo, fuera de este análisis, un elemento que consideramos muy importante, como se verá mejor seguidamente, es decir la distinción entre dos modos específicos de funcionamiento de la economía industrial, el competitivo (si bien lejano al modelo de libre-competencia) y el no competitivo (o, si se prefiere, con planificación integral).

En efecto, si bien cierto grado de planificación y de intervención estatal está cada vez más presente en los regímenes capitalistas, se dan subordinados y en función de los mecanismos de obtención de las ganancias y de las leyes específicas del ciclo y de la competencia entre las diversas empresas y los distintos estratos de las empresas a niveles diferenciados de productividad y de ganancia, mientras que en los países "socialistas" el mecanismo de acumulación es radicalmente diferente, por más que se busque revitalizar a cada empresa individualmente y en nombre de la ganancia. Estas tendencias no parecen haber mellado la especificidad del régimen. En todo caso este orden de problemas está en desajuste respecto a la constitución de un estado burocrático, que por largo tiempo, coincidió con un régimen interno de rígida planificación centralizada.

Debido a ello, la burocracia no neutraliza, al menos en un primer momento, la diferencia radical de los dos mecanismos económicos y de los dos diferentes ciclos. Llegado a este punto, dejamos abierto el discurso sobre la evolución a más largo alcance de un régimen burocrático hacia el restablecimiento de formas de mercado y de ganancia.

El discurso de Kuron y Modzelewski se refiere más al

rol social de la *burocracia política central*, no partícipe del proceso tecnológico de producción ("improductiva") pero, en cambio, garantizadora del mantenimiento de un determinado tipo de relaciones de producción a costa de la plusvalía social. Aquí la argumentación arriba a dos puntos cruciales: 1) el trabajo pagado de los operarios corresponde al mínimo vital en un contexto histórico de necesidades dado y la plusvalía es destinada en parte a una acumulación que no se configura (dado el bajo y obligado nivel de salarios) como un fin específico de su clase y en parte al mantenimiento del régimen vigente (policía, burocracia política, gastos culturales y propagandísticos, etc.); 2) la distribución del plusproducto y la relación acumulación-consumo no son decididos por los productores, sino por un poder extraño e incontrolable.

De aquí deriva que el obrero es explotado y que vende su fuerza de trabajo a quienes detentan los medios de producción: burocracia política central, propietaria colectiva (no conjunto de propietarios individuales) de ellos y que, aparte de un pequeño y no significativo consumo de bienes de lujo, quiere realizar sus propios objetivos de producción. Detengámonos a considerar las tesis de los dos estudiosos polacos.

La comparación por ellos establecida entre el conjunto de los capitalistas y el capitalista colectivo-burocrático lleva a la abolición de la razón misma de la producción capitalista, es decir la realización de niveles diferentes de ganancias según la eficiencia y dimensión de las empresas. A partir de esto, Kuron y Modzelewski hacen una distinción entre los fines de clase del régimen capitalista y aquellos del régimen burocrático: el primero tiende a la máxima ganancia y considera como un mal necesario al aumento del consumo de las masas trabajadoras, indispensable para lograr una salida para el acrecentamiento de los capitales; el segundo tiende a aumentar el aparato productivo y la acumulación al máximo, no tiene problemas de superproducción ni de pre-

cios, es comprador monopolista de la fuerza de trabajo y de los productos de los sectores no estatales (agricultura), apunta a la *producción por la producción misma.*

Esta se manifestaría como búsqueda del plusproducto en su forma física y en el aumento de la producción y tendría como finalidad reforzar en el plano nacional e internacional una clase cuyo poder se identifica con la magnitud del capital nacional. Los autores distinguen cuidadosamente la burocracia propiamente dicha de los estratos tecnocráticos, que también perciben una cuota relevante de la parte de plusvalía destinada a las funciones improductivas (de vigilancia, organización y represión, de mantenimiento del sistema "tout court"); la tecnocracia no es autónoma sino "comprada" en el mercado de trabajo como los obreros, y está privada de poderes decisionales propios. Sólo en Yugoeslavia se ha realizado un compromiso entre la tecnocracia y la burocracia central, que ha atribuido a los primeros (y consiguientemente también a ciertos tipos de industrias de consumo) nuevas posibilidades de desarrollo y de influencia. Esto obviamente no tiene nada que ver con una real democratización, dado que tampoco una autogestión limitada en el interior de cada empresa en particular disminuye la extrañación de la clase trabajadora respecto a los centros de poder nacional. La gestión obrera en la empresa exige inmediatamente una democracia obrera total a nivel del Estado.

Kuron y Modzelewski reconocen que la burocracia ha tenido una función progresiva en la edificación de una base industrial, en la fase de la acumulación originaria en un país agrario y subdesarrollado. Los intereses de la burocracia coincidían entonces con los intereses del desarrollo económico y de toda la sociedad, contra toda instancia corporativa de los obreros, de los campesinos, los intelectuales y los tecnócratas. En tales períodos históricos es eficaz la máxima concentración del poder económico y político, y la exclusión de la influencia del mercado. De tal manera, la burocracia, como monopolista del poder

social y político y no sólo económico, hacía de la industrialización su propio interés de clase y su instrumento de afirmación y consolidación. Pero bien pronto esta correspondencia entre el fin de clase de la industrialización y los intereses sociales generales deja de darse, precisamente en el momento en que se va configurando firmemente la base de una crisis económica profunda. Aparece entonces una contradicción entre la producción (concentrada en el sector de bienes instrumentales) y el bajo nivel de consumo, que no se expresa como dificultad para realizar el producto en el mercado, sino como limitación para el logro de la reproducción ampliada, como explotación incompleta del potencial industrial y como reducción de la producción a pesar de la intensificación de las inversiones.

Algunas de las causas inmediatas de esta reducción en Polonia son cuidadosamente evaluadas (inflación por desproporción entre la disponibilidad de bienes de consumo y el nivel nominal de los salarios, costos y derroches de materias primas, escasa calidad de los productos, etc.), las que remiten en general a la inadecuación de la producción respecto a las necesidades y a la mala utilización de los factores intensivos y cualitativos de la expansión. Estas críticas están hoy bastante difundidas en los países de democracia popular y en la URSS y se ha buscado hacer frente a ellas de diferentes maneras, por ejemplo con propuestas del tipo de las de Liberman. Pero la solución propuesta por Kuron y Modzelewski queda netamente fuera del cuadro de un régimen burocrático: no son los retoques internos al sistema los que pueden superar radicalmente la crisis, sino una ruptura de sus mecanismos institucionales y un cambio de sus fines productivos y, por lo tanto, el fin del dominio de clase de la burocracia y el pasaje a la producción para el consumo. En la explosión de 1956 se mezclaron, en una única y heterogénea oposición al régimen, diversos componentes: la izquierda y el movimiento de los consejos obreros no lograron diferenciarse de la corriente tecnocrática

(que buscaba la descentralización del poder de decisión del centro a la empresa, sin trasladar, sin embargo, el poder real a la clase obrera) y de la burocracia liberal, antiestalinista y nacionalista, pero no específicamente proletaria. Esto explica la "dictadura reformada" de la burocracia y de Gomulka, la cual, sin embargo, no hizo más que prorrogar por pocos años la crisis social general del sistema, inmanente a la profunda contradictoriedad de sus relaciones de producción.

En este punto los autores, luego de una disgresión sobre las condiciones internacionales que permiten a la burocracia afirmarse (y que retoma explícitamente los análisis de Trotski) y sobre la dramática *impasse* en la que se encuentra hoy el movimiento obrero internacional por la renovada presión imperialista y el freno que opone la burocracia socialista al desarrollo de la iniciativa revolucionaria en el mundo capitalista y colonial, trazan las líneas esenciales de un programa obrero sobre las cuales volveremos más adelante.

En nuestra opinión los autores no han logrado demostrar convincentemente la naturaleza de clase de la burocracia y la especificidad de las relaciones y de los fines de producción de un régimen burocrático. Ellos describen, y con eficacia, la explotación del proletariado y su extrañación respecto al poder; explican ejemplarmente el rol progresista de la burocracia en la democratización de las relaciones arcaicas de producción y en la iniciación del proceso de industrialización, así como su posterior entrada en contradicción con la sociedad en desarrollo. Pero el concepto de *producción por la producción* parece más una extrapolación de cierta característica de la industrialización pesada stalinista que un signo distintivo de un régimen económico. Basta observar cómo la cristalización de la burocracia en la URSS había precedido al período que podría ser metafóricamente definido como el de la "producción por la producción" (más aún, originariamente, fue la oposición de izquierda de Trotski y de Preobrazhenski la que solicitaba, contra

Stalin y Bujarin, una inversión más fuerte en los sectores de base y la adopción de una planificación centralizada); cómo los años del advenimiento al poder de la burocracia en los países de democracia popular presentaban a los grupos burocráticos nacionales fuertemente subalternizados a los soviéticos (países enteros, como por ejemplo Rumania, orientados a la producción ligera y agrícola complementaria); cómo el actual encauzamiento de muchos países de democracia popular y de la misma URSS hacia el desarrollo de la industria de bienes de consumo no está acompañado de una efectiva desburocratización. Y quedaría por discutir el término mismo de "producción para la producción", equívoco científicamente y en su origen (Tugan-Baranowski).

Podríamos preguntarnos si no es más simple, aunque aproximativo, considerar la relación burocracia-socialismo como un conflicto interno al proceso de construcción del socialismo, resoluble a través de una dura lucha política que permanece en el ámbito de un modo de producción sustancialmente invariable, tanto más puesto que los autores en ningún lugar definen al régimen burocrático como una restauración del capitalismo. La contribución de Kuron y Modzelewski se entronca indudablemente con una tradición y un debate que fue muy intenso en la izquierda del movimiento obrero entre 1925 y el comienzo de la segunda guerra mundial, y que culminó con la gran polémica de 1939-1940 entre Trotski, Burnham, Rizzi y Schachtman.

Trotsky, como es conocido, en su trabajo *La revolución traicionada* había relacionado el origen de la burocracia con el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas de la URSS, con la permanente contradicción, en tales condiciones, entre los objetivos socialistas y los métodos burgueses (propiedad colectiva de los medios de producción por un lado, criterios burgueses de distribución según el trabajo y un Estado burgués sin burguesía, según la definición de Lenin, por otro). La burocracia que crece en estas contradicciones se nutre de ellas, y las reproduce

en el sentido de que su régimen, desarrollando las fuerzas productivas "crea las bases económicas del socialismo... y aplicando al extremo las normas burguesas de distribución prepara la restauración del capitalismo. Así, las normas burguesas deberán extenderse, de una u otra manera a los medios de producción, o, por el contrario, las normas de distribución deberán ser adaptadas a la propiedad socialista". Trotski rechaza siempre toda concepción del régimen soviético como capitalismo de Estado (Kautsky, Korsch, Bordiga) o como colectivismo burocrático (Rizzi, Schachtman) o como dictadura tecnocrática (Burnham), subrayando la naturaleza de *clase política* y no económica de la burocracia, análoga, aunque más independiente, al estrato existente en la sociedad capitalista, y paradójicamente ligado, como a su raíz a la propiedad pública de los medios de producción, a la que, al mismo tiempo, mina. La burocracia esconde una tendencia a la reproducción y a la estabilización como clase económica, es decir, a la formación de una nueva burguesía. A Bruno Rizzi, que en su *Bureaucratisation du monde* (París, 1939) había expresado la tesis de un *colectivismo burocrático* como época de transición entre el capitalismo y el socialismo, en la cual la burocracia administra los medios de producción y recibe las ganancias en forma colectiva por medio del Estado —al que ingresa por entero el plusvalor nacional y luego lo distribuye entre los mismos funcionarios [2]—. Trotski le objeta: 1) que no existe un fenómeno semejante en escala mundial y que es imposible asimilar los procesos soviéticos de burocratización a aquellos de otro género como el dirigismo estatal en los países fascistas o la separación de la propiedad del control de las empresas en los países capitalistas "democráticos" (por ejemplo, en la América del New Deal)— la objeción se repetirá también en la posterior polémica con Burnham, quien, dualmente, sostenía por un lado posiciones trotskistas y por otro hacía un descarado plagio de Rizzi, para terminar por último como sostenedor de Goldwater; 2) que una clase no puede ser determinada

sólo por su participación en la renta nacional, sino también, y sobre todo, por su rol independiente en el fundamento económico de la sociedad, y por una forma particular de propiedad.

En suma, una clase corresponde a un modo de producción, al menos tendencialmente internacional, lo que no se da en lo que concierne a la burocracia. Por otra parte, señala Pierre Naville en una reseña crítica sobre este tema, "Rizzi ha buscado la fuente del poder burocrático en una determinada relación de explotación, pero como su análisis parte de una concatenación de propiedades mal determinadas y ambiguas (posesión de la economía por parte del Estado y posesión del Estado por la burocracia), está obligado también él a recurrir finalmente a la fuerza pura para explicar la estabilidad, al menos aparente, de la explotación burocrática" (en *Arguments*, IV, 17; cfr. *Tempi moderni*, V, 8, enero-marzo 1962).

En el curso de la cada vez más áspera polémica desarrollada entre Trotski y sus seguidores Burnham y Schachtman entre setiembre de 1939 y mayo de 1940 (para los textos ver *En defensa del marxismo*), aquél hacía notar cómo hasta las acciones más odiosas de la burocracia soviética, como por ejemplo la ocupación de Polonia luego del acuerdo Molotov-von Ribbentropp, presenta la ambigüedad de suponer la adopción de medidas de nacionalización y colectivización, es decir la extensión de las condiciones del socialismo, pero a través y dentro de una brutal violación de los principios socialistas internacionalistas. La postguerra clarificaría, escribía Trotski en 1939, si se arribara a una revolución proletaria única en Occidente o a la extensión total de la burocracia y, por lo tanto, al reconocimiento del carácter utópico aún por muchos años del marxismo-leninismo. Y nos parece que la realidad siguió un poco un camino intermedio, no se verificó la revolución en Occidente, pero no debemos quedarnos actualmente a la espera de un socialismo mesiánico; innegablemente el desarrollo del movimiento revolucionario mundial

ha sido más rico de contradicciones que las que se podía prever en 1939.

Kuron y Modzelewski retoman algunos elementos de la teoría del colectivismo burocrático y de ella reproducen sus limitaciones, pero buscando definir algunas particularidades del régimen económico, no en lo relativo al modo de apropiación de la plusvalía, sino sobre todo en lo concerniente a la selección de los consumos y a la proporción de la acumulación en el sector I y en el II. Nosotros pensamos que la permanente indecisión de Trotski en la atribución de connotaciones de clase verdadera a la burocracia (y por lo tanto en la caracterización del régimen burocrático como un modo de producción), ocultaba un sano elemento analítico, explícito por otra parte en su concepción de la burocracia como estrato contradictorio que resguarda las bases del socialismo y simultáneamente tiende a estabilizarse como nueva burguesía.

En realidad nos parece que, por lo que se puede distinguir luego de algunos años de experiencia, especialmente la yugoeslava, pero a la que parecen acercarse las de otros países de democracia popular y la misma URSS, el verdadero peligro es el de la estabilización de privilegios burocráticos y contemporáneamente el ejercicio de un mecanismo de planificación congestionado e inadecuado respecto al consumo interno y a la competencia del mundo capitalista, a través de la recurrencia creciente a los mecanismos de mercado. La extensión de poderes decisionales a la dirección de la empresa (nunca a los obreros), la adopción de índices de ganancia, la orientación creciente hacia el mercado capitalista mundial que presiona desde el exterior empujando a los países de democracia popular hacia el camino de Yugoeslavia, donde, a través de una profunda distorsión de las motivaciones originarias de la autogestión, se está llegando al mercado libre de la fuerza de trabajo y a los grandes complejos que se autofinancian, netamente diferenciados por estratos y niveles de ganancias y de productividad, con la consiguiente formación de los desequilibrios territoriales y entre sectores avan-

zados y atrasados, en un régimen de precios adaptado al mercado internacional.

La mistificación de la descentralización parajrusceviana y la deformación de la autogestión, inevitable por su forzada limitación a la empresa singular (sin que se traduzca en un efectivo poder obrero, en una gestión democrática de las relaciones internas, de la acumulación y de las relaciones internacionales) van coincidiendo en una orientación común que arriesga quebrar la precaria unidad de la gestión económico-social de cada país (después de haberles impedido cualquier integración supranacional, ver los límites del COMECON), presentádolos en condiciones de inferioridad en el mercado mundial frente a los países capitalistas cuyos niveles medios de ganancia y de productividad son considerablemente superiores.

El verdadero peligro no está en la formación de un supercartels monopolista político-económico de la burocracia, sino en que la burocracia pueda sentar las bases de una restauración de la economía competitiva, aunque sea también planificada y tecnocrática, en el marco de un mercado único mundial dominado por los colosos imperialistas. No se puede olvidar que el factor en última instancia determinante para el desarrollo y la permanencia de los procesos de burocratización del movimiento obrero es la existencia (y la expansión) del mercado capitalista. La "competencia" de los dos campos no tiene sólo el lado rosa pintado por Jruschev y por sus más cautos seguidores, ella supone también la influencia del mercado capitalista sobre la economía socialista burocratizada y no integrada, en el sentido de acentuar la burocratización y de empujar lentamente a soluciones de tipo yugoeslavo para luego someterla directamente, incluso a través de la ruptura del monopolio estatal del comercio exterior.

La lógica de la ganancia y del mercado es internacional; cuando se entra en el juego se lo debe aceptar a fondo. No se trata, obviamente, de fenómenos "naturales"; como lo prueban la diversidad de ritmos de los procesos en Yugoeslavia y en los otros países de democracia popular

y las tendencias de inverso sentido, antiburocráticas, que aparecen en Cuba y en China. Es necesario considerar tanto las tendencias internas, autóctonas, a la burocratización como la influencia del mercado mundial (capitalista) como datos modificables, reversibles, a través, se entiende, de una férrea voluntad política y una programación económica fundada en el tesón y el poder democrático de la clase obrera y de las masas campesinas.

Sobre este punto se puede encontrar fácilmente un acuerdo con los autores polacos, que elaboran el programa de una "revolución política" contra el régimen burocrático, con vistas a crear las condiciones de un auténtico desarrollo socialista.

Kuron y Modzelewski proponen, en efecto, una vía de salida de la crisis social y del régimen burocrático a través de la gestión obrera de la producción y de la repartición del producto entre los salarios, los fondos de acumulación y los servicios sociales. La explotación no está en la existencia de una diferencia entre el salario y el valor producto, sino en la falta de control sobre el destino de esta diferencia. La instrumentación de esta gestión obrera de la economía se liga a la viva, aunque trunca, experiencia de los consejos obreros de 1956-58 y se configura en los diferentes niveles en forma de democracia directa y soviética (consejos, asambleas de delegados, con revocabilidad del mandato y unificación de los poderes económicos, legislativos y ejecutivos). Una garantía del funcionamiento democrático del sistema estaría dada posteriormente por la pluralidad de los partidos obreros y por la efectiva posibilidad de proponer orientaciones económicas y esquemas de presupuesto nacional de alternativa, fundados en la libre investigación y expresión en todos los campos del pensamiento. El régimen parlamentario es, en cambio, explícitamente condenado con una rigurosa fundamentación marxista que no es fácil encontrar en el lenguaje de los partidos comunistas oficiales. Se reclama, finalmente, el pleno ejercicio de la libertad sindical y del derecho de protesta y la sustitución del ejército permanente

por un sistema mixto de cuerpos especializados y de milicias obreras.

Algunas importantes consideraciones están dedicadas también al problema de la relación con los campesinos, sobre el que pesa el discutido planteo del concepto de "producción para el consumo" elegido como fin específico del nuevo régimen obrero; quizás la solución de la relación obreros-campesinos en Polonia no sea tan simple. Pero el punto clave está contenido en las últimas páginas del trabajo, donde establecen el nexo entre la revolución política antiburocrática en Polonia y la exigencia de un movimiento análogo en la URSS y en los otros "países burocráticos industrializados". En términos generales la revolución antiburocrática aparece como un momento del movimiento revolucionario mundial, paralelo a los intereses de las fuerzas obreras y de los países subdesarrollados en su común hostilidad a los esfuerzos de la burocracia por estabilizar la situación interna e internacional. La burocracia se vuelve inevitablemente defensora del status quo, temerosa de todo cambio que pueda atentar contra los equilibrios internos, y partidaria de la repartición del mundo en esferas de influencia. Nos queda por agregar que el equilibrio internacional, además de ser un factor conservador, es un espejismo, dado que el imperialismo tiene real interés en extender su propia influencia a expensas de los vacíos de iniciativas revolucionarias y de la desintegración latente de las economías gestadas burocráticamente. Derrotar a la burocracia es entonces indispensable para defender con éxito los resultados ya conquistados y profundizar la lucha de clases y la expansión del campo socialista. Que un grupo político operante en el interior del "campo socialista" llegue a estas conclusiones nos parece un hecho nuevo y de gran importancia.

AUGUSTO ILLUMINATI

Por decisión del Comité de Sección de la Universidad de Varsovia del 24 de noviembre de 1964, hemos sido expulsados del partido. Además, el 24 de diciembre de 1964, por decisión del Comité de la Universidad del ZMS (Unión de Juventudes Socialistas), Karol Modzelewsky ha sido igualmente excluido de la organización de juventudes. Estas exclusiones han sido motivadas por haber redactado un informe analizando la situación actual en Polonia y dando un proyecto de programa. Este texto ha sido incautado el 14 de noviembre, día de nuestra detención, por los órganos de la Seguridad. El Servicio de Investigaciones del Ministerio del Interior sigue en este asunto una información por infracción al artículo 159, § 1 y 2, del Código Penal de 1932. En relación con nuestro asunto, han sido excluidos del partido los camaradas Stanislaw Gomulka y Joanna Majerczyk y el camarada Eugeniusz Chyla ha sido excluido de la lista de candidatos al partido. Los camaradas Gomulka y Chyla han sido excluidos asimismo de la Unión de Juventudes Socialistas. Los camaradas Gomulka y Chyla no han participado en la elaboración de nuestro texto, pero se les acusa de haberse solidarizado parcialmente con él, así como con nuestras opiniones y actitud. Esta carta abierta está escrita únicamente bajo nuestra propia iniciativa y en nuestro nombre y no en el de los otros camaradas excluidos del partido en relación con nuestro asunto.

Las instancias del partido y las autoridades del Ministerio del Interior han dado a este asunto una extraordinaria resonancia. No queremos hablar de las informaciones dadas públicamente por ciertos militantes del partido y altos funcionarios del Ministerio del Interior, fuera de la Universidad. En el seno de la Universidad, dichas informaciones han sido expuestas en una reunión del buró del ZSP (Asociación de Estudiantes), en una reunión del buró de la célula del partido de la residencia de estudiantes de la calle Kickiego, en una reunión del Comité de Universidad de la Unión de Juventudes Socialistas, en una conferencia electoral de la sección de Universidades de las Juventudes Socialistas. Reuniones consagradas a nuestro asunto han tenido lugar en las células del partido de las Facultades de Psicología, Pedagogía, Historia, Economía Política (dos veces) y Filosofía. La resolución decidiendo nuestra exclusión del partido habiendo sido tomada en nombre de la sección universitaria, debe por lo tanto ser llevada al conocimiento de todos sus miembros. Esperamos que nuestro asunto sea entonces discutido en todas las células de la Facultad y en las reuniones de la Unión de Juventudes Socialistas.

No siendo ya miembros del partido, no tenemos la posibilidad de participar en dichas reuniones. No podemos por lo tanto contestar a las críticas de que somos objeto, ni siquiera corregir la versión oficial que ha deformado nuestras opiniones y las ha presentado falsamente. La mayoría de los miembros del partido en la Universidad no han leído nuestro texto y no conocen de él más que lo que quieren decir los secretarios y los activistas del Comité de la Universidad, quienes en este terreno poseen el monopolio de la información para el Partido y más aún para los miembros de las Juventudes Socialistas, hasta tal punto que el Comité Universitario de las mismas si bien ha debido pronunciarse sobre la exclusión de tres camaradas, no ha recibido nuestro texto y ha tenido que contentarse del informe del Buró Ejecutivo y de la resolución de Pleno del Comité Universitario del partido.

Es sabido que mediante la cita de tal o cual frase arbitrariarmente desligada de su contexto, se puede presentar cualquier documento de forma inexacta. Desde nuestro punto de vista, los informes oficiales sobre nuestro texto se caracterizan por su gran libertad en relación con el original. Citando algunas —a lo sumo una veintena— de frases seleccionadas ad hoc, *se crea la impresión de una masa de consignas violentas, demagógicas y sin fundamento que —cosa incomprensible— necesita 128 páginas mecanografiadas. Sin embargo, se diga lo que se diga sobre nuestro análisis y sobre el valor político de las conclusiones que de él sacamos, constituye una construcción lógica. No se puede demoler más que criticando el conjunto del razonamiento y no impresionando el lector o el oyente con citas a las que, al separarlas de su contexto, se da un sentido contrario al que en realidad tienen. Además, la relación oficial no solamente silencia el análisis contenido en el texto, sino que se contenta con oponer algunas banalidades a su parte programática que tiene sin embargo una importancia decisiva en cuanto a la apreciación del carácter político de este documento se refiere. Los informes y las declaraciones oficiales se sirven, en fin, de insultos en relación con nuestro texto ("demagogia primaria"), y con el nivel intelectual y moral de sus autores ("hipocresía", "falta de honestidad", e incluso "falta de valor cívico"). Hay falsificaciones que nos es difícil pensar que se deben a la inconsciencia (se nos imputa que reclamamos que el obrero conserve para él la integridad del producto de su trabajo, se nos imputa que incitamos a los obreros a disminuir el rendimiento del trabajo para reducir la explotación).*

Ante esta situación, creemos necesario informar a los miembros del partido y de las Juventudes Socialistas de la Universidad de Varsovia de nuestras verdaderas opiniones y de la actitud política que de ellas se desprende y esto, de la única forma que disponemos, o sea mediante una carta abierta. Nos dirigimos a los miembros del partido y a los de la organización de juventudes dirigida por

el partido, aun cuando nuestras opiniones y nuestros escritos han sido calificados de "antipartido". Si dicho término, tan usado, significa que adoptamos una actitud contraria a la práctica política del partido y que apreciamos negativamente su papel social, no protestamos contra su empleo en relación con nosotros. A la acusación de hipocresía y de deshonestidad en relación con nuestros camaradas, respondemos lo siguiente:

1) Hemos llegado a nuestra posición actual progresivamente y mediante una lenta evolución de nuestras opiniones, parcialmente en el curso del trabajo sobre nuestro texto, al que hemos consagrado cerca de seis meses, pero principalmente bajo la influencia de la situación social y política en el país y de la experiencia de nuestro trabajo en el partido y en las Juventudes Socialistas, en el transcurso del último año (clausura del club de discusión, actitud del partido en relación con la carta de los 34 intelectuales y con el mitin del 14 de abril de 1964, liquidación de la discusión en las Juventudes Socialistas con procedimientos exclusivamente disciplinarios, etc.).

2) Nuestras opiniones tienen un carácter oposicionista en relación con la política actual de la dirección del partido, lo que era conocido de todos, ya que lo proclamábamos públicamente tanto en el club de discusión como en las reuniones del partido y de las Juventudes Socialistas, a menudo en contra de las opiniones de las autoridades del partido. Esto nos ha valido advertencias y sanciones por parte de gentes que se abstenían de dar a conocer abiertamente sus opiniones (en el club político, por ejemplo) y que nos reprochan ahora el ser hipócritas. Finalmente se nos ha retirado la posibilidad —antes incluso de nuestra expulsión del partido y de las Juventudes Socialistas— de realizar actividades políticas en el seno de las juventudes, lo que en la Universidad significa la imposibilidad de toda actividad política, en general.

3) Teníamos la intención, después de la corrección y puesta al día de nuestro texto, de dar a conocer las tesis que contiene en todas las tribunas posibles y después,

debido a estos motivos políticos, devolver nuestros carnets del partido. El texto no ha sido terminado (faltan dos capítulos y, además, los capítulos económicos constituyen más bien un esbozo que la forma definitiva del análisis y tenían que ser corregidos). Tras la intervención del Ministerio del Interior, las autoridades del partido se han apoderado del asunto y hemos sido expulsados del partido y de las Juventudes Socialistas.

En estas condiciones, consideramos el hecho de nuestra salida del partido como perfectamente comprensible y no objeto de discusiones, y esto, independientemente de la forma y de las circunstancias en las que ha tenido lugar. Esto significa que nos hemos separado políticamente de nuestros camaradas del partido y de las Juventudes Socialistas. Pero las divergencias de opiniones no afectan en absoluto nuestra estima por sus convicciones y por ellos mismos. Esta estima que, incluso si existen profundas divergencias sobre los principios y las actitudes políticas, exige una información honesta, nos incita a presentar a los miembros del partido y de las Juventudes Socialistas de la Universidad de Varsovia un resumen del análisis y del programa contenidos en el texto incautado por el Ministerio del Interior y que contiene nuestra plataforma ideológica actual.

I. El poder de la burocracia

Según la doctrina oficial, vivimos en un país socialista. Esta tesis se basa en la identificación de la propiedad de Estado de los medios de producción con la *propiedad social.* El acto de nacionalización habría transferido la industria, los transportes y los Bancos a la sociedad en plena propiedad y las relaciones de producción basándose en la propiedad social serían por definición socialistas.

Este razonamiento parece ser marxista. En realidad, se ha introducido en la teoría marxista un elemento que le es profundamente extraño, o sea la concepción formalista y jurídica de la propiedad. La noción de propiedad del Estado puede disimular contenidos diferentes según sea el carácter de clase del Estado. El sector estatal de la economía nacional en los países capitalistas no tiene nada en común con la propiedad social. Esto es así no solamente porque existen, además de ese sector, sociedades capitalistas privadas, sino ante todo porque el obrero de la fábrica que pertenece al Estado está privado de toda propiedad real, porque no tiene la menor influencia sobre el Estado y no posee, por consiguiente, ningún control sobre su trabajo y sobre el producto de éste. La historia conoce ejemplos de sociedades de clases, con sus antagonismos, en los cuales la propiedad estatal de los medios de producción era predominante (el modo de producción "asiático").

La propiedad estatal de los medios de producción no es sino una de las formas de la propiedad. Pertenece a los grupos sociales a los que pertenece el Estado. En un sistema de economía nacionalizada, no posee una influencia sobre el conjunto de las decisiones económicas (y por lo tanto sobre el uso de los medios de producción y sobre el reparto y el empleo del producto social) más que quien participa en las decisiones de los poderes públicos o puede influirlas. El poder político está ligado al poder sobre el proceso de producción y el reparto.

¿A quién pertenece el poder en nuestro Estado? A un solo partido, prácticamente monopolista, el Partido Obrero Unificado Polaco. Todas las decisiones esenciales se toman primero en el partido y solamente luego en los organismos oficiales del poder estatal. Ninguna decisión importante puede tomarse y realizarse sin haber sido primero aprobada por las autoridades del partido. Esto es lo que se llama papel dirigente del partido y, puesto que el partido monopolista se considera como el representante de los intereses de la clase obrera, su poder debe garantizar el de la clase obrera.

Sin embargo, si no queremos apreciar el sistema según lo que de él piensan y dicen sus dirigentes, tenemos que analizar las posibilidades que tiene la clase obrera para influir sobre las decisiones del poder estatal.

Fuera del partido, no tiene ninguna. El partido que gobierna posee el monopolio del poder. La clase obrera no tiene la posibilidad de organizarse formando otras partidos y por lo tanto de formular y propagar otros programas, ni la de luchar por la realización de otras variantes en el reparto de la renta nacional, y de otras concepciones políticas fuera del programa y las concepciones del Partido Obrero Unificado Polaco. Todo el aparato del Estado, con sus órganos administrativos, su policía política, su organización judicial y las organizaciones políticas dirigidas por el partido aplastan todo conato, todo intento de poner en duda el papel dirigente del partido y velan por que se respete esta prohibición.

Los miembros del partido, que superan el millón, son simples ciudadanos como los demás; entre ellos, sólo hay unos centenares de miles de obreros. ¿Qué posibilidades tienen de influir sobre las decisiones de las autoridades del partido y de esta forma sobre los poderes del Estado? El partido no solamente es monopolista hacia el exterior, sino que su organización interna se basa en el mismo principio. Toda fracción, todo grupo con una plataforma particular, toda corriente política organizada están prohibidos. El militante de base tiene el derecho a tener una opinión, pero no tiene derecho a tener lazos organizativos con otros miembros del partido que piensan como él sobre la base de un programa común, ni de difundir dichas ideas comunes, ni de hacer propaganda electoral en el seno del Partido con vistas a su realización. Las elecciones a los cargos dirigentes del partido y la de los delegados a las conferencias y a los congresos se convierten en tales condiciones de mera ficción porque no se realizan sobre la base de plataformas y de programas diferentes (o sea en condiciones que permitan una elección política real), cuando la formación de la iniciativa política de las masas tiene como premisa una organización. Para estas eventuales tentativas de influir sobre las decisiones de la "cumbre", la masa de miembros del partido se ve privada de organización, atomizada, y por lo tanto impotente. La única fuente de iniciativas políticas reside, forzosamente, en las autoridades del partido, o sea en el "aparato". Como todo aparato, éste está organizado de manera jerarquizada. Las informaciones circulan de abajo a arriba y las decisiones, las consignas, de arriba a abajo. Como en todo aparato jerarquizado, en el origen de las decisiones se halla una élite, un grupo de personas que ocupa en la jerarquía puestos de responsabilidad y que elaboran conjuntamente las decisiones fundamentales.

En nuestro sistema, la élite del partido es al mismo tiempo la élite gubernamental, toma las decisiones del poder estatal y en la cumbre de la jerarquía del Estado y del partido se manifiesta generalmente la acumulación

de puestos. Ejerciendo el poder en el Estado, esta jerarquía dispone del conjunto de los medios de producción nacionalizados, decide de la importancia relativa del consumo y de la acumulación, de las inversiones en los sectores elegidos por ella, de la parte de cada grupo social en el consumo de la renta nacional, en fin del reparto y de la utilización de la totalidad del producto social. Las decisiones de la élite son independientes y libres de todo control por parte de la clase obrera y del resto de la sociedad. Ni los obreros, ni el conjunto de los miembros del partido pueden influir en sus decisiones. Las elecciones al Parlamento y a los Consejos Nacionales (organismos de administración local) se convierten en una ficción, ya que sólo existe una lista de candidatos designados por la "cumbre" y que no existe la menor diferencia de programa entre el Partido Obrero Unificado Polaco y los partidos satélites, el Partido Popular y el Partido Demócrata. Llamamos a esta élite del poder partido/Estado, libre de todo control por parte de la sociedad y que toma, con plena independencia, el conjunto de decisiones fundamentales de importancia nacional y el conjunto de decisiones políticas y económicas, la *burocracia política central.*

La pertenencia a la burocracia política central, significa la participación real en las decisiones políticas y económicas fundamentales de importancia nacional. Es prácticamente imposible cifrar de manera precisa la importancia de esta élite; su estimación aproximativa exigiría estudios sociológicos en un terreno que constituye un "tabú" absoluto. Lo más importante para nosotros no es, de todas formas, conocer los efectivos y la organización interna de la burocracia, sino su papel en la sociedad y en el proceso de la producción social. Aun cuando los simples miembros del partido se hallan desorganizados en lo que se refiere a eventuales intentos para influir sobre las decisiones de la burocracia, están, en cambio, bien organizados, en el marco de la disciplina del partido, para le ejecución de las tareas que se les ordenan. Quien se opone es excluido y una vez fuera del partido se ve

en la imposibilidad de actuar, al no tener derecho a organizarse. Así, el partido, que en la cumbre de su jerarquía es, simplemente, la burocracia organizada, se convierte en la base de un instrumento de desorganización de cualquier intento de resistencia y de cualquier intento de la clase obrera de ejercer una influencia sobre el poder. Organiza, al mismo tiempo, la clase obrera y las demás capas sociales en la obediencia a la burocracia. Las demás organizaciones sociales dirigidas por el partido, incluyendo a los sindicatos, desempeñan el mismo papel. Estos últimos, organizaciones tradicionales de autodefensa económica de la clase obrera, sometidos a la dirección de la única potencia política organizada, es decir el partido, se han convertido en un instrumento dócil y pasivo de la burocracia, o dicho de otra manera, del poder político y económico del Estado. La clase obrera está privada de su organización, de su programa y de sus medios de autodefensa.

La burocracia posee, por lo tanto, el conjunto del poder político y económico, privando a la clase obrera no solamente de poder y de control, sino también de los medios de autodefensa. A pesar de esto, los dirigentes de la burocracia se consideran los representantes de los intereses de la clase obrera. Si queremos apreciar el sistema, no según las declaraciones de sus dirigentes, sino a través de los hechos tal como son, debemos analizar la naturaleza de clase de la burocracia. El hecho que ejerza el poder no prejuzga de su naturaleza de clase y no la explica de manera satisfactoria. Lo que es decisivo en este sentido, son las relaciones de producción. Debemos, pues, examinar el proceso de producción y las relaciones en que entran, por una parte la clase obrera, creadora fundamental de la renta nacional y por otra, la burocracia política central, poseedora de los medios de producción.

II. Salario, producto excedente y propiedad

¿Quién crea la renta nacional y cómo se presenta su reparto?

Según la teoría marxista, la renta nacional se crea en el marco de la producción material, o sea en la industria, la construcción, parcialmente en los transportes, en la agricultura, en el artesanado.

El productor de renta nacional en la industria es el trabajador llamado "global", o sea el conjunto de los trabajadores que preparan, ejecutan y aseguran el proceso técnico de la producción, por lo tanto, además de los obreros productores directos o indirectos, los ingenieros y técnicos, dicho de otra manera la "intelligentsia" técnica.

No son trabajadores productivos los que no aseguran el proceso tecnológico de la producción sino que vigilan el mantenimiento de un determinado estado de relaciones entre los hombres en tal proceso, como los vigilantes del trabajo asalariado, la tecnocracia. Es cierto que aseguran, ellos también, la producción, pero en el mismo sentido que los vigilantes de esclavos de la antigüedad, los intendentes de las propiedades feudales y los directores de fábricas capitalistas actualmente. Su tarea consiste en mantener las relaciones de producción existentes y no el proceso material de la producción en sí mismo. (Esta distinción es, claro está, abstracta, porque los vigilantes

cumplen generalmente funciones a la vez técnicas y sociales; sin embargo, en la actividad profesional de un capataz o de un ingeniero medio, las tareas productivas técnicas predominan, mientras que en las de un director predominan las organizaciones o sea, la vigilancia de los hombres y el mantenimiento de un determinado estado de relaciones de producción en la empresa que dirige.)

En la agricultura los trabajadores productivos son los campesinos individuales, los obreros de las granjas de Estado, los miembros, poco numerosos en nuestro país, de las cooperativas y, en el sector urbano de la pequeña producción de objetos de uso corriente, los artesanos.

Estos últimos tiempos, se ha lanzado la tesis según la cual la concepción marxista que limita la creación de la renta nacional a la esfera de la producción material estaba superada. Actualmente la renta nacional sería creada por todos los trabajadores. En el sector servicios, tomado en un sentido amplio (o sea todo lo que no forma parte del sector de la producción material), se satisfacerían indirectamente las necesidades de la producción y del consumo y se organizará la vida de toda la sociedad, o, en otros términos, se respondería por la afectación de una determinada cantidad de trabajo a las necesidades sociales esenciales.

Tal razonamiento no podría justificarse, sin embargo, más que en una sociedad en la que hubiera un intercambio equitativo de productos y servicios; a condición, por consiguiente, que el productor de bienes materiales reciba, bajo forma de servicios devueltos a él mismo y no a un tercero, equivalente de la parte del producto de su trabajo que cede para mantener el sector servicios en el sentido más amplio; y que, además, la acumulación esté subordinada a sus intereses. Si dichas condiciones no están reunidas, calificar todo trabajo (por lo tanto, también el de policía, fiscal, oficial u hotelero), como trabajo productivo, no sirve más que para enmascarar eficazmente la explotación. Razonando así, se podría circunscribir la integralidad de la renta nacional, salvo la parte reservada

a la acumulación, al conjunto de los salarios de todas las categorías de trabajadores, o sea a la remuneración de un "trabajo productivo". Se podría, de la misma manera, enmascarar la explotación que existe en la sociedad capitalista: con excepción del consumo individual de bienes materiales por la clase capitalista (lo cual constituye una fracción ínfima del producto social e incluso de las rentas de esta clase), el conjunto de la renta nacional se disolvería en salarios y rentas de los productores de bienes materiales, en salarios de los otros trabajadores empleados directamente por los capitalistas o por el Estado y en la parte destinada al fondo de acumulación. Tal razonamiento no tendría nada común con un análisis científico objetivo. No sería más que una apología del orden social existente.

Nosotros adoptamos métodos de razonamiento que permiten analizar las contradicciones y no ocultarlas. Por ello, postulamos, siguiendo a Marx, que la renta nacional es el trabajo materializado de los trabajadores productivos en el marco de la producción material. En la base de la acumualción y de los servicios, en un sentido amplio, se encuentra el producto material creado en este sector: el abastecimiento del fondo de acumulación, los gastos de la policía, el ejército, la cultura, la salud, etc., constituyen pues la explotación de la renta nacional. Además de los servicios para los cuales el obrero paga de su bolsillo todo el resto está mantenido gracias al producto no pagado del trabajo de los obreros y de los campesinos, o sea gracias al producto excedente. Debemos, por lo tanto, examinar el reparto de este producto excedente para poder determinar en interés de quién se efectúa su utilización.

Los grupos fundamentales que producen la renta nacional en nuestro país son los obreros y los campesinos individuales. ¿Qué parte toman en el reparto del producto de su trabajo?

Los campesinos individuales llevan el producto de su trabajo al mercado. Pero el 75 % de la producción de

sus fincas es distribuido por intermedio del Estado que compra estos productos a precios que son, en un promedio, 40 % inferiores a los del mercado. Además, si se los compara con los precios de los productos industriales, los precios agrícolas, fijados por el Estado son desfavorables a los campesinos. Dejaremos, por ahora, este problema; volveremos sobre el tema al analizar la situación en el terreno agrícola.

Los *obreros* tienen una participación en la renta nacional determinada ante todo por su *salario*. ¿Qué es, en nuestro país, el salario y de qué depende su importancia?

Según la evaluación del profesor Kalecki, la renta real media de un obrero con el mismo empleo que antes de la guerra, era en 1960, 45 % más elevada que en 1937 (para un mismo trabajo el aumento de salario real ha sido inferior, debido al crecimiento más rápido del consumo social y de la mejora de las rentas, a causa de los trabajos efectuados además del trabajo de base). En cuanto al costo de la vida las estadísticas de la postguerra no tienen en cuenta el aumento oculto de los precios, que disimula por lo tanto su alza. Supongamos, sin embargo, que la evaluación del profesor Kalecki sea, en principio exacta. El aumento de salarios en el período 1949-1960 se ha efectuado principalmente durante los años 1956-1959. Se trata de un período anormal para el régimen: la crisis política, el quebrantamiento del monolitismo del partido, las huelgas y las reivindicaciones colectivas de aumento de salarios, el breve período de prestigio de los Consejos Obreros, elegidos, por los trabajadores hasta mediados de 1958 e independientes del aparato del partido, habían debilitado relativamente el aparato del poder. En estas condiciones, en menos de cuatro años, la clase obrera había logrado un aumento del 30 % de sus salarios reales y obtenido por lo menos las tres cuartas partes del aumento total de la renta real por obrero, en relación con 1937. En el período 1949-1955, es muy difícil hablar de un alza sensible de los salarios reales. Ocurre lo mismo en el período posterior a 1959. Como resulta del análisis reali-

zado por el GUS (Oficina Principal de Estadísticas), sobre el presupuesto de las familias, la renta real *per capita* de las familias obreras en la industria ha aumentado 2,5 % durante los cuatro últimos años (1960-1963). Teniendo en cuenta el alza oculta de los precios —lo que no hacen las estadísticas oficiales— hay que suponer que el nivel de vida de la mayoría de las familias obreras no ha aumentado durante estos cuatro años e incluso que ha disminuido ligeramente.

Sin embargo, el valor global de la producción industrial era, en 1963, casi nueve veces más elevado que en 1938 (y en 1948) y la renta nacional se ha multiplicado, entre 1949 y 1963, por más de 2,5. El aumento del consumo medio *per capita* ha sido evidentemente más elevado en los años 1949-1960 que el modesto crecimiento del salario real y esto es debido al desarrollo del volumen del empleo. Esto no es sino una consecuencia de la industrialización, cualquiera que sea el sistema. La tasa de explotación no depende del volumen del empleo sino únicamente de la relación entre el valor del producto creado y el total del salario, o sea de la remuneración por el trabajo productivo. El aumento de la renta nacional producido por el obrero ha sido incomparablemente más rápido que el modesto aumento de su salario real (obtenido en su mayor parte durante los pocos años excepcionales del régimen: 1956-1959). Durante los años 1960-1962, la producción industrial neta ha aumentado en un 20 % y el salario en menos de 5 % y, durante el mismo período, los precios de los artículos de alimentación, según las estadísticas oficiales, han aumentado el 3,4 % en el comercio nacionalizado, el 7 % en el comercio de ultramarinos y el 12 % en los mercados. El nivel de vida de las familias obreras no ha aumentado nada, por lo tanto.

Los especialistas polacos de la alimentación han determinado cuatro regímenes-tipo de alimentación. El régimen A (apenas suficiente y contraindicado para un largo período) prevé, un promedio de 37 kg de carne por año y por persona; el régimen B (suficiente y permitiendo

el funcionamiento normal y permanente del organismo humano) prevé 40 kg de carne por año y por persona. Resulta de los análisis sobre los presupuestos familiares realizados por el GUS que en un 23 % de las familias obreras el consumo de carne era inferior al del régimen A y que el 19 % se mantiene al nivel del régimen A, permaneciendo siempre por debajo del régimen B.

La diferencia en el consumo de legumbres, fruta, pescado, manteca y huevos es aún más inquietante para las familias obreras.

Unos sondeos realizados en 1957 sobre la situación de los obreros en la Fábrica Varsoviana de Motociclos mostraban que el 23 % de las familias obreras comían carne a mediodía una vez por semana como máximo y el 25 % de ellas dos veces por semana, en la cena. Podría suponerse que estos datos ya viejos de siete años están superados; sin embargo, el consumo de carne por habitante en nuestro país era en 1957 de 43,9 kg por año, como promedio, más elevado por lo tanto que en 1960 (42,5 kg) y apenas más reducido que en 1963 (45,4 kg).

Las necesidades mínimas de existencia comprenden además de la alimentación, los vestidos, el alojamiento, el confort elemental y las instalaciones caseras. En 1957, en dicha fábrica había, por obrero, 0,51 traje de lana, 1,05 traje de tejido de bajo porcentaje de lana y además 0,8 pantalón y 0,6 chaqueta de lana. En el grupo de familias de salarios más bajos (18 % de familias interrogadas), poseía un traje de lana por cada 5 obreros. En lo que se refiere a trajes de invierno, el promedio por persona era de 0,15 abrigos de lana, 0,12 abrigos de tejido de bajo porcentaje de lana, 0,12 abrigos de entretiempo de lana, 0,5 abrigos de entretiempo de tejido de bajo porcentaje de lana.

Podría suponerse que la situación ha mejorado desde entonces. Pero el salario medio ha aumentado alrededor del 12 % entre 1958 y 1963 según informes oficiales y el aumento del salario real de los obreros ha sido seguramente muy inferior a la media general: en los años 1960-1963, la

renta real media del conjunto de las familias de trabajadores de la industria ha aumentado 4,5 % y el de las familias obreras 2,5 %.

En las fábricas el 10 % de las familias obreras disponen de menos de 3 m² de superficie habitable por persona, el 19 % de 3 a 4 m², el 10 % de 4 a 5 m², el 13 % de 5 a 6 m².

Así, el 52 % de las familias obreras poseen menos de 6 m² de superficie habitable por persona. Disponían de agua corriente caliente el 1 % de las familias interrogadas, agua corriente fría el 46 %; el 25 % de las familias disponían de retrete y el 7 % de cuarto de baño. El promedio de camas por miembro de familia era de 0,3.

El 65 % de los obreros interrogados sufrían de enfermedades crónicas.

De los datos del GUS sobre los presupuestos de las familias obreras, resulta que hasta el tercer grupo de salarios (600/800 zlotys por mes y por persona) el aumento de salarios sirve ante todo para el incremento del consumo de carne, fiambres, leche y productos lácteos, huevos y otros productos alimenticios, como azúcar. Solamente a partir del tercer grupo de rentas los gastos de este tipo de artículos aumentan menos que la renta de la familia y que, en cambio, los gastos para vestido, cultura, enseñanza, deporte aumentan más. Esto significa que el tercer grupo de salarios alcanza el nivel de satisfacción de las necesidades más elementales que en las familias obreras es considerado como el mínimo vital. Por debajo de este nivel mínimo se hallan del 22 al 23 % de las familias obreras lo que corresponde a grandes rasgos al número de familias en las que el consumo de carne es insuficiente.

El mínimo vital de los miembros de una sociedad no es constante. Está condicionado social e históricamente y en general aumenta con el desarrollo de la industria, de la técnica, del nivel cultural de la sociedad dada. Al desarrollarse, la industria moderna necesita obreros cuyo nivel cultural y profesional sea cada vez más elevado y cuyas necesidades personales, tanto culturales como mate-

riales, son cada vez mayores. Hoy, el mínimo vital de un obrero en Polonia es seguramente más elevado de lo que era en 1937. El mismo fenómeno existe en la sociedad capitalista: en la mayoría de los países occidentales, la renta real de un obrero ha crecido seguramente en estos 25 ó 30 últimos años por lo menos en un 45 %, pero el salario no ha cesado de ser lo que era hace un cuarto de siglo: el equivalente del mínimo vital del momento, o sea el precio de la fuerza de trabajo.

Como se deduce del análisis de los presupuestos familiares hechos por el GUS, las diferencias de consumo en las familias obreras no resulta de un abanico de salarios sino, ante todo, del número de personas que componen la familia y del número de asalariados que comporta. Esto significa que el salario medio actual en el país es tan bajo que un cuarto de las familias obreras no puede alcanzar el mínimo vital debido al número demasiado elevado de sus miembros y que el 13 % de ellas, se mantiene justo a este nivel. Por encima de este mínimo vital viven esencialmente parejas sin hijos o con dos como máximo (en caso de que los padres trabajen ambos).

Esto significa que el salario en nuestro país corresponde al *mínimo vital del momento*. Dicho de otra manera, el salario da solamente al obrero, en la distribución de la renta nacional, la parte que le es indispensable para vivir y criar sus hijos, es decir, para reproducir su propia fuerza de trabajo y preparar nuevos obreros para la industria.

El salario es por lo tanto únicamente un componente de los gastos de producción, tan indispensable como los gastos en materias primas y en maquinaria.

El obrero dispone generalmente de un alojamiento de Estado por el que paga muy poco, o sea que utiliza en parte gratuitamente; es necesario que viva en algún sitio si tiene que producir; su apartamento no tiene nada de lujoso y lo más frecuente es que carezca del confort más elemental. Es uno de los componentes de su mímino vital que le es asegurado además de su salario.

El obrero goza de asistencia médita gratuita y de reducciones en los precios de los medicamentos: debe tener buena salud para poder mantener su capacidad de trabajo. Los servicios médicos gratuitos y las medicinas a precios reducidos son asimismo componentes de su mínimo vital. Si se suprimiera la asistencia médica gratuita, si se elevaran los alquileres y tasas al nivel de la rentabilidad de la construcción y de la conservación de los edificios, el salario tendría que elevarse en iguales proporciones. Estos servicios y asistencias gratuitas son para el obrero una parte indispensable de su mínimo vital, un complemento de su salario, tan necesario como el propio salario; por lo tanto entran en los gastos de producción. En relación con el salario, estos servicios y asistencia constituyen un complemento secundario ya que el consumo social *per capita* en Polonia es de 1.200 zlotys al año.

¿Cuál es la fracción de su producción contenida en el salario de un obrero? Las estadísticas oficiales dan una imagen falsa por dos razones:
1) los precios atribuidos a la producción del sector A (producción de medios de producción) no constituyen los precios reales y se hallan subevaluados en relación con los del sector B (producción de bienes de consumo) lo que aumenta artificialmente la parte del salario en el precio de producción;
2) la baja artificial de los precios de los productos agrícolas disminuye falsamente la parte de la agricultura en la producción de la renta nacional y aumenta la de la industria.

Estamos, sin embargo, obligados a servirnos en nuestro texto de las estadísticas oficiales, utilizando los resultados como una ilustración aproximativa de la realidad.

En 1962, un trabajador de la industria ha creado productos por un valor de 71.000 zlotys —como promedio— y recibido bajo forma de salario 22.000 zlotys —siempre como promedio—. O sea que durante un tercio de su jornada de trabajo, el obrero ha producido su propio mínimo

vital y durante los dos tercios restantes, ha creado el producto excedente.

La clase obrera no tiene ninguna influencia sobre el volumen de este producto excedente, su reparto y su utilización, porque, como ya hemos visto, no ejerce la menor influencia sobre las decisiones del poder que dispone, por su parte, de los medios de producción y de la producción misma. La clase obrera no determina la cuantía de su salario; ésta le es impuesta, así como las normas. Los obreros no tienen derecho, ni posibilidad de autodefensa económica, ya que, como hemos visto, están desprovistos de organización, lo cual es absolutamente necesario para que una acción huelguística sea eficaz. Toda organización (acuerdo entre los trabajadores) que tiene como objetivo la lucha por los salarios es ilegal y como tal, perseguida por el aparato de represión: la policía, los jueces, los tribunales. El producto excedente se le quita pues, por la fuerza, a la clase obrera en proporciones que no han sido determinadas por ella y es utilizado fuera de su círculo de influencia y de sus posibilidades de control.

¿A qué está destinado el producto excedente?

Primeramente, a la acumulación, o sea a la ampliación de la producción. Pero como el obrero no produce para él más que el mínimo vital, el objetivo de la producción no es su *objetivo de clase* (al igual que ocurre en los países capitalistas, la acumulación puede servir los intereses del obrero en la medida en que le procura un empleo; pero el objetivo de la producción no es por ello el suyo). En el sistema actual, la acumulación está destinada a un objetivo extraño al obrero. En segundo lugar, al mantenimiento del aparato represivo: ejército, policía política, fiscales, tribunales, cárceles. Este aparato sirve para consolidar las relaciones económicas y sociales existentes, relaciones en las que el obrero trabaja por su propio mínimo vital, y cede dos tercios de su producto, privado de influencia y de control sobre su trabajo y su producción, privado de organización propia y de posibilidades de autodefensa. Los gastos para el partido y las organizaciones que éste

dirige son utilizados con el mismo fin; impedir todo intento de resistencia y de oposición por parte de la clase obrera y organizar ésta en la obediencia al poder: gastos para la dirección que vigila al obrero de manera que éste cree el mayor producto excedente posible, y que no perciba un zloty de más que su salario; gastos para el aparato de propaganda que glorifica el actual régimen y explica a los obreros que todo va estupendamente; gastos para la administración que constituye un medio de gobierno para la burocracia. Todos estos organismos son enemigos de la clase obrera y la parte de producción que le es consagrada se vuelve contra la clase obrera en forma de policía, de dirección, de organización del partido.

Además el excedente cubre los gastos de sectores cuya función no está aparentemente ligada al sistema (ciencia, instrucción pública, enseñanza superior, cultura, salud, servicios). Evidentemente, estos sectores cumplen una función social, pero la cultura, la enseñanza, la ciencia y hasta la producción de bienes materiales tienen también una función semejante en las sociedades antagónicas sin perder por ello su carácter de clase. Los gastos enumerados en este apartado pueden clasificarse de la manera siguiente:

1) Gastos que sirven directamente a la producción (una parte de los fondos destinados a la ciencia: por ejemplo, los conocimientos técnicos o matemáticos; una parte de los fondos destinados a la enseñanza en todos los niveles: formación de la fuerza de trabajo obrera, etc.). En el sistema de relaciones económicas existente, el objetivo de la producción y por lo tanto de los gastos destinados a la realización de este objetivo son, tanto como la acumulación, extraños del punto de vista de clase de los intereses obreros.

2) Gastos que sirven indirectamente a la apología de las relaciones sociales existentes, a su enraizamiento en la conciencia de las masas y a la constitución de formas de vida colectiva correspondientes. A este conjunto per-

tenecen en primer lugar los fondos destinados a la ciencia, la literatura, el cine, el arte. La sumisión a los intereses de la burocracia de los intelectuales creadores cuya profesión está ligada a la formación de la conciencia social, se ve facilitada por su dependencia material respecto a las autoridades científicas, gubernamentales, los editores, y esto mediante un argumento político (el papel dirigente del partido en la ciencia y la cultura) y de un argumento represivo: la censura. El escritor, el científico, el cineasta, no pueden dar muestras de independencia en su trabajo profesional y ofrecer algo al público sino en la medida en que la censura lo permite. Al determinar —mediante la censura, la designación de cuadros, el control y la dirección cultural de las ediciones— las fronteras de la actividad profesional de los medios creadores, la burocracia les obliga a la apología o al silencio. En parte los gastos destinados a la enseñanza sirven igualmente no por el carácter propagandístico de los programas escolares, objetivos semejantes, sino más bien a causa de la estructura tradicionalista del sistema pedagógico de la escuela de hoy, que orienta la juventud hacia formas de vida colectiva que corresponden exactamente al carácter de las relaciones sociales existentes, en las cuales el obrero no dispone del control sobre su trabajo o su propia producción y está privado de derechos políticos; la escuela está pues orientada hacia objetivos opuestos a los objetivos obreros.

3) Los fondos destinados a diferentes tipos, cargas y servicios gratuitos para la clase obrera y la masa de trabajadores asalariados, o sea, la mayor parte de los fondos concedidos a los servicios médicos, una parte de los fondos consagrados a la organización comunal, a las guarderías, a las escuelas infantiles, a las organizaciones culturales y recreativas, etc. Como hemos visto, estos servicios gratuitos constituyen un elemento indispensable del mínimo vital del obrero, debido al bajo nivel del salario real.

Desde el punto de vista de los organizadores de la pro-

ducción, constituyen, por lo tanto, una parte de los gastos de producción y forman parte del producto necesario y no del producto excedente.

Resulta evidente que el obrero no puede recibir el equivalente de su producción en forma de salario real. Para que la producción se amplíe es necesario separar un fondo de acumulación. Una parte de la producción debe consagrarse al mantenimiento de los sectores no productivos indispensables para satisfacer las necesidades del obrero y de toda la sociedad (enseñanza, salud, ciencia, etc.). Pero en el sistema actual, el obrero no obtiene en forma de salario y servicios más que el mínimo vital. Es despojado por la fuerza (el obrero no tiene el menor control sobre su importancia y su reparto) del producto excedente que es utilizado con objetivos que le son extraños y hasta opuestos. Esto significa que está explotado: produce el mínimo vital para él mismo y tiene frente a él toda la potencia del Estado; el producto de su propio trabajo se alza ante él en forma de una fuerza enemiga o extraña y por lo tanto no le pertenece.

Si el producto creado por el obrero no le pertenece, su trabajo, fuente de este producto, tampoco le pertenece. ¿Por qué ocurre así?

Para vivir el obrero debe producir. Para que la producción pueda realizarse, es necesario que haya asociación de la fuerza de trabajo y de los medios de producción. La asociación de su fuerza de trabajo con los medios de producción, propiedad ajena, no puede hacerse más que por el encuentro, en el mercado del trabajo, del obrero propietario de su fuerza de trabajo, con los propietarios de los medios de producción. El obrero es, pues, explotado porque está privado de la propiedad de los *medios de producción*: para vivir, debe vender su *fuerza de trabajo*. A partir del momento en que ha realizado este acto, indispensable para él, o sea cuando ha vendido su capacidad de realizar un trabajo determinado en un tiempo determinado, este trabajo y el producto que de él resulta no son ya su propiedad, sino la de los que han comprado

su fuerza de trabajo, o dicho de otra manera: el propietario de los medios de producción que lo explota.

¿A quién vende el obrero su fuerza de trabajo en nuestro país? A quienes disponen de los medios de producción, o sea a la *burocracia política central.* Por ello la burocracia política central es una clase dominante: tiene el poder exclusivo sobre los medios de producción de base, compra la fuerza de trabajo de la clase obrera, la despoja por la fuerza bruta y la imposición económica del excedente que emplea en fines hostiles o extraños a los obreros, con el fin de reforzar y ampliar su poder sobre la producción y la sociedad. Y esto es, en nuestro sistema, el tipo preponderante de relaciones de propiedad, la base de las relaciones de producción y de las relaciones sociales.

Se suele decir que la burocracia no puede ser una clase y que las rentas personales de sus miembros son insignificantes en comparación con las de los capitalistas: —apenas si cada burócrata dispone de una residencia en el campo, de un coche y de una secretaria— y porque la entrada en las filas de la burocracia se hace a lo largo de una carrera política y no por herencia familiar y se puede ser excluido fácilmente de la burocracia con motivo de divergencias políticas. Aquí existe un malentendido. Todos estos argumentos tienden sencillamente a demostrar una cosa evidente: la propiedad burocrática no tiene un carácter individual, sino que es propiedad común de una élite que se identifica con el Estado. Esto determina los principios de la organización interna de la burocracia; sin embargo, su carácter de clase no depende de su organización interna y de sus costumbres, sino solamente de su relación —en tanto que grupo— con los medios de producción y con las otras clases sociales (ante todo con la clase obrera). Las rentas individuales de los capitalistas son incomparablemente más elevadas que las de los burócratas; pero los capitalistas sacan de sus rentas personales los fondos de acumulación, el salario de los vigilantes, de los trabajadores, del personal de servicio y de todos los que contribuyen a acrecentar su poder y su im-

portancia. Sus rentas personales les permiten obtener el prestigio, la importancia, la influencia y el poder político. La burocracia no cubre, con sus rentas, más que sus necesidades personales; todo el resto, o sea, los fondos de acumulación y los fondos recogidos para pagar un número incalculable de gentes que salvaguardan su poder, efectúan la propaganda a favor del sistema, vigilan el trabajo de los obreros, etc., es extraído de la renta nacional de la que dispone en forma absolutamente exclusiva. Teniendo en cuenta el reducido número de sus miembros, la burocracia no gasta más que una parte ínfima del producto social para su consumo de lujo, pero ello es también válido para los capitalistas que no consumen más que un débil porcentaje de este producto. No reside aquí la explotación. El consumo directo, personal, no es en ningún sistema, el objetivo de la clase dirigente. El privilegio del consumo en grande, el prestigio, el poder y de manera general todos los privilegios que existen en la sociedad, son la consecuencia del poder ejercido sobre la producción. Se desprende de esto que toda clase dirigente tiende a mantener, consolidar y ampliar su dominio sobre la producción y la sociedad; para realizar estos objetivos, utiliza el producto excedente y con este fin, somete el proceso mismo de la producción.

III. Objeto de clase de la producción

Cada clase dominante determina el objetivo de la producción social. Lo hace evidentemente en su propio interés de clase, con la preocupación de fortalecer y ampliar su dominio sobre la producción y la sociedad.

La posición de un capitalista individual (de una sociedad anónima, de un monopolio) en la sociedad, depende de la importancia de su capital, de la misma manera que la posición internacional de toda la clase capitalista de un país dado depende de la importancia del capital nacional. Porque el capital es la forma actual de dominación sobre el trabajo y su producto. Por ello la preocupación constante de un capitalista será la ampliación, la acumulación de su capital. De hecho, el capitalista es la expresión de su capital y de su tendencia a la expansión.

El capitalista encuentra en el mercado todos los elementos indispensables para la producción: las máquinas, las materias primas y la fuerza de trabajo. Debe realizar en el mercado la totalidad de las mercancías producidas. Por ello el objetivo de la producción no es para él la obtención de un producto excedente en su forma física, sino el beneficio máximo, o sea la mayor diferencia posible entre los costos de producción (gastos para máquinas, materias primas y fuerza de trabajo) y los precios del mercado.

Existe una contradicción entre la tendencia a la amplia-

ción del capital, del aparato productivo y de la propia producción, y el bajo nivel del consumo de la clase obrera, determinado por el débil mínimo vital. Esta contradicción tiene su origen en el proceso mismo de la producción (pagar lo menos posible al obrero y obtener de él la producción mayor posible). Aparece en el mercado una desproporción entre el capital y el producto social que van creciendo y la débil demanda efectiva (solvente) de las masas. En el caso del capitalismo de concurrencia, dicha contradicción se resuelve periódicamente por las crisis cíclicas; en el capitalismo moderno, lo es mediante variaciones de la coyuntura, recesiones y la disminución del ritmo de crecimiento, la utilización reducida de las capacidades de producción, el armamento y los gastos del Estado, que, hasta cierto punto, permiten a la producción independizarse del mercado, y en fin por el aumento del consumo de lo que se viene llamando la clase media y la clase obrera organizada en partidos y sindicatos luchando por el aumento de salarios y de prestaciones sociales. Incluso si las estadísticas muestran que durante largos períodos la participación del capital y del trabajo en el reparto de la renta nacional es sensiblemente constante, esto no demuestra que el objetivo de la producción haya cambiado. El beneficio máximo sigue siendo el objetivo, mientras que el crecimiento del consumo de las masas trabajadoras es un mal necesario cuyos orígenes son políticos y económicos.

En nuestro sistema no existen capitales privados. Las fábricas, las minas, los altos hornos, así como el conjunto de la producción son propiedad del Estado. Pero, puesto que el Estado se halla en manos de la burocracia política central, que dispone colectivamente de los medios de producción y servicios, se ha transformado en un "capital" nacional, centralizado y único. La potencia material de la burocracia, su campo de dominación sobre la producción, su posición internacional (factor muy importante para una clase que se organiza en tanto que grupo identificado con el Estado) dependen de la importancia del capi-

tal nacional. La burocracia tiende por lo tanto a ampliarlo, a extender el aparato de producción y de acumulación. Es la expresión del capital nacional, de su tendencia a la expansión, de la misma manera que un capitalista lo es de su capital individual. ¿Cuál es el objetivo de clase logrado por la burocracia a través del proceso de producción, o, en otros términos, cuál es el objetivo de clase de la producción? No es el beneficio de la empresa, sino el producto excedente a escala de toda la economía nacional. Dicho excedente proporciona las fuentes de la acumulación así como todos los fondos destinados a mantener y reforzar la dominación de clase de la burocracia.

A diferencia del capitalismo, la burocracia no necesita realizar el producto excedente en el mercado, ni esta parte del producto global corresponde al desgaste del capital constante. Es la propietaria de todas las empresas y de su producción, no tiene por tanto necesidad de comprarse a sí misma. Si el paso de acero a la fundición, o del carbón de la mina a la fundición, se contabiliza como compra de medio de producción, se trata en realidad, de una simple transferencia del producto en el marco de la misma propiedad y no de un verdadero acto de compra-venta. El carácter arbitrario de los precios dentro del sistema estatal constituye una prueba de lo que afirmamos: los precios no son más que un instrumento de contabilidad de los productos; su relación no corresponde obligatoriamente por lo tanto a las relaciones de valor.

El único medio de producción del que la burocracia no es propietaria es la fuerza de trabajo; la burocracia la compra globalmente en condiciones monopolísticas (detrás de cada empresa se esconde el mismo propietario, por lo tanto el obrero "elige" siempre el mismo comprador, lo que no le permite organizarse para la defensa de sus intereses económicos); pese a ello, la burocracia compra la mano de obra en el mercado. Se trata de un verdadero acto de compra-venta y hay que pagar al obrero. ¿Cómo? Naturalmente con dinero. Pero hemos visto que el dinero no tiene, para la burocracia, la misma significación que

para los capitalistas, ya que no es más que un simple medio de control sobre el reparto del producto social del que dispone. La tasa de los salarios determina simplemente la cantidad de medios de subsistencia de que dispone la burocracia y que concede al obrero en tanto que equivalente de su fuerza de trabajo.

Por lo tanto, la burocracia paga en realidad la mano de obra con una determinada cantidad de medios de subsistencia necesarios para la vida cotidiana de la familia), o sea por la producción de bienes de consumo, la construcción de alojamientos, de hospitales, destinados a satisfacer las necesidades de los obreros y empleados y se ocupa, asimismo, de su abastecimiento.

Por ser la propiedad de la tierra individual, los productos agrícolas no constituyen la propiedad de la burocracia que se ve por lo tanto obligada a comprarlos al campesino en el mercado. En este caso también nos encontramos ante un mercado monopolizado en el cual la burocracia determina los precios de compra de la producción agrícola y esto en una relación de precios desfavorable respecto a los productos industriales. Pero existe, pese a ello, una relación de compra-venta y hay que pagar al campesino. ¿Con qué? Una vez más con bienes de consumo industriales, así como con máquinas y abonos. Los productos comprados al campesino componen una parte del mínimo vital del obrero, por lo tanto el precio pagado a los campesinos forma asimismo parte de los gastos destinados a la compra de fuerzas productivas para la industria, de la misma manera que la construcción, los transportes y los sectores urbanos improductivos.

Vemos así que el precio de la fuerza de trabajo se reduce a la producción de bienes de consumo, a la construcción de alojamientos, de hospitales, de guarderías, etc., y a la producción de maquinaria y de abonos para la agricultura. En líneas generales, esto constituye lo que se designa como sector B. Como ya hemos visto, la fuerza de trabajo constituye el único elemento del proceso de producción que no constituye una propiedad de la burocracia. El pago

de esta fuerza de trabajo, o sea la producción del sector B, es por lo tanto, desde el punto de vista de la burocracia, el único gasto que tiene que soportar para que la producción se realice y cree el producto excedente. Al tender hacia la adquisición de un producto excedente lo más importante posible, la burocracia mantiene este gasto al nivel más bajo posible. La producción para el consumo es para ella, en tanto que clase, un mal necesario y la producción por la producción un objetivo. La producción considerada en tanto que proceso que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, en tanto que proceso biológico-técnico existe en cada sociedad, no puede constituir un objetivo en sí mismo. Se trata siempre de una producción para el consumo. Porque se trata de una actividad consciente, creada para las necesidades, el consumo de bienes producidos va creando nuevas necesidades. El objetivo de la clase dominante (el objetivo de clase de la producción) puede estar en contradicción con el sentido social de la producción. Esto tiene lugar tanto en el sistema capitalista como en el sistema burocrático, debido a la tendencia, común a las clases dominantes, de aumentar la producción, limitando al mismo tiempo, en virtud de criterios de clase, el reparto y por lo tanto el consumo. En ambos sistemas, esta contradicción limita, en fin de cuentas, la propia producción; pero la manera de alcanzar tal resultado es diferente.

Para lograr su meta, para obtener el beneficio máximo y asegurar la acumulación, el capitalista debe realizar en el mercado el valor producido. La naturaleza del objeto producido importa poco para él, sin embargo, el mercado debe absorber su producción. Está destinada a un comprador, por lo tanto al consumidor. La demanda efectiva, establecida por el nivel del consumo social, es pues la que determina las posibilidades de realización en el mercado y al mismo tiempo limita la producción capitalista y la acumulación mediante crisis periódicas u otras dificultades de realización.

En el capítulo que trata de la crisis económica del

sistema, que trataremos con detalle más adelante, explicamos cómo la producción, en el sistema burocrático, se encuentra limitada por el bajo nivel del consumo social. De todas formas, esto no se realiza a través del mercado. Porque el objetivo de clase de la burocracia no es el beneficio y la acumulación, sino el producto excedente en su forma física y el aumento de la producción, o sea directamente la producción por la producción. En principio, sólo la fuerza de trabajo y los medios de su mantenimiento llegan sobre el mercado. El producto excedente no llega a él como tampoco la parte de la producción que sirve para reproducir y ampliar el capital constante (maquinaria, materias primas, combustibles). El mercado no interviene en tanto que elemento regulador de la producción; de ahí la imposibilidad de crisis cíclicas determinadas por la coyuntura y de la limitación de la producción a causa de dificultades de realización en el mercado. Es posible, por lo tanto, mantener, durante un largo período, la acumulación y la tasa de crecimiento a nivel muy alto, dejando al mismo tiempo en un nivel muy bajo al consumo.

La contradicción entre el objetivo de clase de la producción y el consumo aparece en este sistema antes incluso que el ciclo productivo haya empezado, o sea en el momento en que se establece el plan. En general, en los planes económicos, se fija la tasa de acumulación más elevada posible y por consiguiente la parte de consumo en la renta nacional más pequeña que sea posible. Se supone, por lo tanto, un crecimiento de la producción mucho más rápido en el sector A (medios de producción) que en el sector B (bienes de consumo). La desproporción se agrava durante la realización de los planes: Hallándose generalmente la realización del programa de inversiones comprometida, se intenta salvarla a costa del consumo casi siempre. Finalmente, la parte de la acumulación es generalmente superior a lo previsto en el plan, y la del consumo inferior. A esto corresponde un aumento de la producción superior al previsto en el sector A, pero inferior en el sector B.

Se comprende fácilmente que pese a ello, el aumento

de la renta nacional, vaya en general, acompañado de un aumento del consumo; esto resulta del crecimiento de la oferta del empleo y —en menor grado— del aumento del mínimo vital. Durante ciertos períodos, la parte del consumo en la renta nacional puede permanecer constante e incluso aumentar (sobre todo en caso de amenaza política de la clase obrera). Lo que no significa, sin embargo, que el objetivo de clase de la producción haya cambiado: la burocracia considera el crecimiento del consumo como un mal necesario; el producto excedente sigue siendo su objetivo. Como en toda ley económica, la producción por la producción y la extensión de la acumulación existen como tendencias y no como regla absoluta. Se puede fácilmente discernir esta tendencia cuando se trata de largos períodos. En 1949, año que por diversos motivos puede ser considerado como punto de partida (fin del período de reconstrucción y establecimiento definitivo de las relaciones económicas, sociales y políticas en tanto que sistema de dictadura burocrática), la parte del consumo en la renta nacional era de 85 % y la de la acumulación de 15 %. En 1963, la parte del consumo era de 74,6 % y la de la acumulación de 25,4 %.

Evidentemente, la realización de esta tendencia no se ha efectuado de manera uniforme. En 1950, la acumulación ha saltado bruscamente de 15 % a 20 %, para crecer luego lentamente hasta 1954 (22,4 %). Hubo, sin embargo una excepción en 1957, año en que la acumulación alcanzó el 27,1 % de la renta nacional, lo que no había ocurrido jamás anteriormente. Durante los años 1956-1957, la parte de la acumulación ha disminuido (19,7 % en 1956 y 21,7 % en 1957), y luego hasta 1959 las proporciones de la acumulacón y del consumo permanecieron más o menos constantes. En 1960 tuvo lugar un nuevo salto de la acumulación de 21,9 % a 24,2 % y durante los años siguientes la tendencia a una nueva alza iba a perdurar.

Durante los años 1961-1963, el consumo aumenta según cifras oficiales el 15 % solamente (y el consumo indivi-

dual sólo de 12 %), mientras que el aumento de la acumulación es del 23 %.

Además del consumo individual, el consumo comprende el "consumo restante". Así es como las estadísticas oficiales llaman a la totalidad de los gastos materiales en el sector improductivo y que engloba entre otras cosas, el ejército, la policía, las guarderías y las escuelas. La parte del consumo individual en la renta nacional era en 1949 de 77,8 % y en 1963 de 66,1 %; esta es la cifra más baja del período de los veinte primeros años de la postguerra, porque incluso en 1953 era de 66,9 %.

No hay que olvidar por otra parte, que los precios de los medios de producción tienen en nuestro país un carácter arbitrario, ya que están calculados en relación con los precios de objetos cuyo nivel de consumo es bajo. Sin embargo, la acumulación se evalúa según los precios de los medios de producción. De ello resulta una reducción arbitraria de su parte en la renta nacional y un aumento asimismo arbitrario del consumo. Si se fija en 100 los niveles de acumulación y de consumo en 1949, el índice de la acumulación en 1963 es de 361 % y el del consumo de 215 %.

La limitación del crecimiento de la acumulación durante los años 1956-1959 está ligada a la crisis política, la debilidad relativa del poder y la lucha de la clase obrera por el aumento de salarios. Dejando aparte este período excepcional, asistimos desde 1949 a un crecimiento casi ininterrumpido de la parte de la acumulación en la renta nacional y a una disminución de la del consumo. Tendencia que continuará durante los años 1966-1970 a causa de un programa de inversiones muy importante. Puede observarse que la tendencia de "la producción por la producción" no es un mito, sino una realidad tangible.

En nuestras consideraciones sobre el objetivo de clase de la producción hemos ignorado voluntariamente el consumo personal de los burócratas. La burocracia política central es tan poco numerosa que puede considerarse como insignificante la parte del producto social que consume.

En la práctica, este consumo no depende de la amplitud de la producción y no tiene por lo tanto ninguna influencia sobre el objetivo de esta producción.

Pero la burocracia mantiene, gracias al producto excedente, un gran ejército de empleados, de directores, de policías, etc., que sirven para mantener y reforzar las relaciones de producción y las relaciones sociales que se hallan en la base de su dominación. Este ejército que cuenta en sus filas grupos privilegiados que gozan de un nivel de consumo elevado, absorbe una parte importante de la renta nacional. Entre estos grupos privilegiados, el más importante es sin duda alguna el de la tecnocracia, porque sus funciones están íntimamente ligadas al proceso de producción. La satisfacción de las necesidades del aparato y en primer lugar de los directores de las empresas, o sea el consumo de las capas privilegiadas, ¿no puede constituir también uno de los objetivos de la producción? Esto podría significar que la burocracia no constituye una verdadera clase dominante, sino que realiza solamente los intereses de los grupos sociales privilegiados, de la misma manera que la élite del poder en los países capitalistas es el representante político de la gran burguesía monopolista.

Pero, en las condiciones capitalistas, esto se desprende de que el capital, la propiedad, la dominación sobre el trabajo y su producto, en una palabra la dominación de clase, está concentrada en manos de los monopolios —y no en las de la élite política—. En el nuevo sistema de dominación sobre el trabajo y su producto, el capital nacional, la propiedad, están concentradas únicamente en las manos de la burocracia política central; sólo ella domina la sociedad y la producción. La tecnocracia no goza de ningún poder, no participa en las decisiones, su único papel es el de cumplir las directivas de la burocracia y vigilar la explotación de los obreros. Para eso se le paga. La burocracia está incluso dispuesta a pagar bien, a conceder a los directores, jefes de empresa, etc., el privilegio de un consumo elevado para atarlos mejor al sistema.

Pero lo hace exclusivamente en interés propio. No representa a los tecnócratas: los compra.

Los obreros son tanto más sensibles a los fondos consagrados por los directores a su elevado nivel de vida cuanto que han sido extraídos del producto excedente que han creado. En el marco del análisis económico, estos fondos forman parte de la categoría de gastos improductivos, ya que sirven una organización de clase bien determinada de la producción y no su proceso material. Desde el punto de vista de la burocracia, las relaciones de producción sobre las que se basa su poder constituyen la única organización material del proceso de producción posible y admisible. No existen diferencias para ella, por lo tanto, entre los gastos productivos y los improductivos. En el marco de la dominación de clase y de las relaciones actuales, los policías, los propagandistas y los vigilantes del trabajo son tan imprescindibles —para asegurar el proceso de producción de los bienes materiales— como los propios productores. El alto nivel de consumo de la capa de directores constituye por lo tanto, desde el punto de vista de la clase dirigente, un gasto indispensable para la producción y no un objetivo en sí. Mientras las condiciones sociales y políticas lo permitieron —hasta 1956— la burocracia mantenía los salarios y rentas de los guardianes del trabajo a un nivel relativamente bajo, muy inferior al de antes de la guerra y al de hoy. El consumo de la gran masa de pequeños empleados sigue estando dentro de los límites del mínimo vital de la clase obrera, y esto pese a que sirven al sistema actual. Porque si le sirven por 1.600 zlotys por mes, no hay necesidad alguna de pagarles más.

Así se pone de relieve que para la burocracia, el consumo de la capa de directores y otros grupos privilegiados, lo mismo que el consumo de la clase obrera y de la masa de los empleados mal pagados, constituye un mal necesario, y la producción sigue siendo el objetivo único. La tecnocracia contribuye a la realización del objetivo de clase de la producción, pero su papel es el papel de

guardián pagado y controlado. Su interés propio (la producción que aseguraría un alto nivel de consumo a las capas privilegiadas) no coincide en absoluto con el objetivo de la burocracia; al revés, le es extraño y hasta opuesto. En la medida en que la tecnocracia esté libre de todo control y pudiese actuar según su propia iniciativa, intentaría realizar su propio objetivo que está en contradicción con el objetivo de la producción determinado por la clase dominante.

Esto tiene gran importancia para la comprensión del mecanismo de la gestión económica en el sistema burocrático; el conjunto de las relaciones de gestión no es sino una organización con vistas a la realización de un objetivo de producción bien determinado.

Ya que en una sociedad de clases el conjunto de las relaciones de gestión está determinado por el objetivo de clase de la producción.

Este objetivo se realiza en el transcurso del proceso de producción por los obreros y sus vigilantes, la tecnocracia. Hemos visto que el interés de unos y otros era el consumo, aunque no tenga el mismo carácter social y material en cada uno de los dos casos. El objetivo de clase de la producción sigue por tanto en contradicción con los objetivos propios de los obreros y de los tecnócratas. Debe, por lo tanto, ser realizado a pesar de sus aspiraciones naturales. De aquí se desprende que el sistema de gestión debe ser concebido de manera que permita obligar a los obreros y a las direcciones de las empresas a alcanzar los objetivos determinados por la burocracia.

Queda de manifiesto, en primer lugar, la necesidad de reducir al mínimo el margen de iniciativa propia de la clase obrera y de la tecnocracia. Por ello, las direcciones se ven privadas del poder de decisión en los problemas más vitales de sus empresas. Ejecutan las directivas de la autoridad central y en su nombre vigilan a los obreros. Intentan, a su vez, hacer imposible cualquier iniciativa de los obreros con el fin de obligarles mejor a alcanzar el objetivo de la producción, objetivo que les es extraño.

Las decisiones que conciernen la naturaleza y el volumen de la producción, los métodos empleados, la elección de materias primas y los gastos de producción de cada empresa (el conjunto de estas decisiones constituye lo que se viene llamando gestión de la empresa) pertenecen a la dirección central. Se transmiten a las empresas en forma de órdenes administrativas estrictamente obligatorias llamadas "índices directoriales". He aquí en qué consiste el sistema centralizado de gestión. Como salta a la vista, es la expresión de las actuales relaciones de producción.

Con frecuencia se tiene tendencia a explicar la crisis económica actual recurriendo al funcionamiento defectuoso del sistema centralizado de gestión y se exige un cambio general que llevaría tal sistema a un grado superior de perfección. El defecto de la primera parte de este razonamiento es considerar los efectos como causa. Por otra parte, la idea de que es posible —en el marco de las relaciones de producción actuales— efectuar de forma arbitraria un cambio en el sistema de gestión, es una utopía evidente. Intentemos ver si la sustitución de un sistema centralizado de gestión por lo que viene llamándose un sistema descentralizado coincide con el carácter de las relaciones de producción que dominan en nuestro país.

En el sistema descentralizado, la empresa se administra ella misma, las decisiones en lo que se refiere a la producción son tomadas a nivel de la fábrica. No es el "nivel" el que decide, sino, claro está, los hombres, los grupos sociales que poseen el monopolio de la gestión. Así, una empresa autónoma puede ser administrada por uno de los dos grupos principales unidos por los lazos de la organización de la producción: los obreros o la dirección. Considerando ahora la totalidad de las empresas, puede deducirse que la gestión económica, en un sistema descentralizado, puede pertenecer ya sea a la clase obrera, ya sea a la tecnocracia.

La democracia obrera no puede limitarse, evidentemente, al nivel de la empresa. Si las decisiones de importancia y de interés nacional, es decir, el poder de disponer real-

mente de la plusvalía y del trabajo que la crea, no pertenecen a la clase obrera, la participación de los obreros a la gestión de la empresa, se convierte necesariamente en una ficción. La gestión obrera de la empresa exige por lo tanto una total democracia obrera en el Estado. Unicamente en estas condiciones la clase obrera organizada podrá determinar los objetivos de la producción social según su interés propio, según el interés de quienes hoy no poseen para vivir sino el mínimo vital. El objetivo de la producción será evidentemente el consumo de masas. Esto significa, resumiendo, el derrocamiento de las relaciones de producción y de las relaciones sociales existentes y, con ellas, la dominación de clase de la burocracia.

La situación sería fundamentalmente diferente si el monopolio de las decisiones perteneciera, en las empresas independientes, a las direcciones y a los grupos ligados a éstas. Es decir, a la tecnocracia. Tal situación puede perfectamente existir tras la fachada de la autogestión formal si se mantiene el sistema de partido único que monopoliza el poder (este partido se transforma inevitablemente en instrumento de dictadura contra la clase obrera), y el viejo aparato de represión de la policía y del ejército (la policía política y el ejército regular son en esencia los instrumentos de la dictadura antipopular). Tal sistema, que existe en Yugoeslavia hoy, no tiene ninguna relación con la democracia obrera. La clase obrera se ve privada de toda influencia sobre el volumen, el reparto y la utilización del producto excedente y su consumo se mantiene a nivel del mínimo vital. El obrero es explotado y el objetivo social de la producción no es el suyo. Lo que no quiere decir, sin embargo, que dicho objetivo sea el mismo que en el sistema burocrático.

En el sistema llamado descentralizado, la empresa decide sola sobre su producción. La realización del plan central se efectúa, no por la vía de consignas administrativas, sino por el ejercicio de la potencia económica del poder central que decide sobre las inversiones fundamentales, sobre las amortizaciones, sobre el crédito y sobre el índice

de interés de los préstamos, e influye eventualmente sobre los precios del mercado.

Contrariamente a lo que ocurre en el sistema centralizado, la empresa no puede ser juzgada a partir de la ejecución de los coeficientes fijados "desde arriba". Sólo los fenómenos económicos de la actividad de la empresa, determinados por su rentabilidad, es decir por el beneficio realizado en la venta de su producción, puede constituir el criterio de su valor. Esto significa que el volumen, el precio, la estructura y la calidad de la producción deben corresponder a la demanda, a fin que la producción creada pueda ser enteramente absorbida por el mercado. La producción está, por lo tanto, destinada al comprador y en fin de cuentas, al consumidor. Teniendo en cuenta que se ofrecen en el mercado no solamente los bienes de consumo individuales y la fuerza de trabajo, sino también los medios de producción, puede afirmarse que la producción se rige por el mercado. Resulta así que la producción debe adaptarse a las necesidades de los consumidores, expresada por la demanda. Por su política económica, el Estado puede influir sobre el mercado, pero no puede desligar la empresa de éste y no puede por lo tanto privar al consumidor de la influencia que tiene sobre la producción. En cuanto al consumidor, sólo influye en el mercado en la medida en que sus necesidades se manifiestan en forma de demanda efectiva, según el poder adquisitivo de que dispone. Es, pues, el reparto de la renta nacional el que ejerce una influencia esencial sobre la estructura de la producción. Este reparto y, por consiguiente, la estructura de la producción, serán evidentemente diferentes en el sistema de democracia obrera y en el sistema tecnocrático. En los dos casos la demanda del mercado representará las necesidades de un cierto tipo de consumo.

Así como sucede en el sistema tecnocrático, el objetivo de clase específico de la burocracia, la producción por la producción, no puede ser tampoco alcanzado y esto por los motivos siguientes: *a)* La producción depende del mercado; se halla por lo tanto limitada por el volumen y la

estructura del consumo en una medida mucho más inmediata que en el sistema centralizado. *b)* Al ejercer la gestión de la empresa, la tecnocracia ejerce, por ello mismo una influencia sobre el reparto primario de los beneficios, ampliando su abanico todo lo posible. Esta tecnocracia constituye una capa relativamente importante que dedica (lo mismo que las demás capas privilegiadas) la integridad de sus rentas al consumo. Se crea así una amplia demanda efectiva de productos de *standing* elevado y de lujo, y de servicios del mismo tipo, lo que ejerce naturalmente una influencia sobre la producción. *c)* El paso de la tecnocracia de la situación de simple ejecutante de órdenes administrativas y de vigilante del trabajo asalariado, a la de poseedora del poder real a nivel de empresa, aumenta inmediatamente su papel y su importancia en el Estado. Debido a su función social, constituye una capa organizada y organizada particularmente para gestionar la producción. Hace falta, por lo tanto tenerla en cuenta también al tomar las decisiones "centrales". Por ello "la capa de directores" conquista la posibilidad de influir sobre las decisiones económicas de carácter general que constituyen el monopolio de la burocracia política central en el sistema centralizado. En las condiciones de la producción regulada por las necesidades del mercado y la acción económica del Estado, la influencia que ejerce la tecnocracia sobre el reparto de las reservas y las decisiones económicas de carácter general da nacimiento a la tendencia hacia una producción cuyo objetivo es satisfacer el alto nivel de vida de las capas privilegiadas (en este sentido es característico ver cómo la carrera de inversiones que se observa hoy en Yugoeslavia concierne sobre todo la industria de bienes de consumo).

El sistema llamado descentralizado no puede constituir en manera alguna un instrumento para realizar el objetivo de clase de la producción peculiar a la dominación de la burocracia política central. Incluso en el caso en que la clase obrera permanece privada del control sobre su trabajo y el producto de éste, o sea es explotada, y en

que la dirección de las empresas está en manos de la tecnocracia, el sistema descentralizado de gestión realiza otro objetivo de producción. Y esto lleva consigo otra composición y otro carácter de la clase dominante, *otras relaciones de producción.* De aquí se desprende que un cambio general del sistema de gestión es imposible sin un cambio de las relaciones de producción (ya hemos visto que la recíproca se da también). En efecto, los fenómenos económicos negativos de nuestro sistema, cuya causa se busca generalmente en un mal establecimiento de los índices, de los estimulantes, etc., nacen en realidad de las relaciones de producción; es decir, de la propia estructura del sistema económico y no de su "funcionamiento" defectuoso.

Son efectivamente las relaciones de producción (y sobre todo el objetivo de clase de la producción) y no el sistema de gestión considerado independientemente de éstas, las que hacen que el sistema económico favorezca el desarrollo del país o lo frene. Por consiguiente, son también las que deciden de la prolongación de las relaciones sociales actuales y de la dominación de clase de la burocracia, que se basa en ellas.

IV. El origen del sistema

Según una opinión muy extendida, al régimen actual y a su primer equipo gubernamental —traídos al país por el "Ejército Rojo"— les faltaba una base económica y social, no pudiendo formarse más que en condiciones de ausencia de soberanía nacional propia. De esta manera, las *causas* de la formación del sistema burocrático se desplazan más allá de las fronteras de Polonia, y las causas de lo que ocurre fuera de las fronteras del país apenas tienen interés para los partidarios de esta opinión. Solamente les interesan los efectos, interpretando la situación actual como "la razón del Estado polaco". Así, la ideología nacionalista, a pesar de las apariencias, ayuda a la consolidación de las relaciones sociales sobre las que se basa la dominación de la burocracia.

No discutiremos del papel que desempeñaron las condiciones exteriores en lo referente a la abolición del capitalismo en nuestro país: debilidad de los elementos revolucionarios auténticos y autónomos, papel decisivo del "Ejército Rojo", dependencia muy directa de nuestro gobierno en relación con la burocracia soviética (erigida desde hace ya mucho tiempo en clase dominante), situación del movimiento obrero internacional. Evidentemente todo esto aceleró eficazmente el proceso de burocratización. Sin embargo estimamos que dicho proceso se encontraba objetivamente condicionado por el nivel de desarrollo

económico del país y por su estructura económica y social; es también el caso de la Rusia zarista, de Polonia entre las dos guerras y de la gran mayoría de los países de nuestro campo. También se encontraba condicionado por el relativo aislamiento internacional (las grandes potencias industriales continuaron siendo capitalistas). En el momento de la abolición del capitalismo, se trataba de países atrasados, poco industrializados, lo cual se manifestaba por el paro y especialmente por la sobrepoblación del campo. Su economía se encontraba, de una u otra forma, subordinada a la dominación del capital de los países imperialistas desarrollados.

En tales países, tan sólo la industrialización puede aportar una mejora real de las condiciones materiales, sociales y culturales de la vida de las masas rurales y urbanas, así como el progreso de la sociedad entera. La industrialización entra por consiguiente dentro de los intereses de toda la sociedad y constituye la principal tarea del nuevo poder que ha abolido el capitalismo en interés de la clase obrera y que se prepara a gobernar en su nombre.

Dado el escaso potencial industrial, el excedente económico era poco considerable (se entiende por excedente económico la diferencia entre la producción y el consumo social en curso o, dicho de otra manera, la base de la acumulación). No se podía contar con la ayuda de los países capitalistas desarrollados; al contrario, los mecanismos del comercio internacional conducían al desarrollo de las exportaciones de productos alimenticios y de materias primas, subordinando la economía del país subdesarrollado al capital de las potencias imperialistas que dominaban el mercado y, por ello mismo, frenando la industrialización y perpetuando el subdesarrollo. El desarrollo exigía por consiguiente la independencia en relación con los mecanismos del mercado capitalista internacional: la industrialización podía ser o bien rápida o bien nula.

En la base del desarrollo se encontraban unas reservas enormes de mano de obra sin empleo, la industrialización

se realizaba por consiguiente por la fuerza misma de las cosas, gracias a la utilización de estas reservas y a la rápida construcción de nuevas fuerzas productivas (lo que se conoce como "la vía extensiva del desarrollo"). Además, el incremento del empleo no podía verse acompañado de un aumento rápido del consumo, pues ello habría ocasionado una disminución del excedente económico ya de por sí escaso, imposibilitando un rápido desarrollo del aparato productivo y el empleo de la mano de obra todavía inutilizada, frenando por consiguiente la industrialización. Era necesario conseguir un incremento máximo de la producción y del empleo manteniendo al mismo tiempo el consumo a nivel mínimo; era la búsqueda de un excedente económico máximo y por consiguiente la producción por la producción misma. En tanto que la base industrial no había sido edificada, este objetivo expresaba el interés de la industrialización del país y por consiguiente la producción por la producción correspondió durante un cierto período de tiempo a los imperativos del desarrollo económico y a los intereses de toda la sociedad.

Durante el transcurso de la industrialización se produjo un aflujo masivo de mano de obra campesina sin empleo hacia la industria en construcción, un crecimiento de la clase obrera, cuadros técnicos superiores, intelectuales, y un violento florecer de los cuadros de la tecnocracia. Al mismo tiempo, la necesidad de limitar el consumo impuso una disminución sensible de los salarios de la tecnocracia, intelectuales y empleados en comparación con el período de la preguerra; se produjo asimismo una limitación de los salarios de los trabajadores a un nivel muy bajo, fenómeno resentido por los viejos cuadros obreros como una reducción de sus salarios, y en fin, una política que tendía a privar por la fuerza al campesino de los excedentes agrícolas que superaban las necesidades indispensables de su familia y explotación.

De esta manera, la industrialización, al mismo tiempo que representaba el interés social en su conjunto, no coincidía con ninguno de los intereses de cada clase o grupo

social considerado individualmente. Las aspiraciones naturales de cada grupo social, de los campesinos en tanto que campesinos, de los obreros en tanto que obreros, de los directores en tanto que directores —y no en tanto que individuos que habían visto mejorar recientemente sus condiciones sociales y materiales o con una perspectiva real de que lo hicieran—, eran la elevación máxima de las rentas individuales, y la mejora de la situación material y social de su propio medio y por consiguiente, en cualquier caso, una cierta tendencia al consumo máximo.

Por el contrario, las condiciones de la industrialización imponían la producción por la producción. Para el nuevo poder la industrialización constituía una razón de ser, un objetivo principal. El nuevo poder realizaba este objetivo a pesar de los intereses particulares de las otras clases y estratos, y por consiguiente —hasta cierto punto— contra ellas. Contra los campesinos privados por la fuerza de sus excedentes agrícolas y amenazados constantemente con la expropiación colectiva; contra la clase obrera cuyos salarios eran mantenidos en un nivel mínimo e incluso reducidos; contra los intelectuales y tecnócratas. La realización de esta industrialización exigía que se les privara de la posibilidad de expresar sus intereses particulares y luchar por su establecimiento o defensa; la concentración exclusiva de la totalidad de las decisiones políticas y del poder sobre los medios de producción y el producto social entre las manos del nuevo poder exigía que se independizara la producción de la influencia reguladora del mercado y que se limitara lo más estrechamente posible el terreno de iniciativa propia de la clase obrera, tecnocracia y campesinado. La realización de estas exigencias se expresó mediante la introducción de un sistema de "partido único", impidiendo a los otros grupos sociales —y en primer lugar a la clase obrera— la formación de su propia partido. Ello se realizó gracias al sometimiento de todas las organizaciones a la tutela del poder, el reforzamiento del aparato de coacción dirigido contra los productores, el monopolio de los medios de información y

propaganda entre las manos de una minoría todopoderosa, la liquidación de la libertad de creación y el establecimiento de un sistema centralizado de gestión económica. Y todo ello se vio acompañado de un terror policíaco masivo. De esta manera, la élite, monopolizando en sus manos el poder social y político así como el poder sobre el proceso de producción y distribución del producto social (es decir, la propiedad) hizo de la industrialización su interés de clase y en cierta manera un interés personal. Hizo de "la producción por la producción" su objetivo de clase y la fuente de la consolidación y aumento de su dominación.

Esta minoría se transformó así en una nueva clase dirigente, "la burocracia política central", mientras que el país que dirigía se transformó en un Estado de dictadura de la clase burocrática. Se puede pues afirmar que las necesidades de industrialización de un país subdesarrollado ocasionaron el nacimiento de la burocracia como clase dominante; sólo ella podía responder a estas necesidades puesto que en las condiciones de subdesarrollo del país era la única que podía hacer de la industrialización —es decir de la producción por la producción— su interés de clase.

En estas condiciones, las relaciones de producción basadas sobre la propiedad burocrática aseguraban un rápido desarrollo de la economía, gracias al cual se abrían ante las otras clases y capas sociales una posibilidad de progreso y mejora de la existencia, unas perspectivas de realización dentro del marco mismo del sistema burocrático.

La industrialización ofrecía a las grandes masas del país subdesarrollado un camino hacia la mejora de la existencia mediante una transferencia masiva de las clases y capas menos favorecidas material, social y culturalmente, hacia las clases y capas de un nivel más elevado: del campo a las filas de la clase obrera; del campesinado y de la clase obrera a las filas de los cuadros técnicos, empleados, intelectuales y tecnócratas; todo ello gracias a la expansión de la enseñanza a todos los niveles. El adelanto social de las masas, la liquidación de la sobre-

población y el paro en el campo, se vieron acompañados del aumento del nivel cultural de la población, de los servicios médicos y sociales, de la enseñanza, etc. Gracias a ello, a pesar del terror y la coacción, la burocracia encontró numerosos y entusiastas apoyos en todos los medios sociales. Su poder se veía apoyado, sus ideólogos y propagandistas podían imponer su hegemonía eficazmente a toda la sociedad, ya que la industrialización que dirigía significaba la realización de los intereses de la sociedad en su conjunto. La dominacón de clase de la burocracia se apoyaba por consiguiente sobre una sólida base social. A partir de este momento, la dominación podía durar mientras que las relaciones de producción y especialmente el objetivo de clase de la producción correspondieran a las exigencias del desarrollo económico, o dicho de otra manera, mientras que no se hubiera terminado la construcción de las bases de una industria moderna.

V. La crisis económica del sistema

Hemos visto que el objetivo de clase de la burocracia se orientaba hacia la producción por la producción y que este objetivo correspondía a los intereses del desarrollo económico de un país subdesarrollado durante el período de industrialización primitiva, es decir, durante el transcurso del período de construcción de la base industrial. La duración de este período depende principalmente del estado de saturación de la economía por la industria al comienzo de la industrialización intensiva. En Polonia el final de este período se sitúa en la segunda mitad de la década 1950-1960. En 1956 el aparato productivo era ya tres veces más importante que en 1949 y en 1960 más de cuatro veces superior.

Supongamos que tras haber realizado las tareas esenciales de este período la burocracia mantiene su dominación de clase y también el mismo objetivo de clase. Consideremos la situación que se desprende de estas hipótesis: las bases de la gran industria han sido construídas, el esfuerzo de inversión de los años precedentes ha permitido un impetuoso desarrollo del potencial industrial y el empleo de la mano de obra libre. La producción por la producción se caracteriza por su tendencia a desplazar en la medida de lo posible la totalidad del incremento de la producción al sector A (producción de medios de producción); tiende pues a reconvertir la totalidad del incre-

mento de la producción en nuevos medios de producción. Por consiguiente, la continuación de esta tendencia en las condiciones de "saturación de la industria" significa que la totalidad (incrementada) de los medios de producción, dejando de lado un crecimiento del consumo absolutamente necesario pero lo más reducido posible, debe ser empleada con vistas a la formación de nuevos medios de producción y a la extensión del aparato productivo. En otros términos, el crecimiento del potencial industrial debe ir seguido del incremento de la participación de la acumulación en la Renta Nacional.

La industrialización intensiva no puede producirse en condiciones de equilibrio; dada la debilidad del excedente económico no se dispone de medios necesarios para construir todo al mismo tiempo, guardando unas "proporciones armónicas". Las desproporciones que aparecen durante el período de rápido incremento del potencial productivo crean la necesidad de inversiones suplementarias, ocasionando también la extensión del Fondo de Acumulación.

Supongamos que todo el aparato productivo incrementado gracias a la industrialización debe ser plenamente explotado, lo que significa que se deben crear las condiciones necesarias para la explotación total del potencial industrial incrementado. Ello implicaría —en la hipótesis del mantenimiento de la producción por la producción— un crecimiento tal de la acumulación que el consumo se vería comprimido por debajo del nivel socialmente indispensable. Por otra parte no hay que olvidar que fenómenos como el del pleno empleo, el desarrollo de una civilización industrial y la elevación del nivel cultural de la sociedad llevan una marcha paralela a la elevación de las necesidades de consumo consideradas como indispensables por esta sociedad. Si en estas condiciones se comprime el consumo por debajo del nivel indispensable se crea por ello mismo el peligro de una catástrofe económica, social y política para el sistema. Es por consiguiente imposible comprimir el consumo por debajo de este nivel y por consiguiente es igualmente imposible elevar la tasa

de acumulación de tal manera que permita la explotación total del potencial industrial incrementado.

De esta manera, el bajo nivel de consumo social acaba finalmente limitando la producción misma: el sistema burocrático no escapa a esta ley. La causa de esta limitación no reside en las dificultades de realización del valor producido en el mercado sino en la limitación directa de la reproducción ampliada. El mantenimiento de la producción como objetivo de producción tras haber concluído la construcción de las bases de la industria —es decir en las condiciones de "saturación por la industria"— *se encuentra en el origen de una contradicción entre el potencial industrial ya desarrollado y el bajo nivel de consumo.* Esta contradicción es la causa de una explotación incompleta del potencial industrial, del despilfarro del excedente económico, frenando el auge de la economía. Es por consiguiente un foco de crisis.

Considerando el problema desde el punto de vista más general plausible, puede afirmarse que la crisis se manifiesta por la disminución del ritmo de expansión de la economía, ello a pesar de los gastos consagrados al incremento de la producción. En el transcurso de los años 1950-1955 la Renta Nacional aumentó en un 74 % es decir, con una media aproximada del 10 % anual. En el transcurso de los años 1956-1960, la RN aumentó en un 38 % es decir, con un 6,6 % de media anual; pero no hay que olvidar el descenso del índice de acumulación en relación con el período precedente, durante los años 1956-1959. Por el contrario, durante el transcurso del quinquenio 1959-1963 la RN aumentó —en comparación con el año 1958— apenas en un 30 % es decir, con un 5,2 de media anual, mientras que el incremento de las inversiones ascendió a 53,4 % (es decir, 8,9 % de media anual), de los cuales 60 % fueron consagrados a la industria, es decir más de 10 % de media anual. En el transcurso de los años 1960-63 la participación de la acumulación en la RN fue superior no solamente a las de

1956-1959 sino también a la de 1950-1955; por el contrario, el índice de crecimiento de la RN fue inferior en casi un 50 % al del sexenio y en casi un 40 % al previsto por el Plan (según éste, el crecimiento medio de la RN debería haber sido de un 8 % anual). Ello significa que, aún aumentando los gastos, se obtiene un incremento de la RN cada vez menor. Asistimos a los mismos fenómenos de aumento de los gastos paralelamente a un descenso del ritmo de desarrollo en los otros países en los que reina la dictadura de la burocracia y en los que la industria tiene una participación igualmente importante en la formación de la RN (Checoslovaquia, RDA, y probablemente también la URSS), fenómeno que ha sido recientemente señalado en un artículo de gran importancia del economista Josef Goldmann.

En el transcurso de los años 1960-1962, la proporción de los gastos materiales en el producto global se incrementó del 59,7 % al 61,9 % (lo que significa en cifras absolutas un crecimiento de 137,4 miles de millones de zlotys). En cuanto a la RN su proporción disminuyó durante el mismo período del 40,3 % al 38,1 %. En 1962 la formación de una RN equivalente habrá costado 22.000 millones de zlotys más que en 1960. Ello significa un aumento de los gastos necesarios para la formación de una unidad de RN, es decir, un descenso generalizado de la eficacia. ¿Cuáles son los factores que ocasionan la disminución del ritmo de expansión y el aumento de costos?

1. En las condiciones de mantenimiento de la producción por la producción en el marco de una economía desarrollada, la acción de este freno del bajo nivel de consumo sobre la expansión se manifiesta muy directamente en lo que se ha dado en llamar *el muro de la inflación*. El rápido ritmo de las inversiones y el aumento del empleo ocasiona el aumento del fondo de salarios nominales; en las condiciones de la producción por la producción el abastecimiento del mercado en lo referente a bienes de consumo es incapaz de satisfacer la demanda, lo cual ocasiona un

alza de precios y crea el peligro de un descenso del salario real, colocándole por debajo del nivel socialmente indispensable. Este "muro" aparece ya en el quinquenio actual y aparecerá de forma mucho más aguda durante los años 1966-1970 a causa de un programa de inversiones extremadamente tenso.

2. *El obstáculo de las materias primas.* La escasez de materias primas y combustibles frena las posibilidades de desarrollo de la industria de transformación, constituyendo una de las razones de la explotación incompleta del potencial productivo. Se trata en esta ocasión de un fenómeno técnico, aparentemente desligado de las relaciones de producción. Pero en realidad, la fuente de esta escasez aguda de materias primas y combustibles se compone esencialmente de dos fenómenos que no pueden ser considerados haciendo abstracción del actual sistema. En primer lugar, la producción por la producción misma significa que la expansión se limita en la medida de lo posible al sector A. Sin embargo, en este sector, los costes de los materiales y combustibles son sensiblemente superiores a los del sector B (producción de bienes de consumo). Por consiguiente al desarrollar ante todo y exclusivamente la producción de bienes de producción se eleva el consumo de materias primas y combustibles que corresponde a cada unidad de incremento de la RN. Se aumenta por consiguiente la parte de los gastos materiales y se agotan más de prisa las reservas de materias primas. En segundo lugar, como veremos más adelante, las relaciones de producción actuales ocasionan un enorme despilfarro de materias primas y combustibles. El consumo de acero necesario para la fabricación de un producto dado supera en un 30 % a la de los países europeos desarrollados; el consumo de carbón por unidad producida supera en nuestra industria en un 40-50 % a las medias mundiales. Los planes de disminución de costes materiales se cumplen en un 50 % aproximadamente; ello acelera el agotamiento de las reservas de energía, haciendo aparecer el obstáculo

de las materias primas. En estas condiciones, el único medio de evitar este obstáculo es invertir en la industria de materias primas y combustibles. Pero es sabido que estas inversiones son muy onerosas y a largo plazo. Alrededor de un 45 % de las inversiones realizadas en la actualidad se destinan a la explotación de materias primas. Ello contribuye a frenar el aumento de la RN, aumentando al mismo tiempo los gastos.

3. *El despilfarro del excedente económico* bajo la forma de una explotación excesiva de materias primas y combustibles, de una explotación insuficiente del potencial productivo y de un incremento excesivo de los stocks. Hemos considerado anteriormente el despilfarro de materias primas. El grado de explotación del potencial productivo de toda la industria no lo conoce nadie y las encuestas son tanto más difíciles cuanto que las empresas se esfuerzan por disimular sus reservas. En la industria electrónica el grado de explotación del potencial productivo ha sido valorado en un 58 %. La explotación total del potencial productivo en esta rama de la industria incrementaría la RN en 18.000 millones de zlotys por año. La insuficiente utilización del aparato de producción es un fenómeno extremadamente frecuente; por ejemplo, en el conjunto de las empresas de construcción de nuestro país el índice de explotación de la maquinaria es de un 20 % aproximadamente. Una de las causas del excesivo aumento de los stocks es la "producción no realizada" (lo que en jerga económica polaca se conoce por "buble" o pompa de aire) descuidada por la demanda o inutilizable a causa de su mediocre calidad. Los costes de esta producción constituyen una pérdida; no genera un nuevo valor y no incrementa la cantidad de bienes de consumo. Durante los años 1961-1963 la economía nacional perdió de esta manera alrededor de 21.000 millones de zlotys, no previstos en el Plan. Se ignora la cantidad de reservas útiles incluídas en el Plan mismo; en todo caso, el incremento de las reservas absorbió:

AÑO	MILES DE MILLONES DE ZLOTYS	% RN
1960	28,2	7,4 %
1961	32,9	8,1 %
1962	21,4	5,1 %
1963	32,2	7,3 %

La causa común del subempleo del potencial productivo y de las reservas inutilizadas reside en la *inadaptación general* de la producción a las necesidades. La producción masiva de mercancías que el mercado no absorbe y que se amontonan en almacenes abarrotados se ve acompañada de un déficit agudo no solamente de materias primas sino también de ciertas categorías de herramientas, piezas y montajes, lo cual ocasiona numerosas interrupciones, una explotación insuficiente del potencial productivo y una falta general de regularidad —la recuperación del retraso en el cumplimiento del Plan al final de cada período contable se realiza a costa de un excesivo trabajo de los obreros y a costa de la calidad. La producción no se adapta a las necesidades y ello no solamente desde el punto de vista de la diversidad de productos, sino también desde el punto de vista de la calidad. Además, la calidad mediocre de las materias primas, herramientas y piezas que integran la producción contribuye al descenso de la calidad de los productos terminados, lo cual ocasiona una fuente de despilfarro suplementaria. Es difícil dar una estimación del consumo excesivo de materias primas y combustibles, la utilización incompleta de las fuerzas productivas, las reservas y los perjuicios inútiles que tienen su origen en la calidad mediocre. No admite dudas sin embargo que todo este depilfarro absorbe decenas y decenas de millares de zlotys anuales. Frente a la inmensidad de este despilfarro las manipulaciones económicas consideradas en su conjunto se presentan como remedios insuficientes.

4. *Explotación insuficiente de los factores intensivos de la expansión*, es decir, del aumento del rendimiento debido a la modernización, al progreso técnico y tecnológico (mejoramiento de la calidad, reducción de costes en materias primas, etc.), así como progresos en el terreno de la organización (detección y puesta en explotación de reservas). Llegar a "la saturación industrial" significa que el aparato productivo se ha desarrollado lo suficiente para emplear toda la mano de obra disponible a un nivel dado de productividad en la agricultura. Como consecuencia, la expansión futura ya no puede realizarse por medio de una simple extensión del aparato productivo y el empleo de las reservas de mano de obra, es decir por la vía extensiva, sino que debe realizarse utilizando factores que aumenten el rendimiento —es decir factores intensivos—. Según las informaciones dadas en otoño de 1962 por el ministro de comercio interior, las directivas del plan quinquenal se cumplieron en un 57 % en lo que concierne a la creación de nuevos productos, en 44 % en la mecanización y 29 % en la automatización. La tendencia de las empresas a disimular sus reservas es bien conocida. El fallo de los planes en el terreno del progreso técnico y de la organización, es decir de los planes de aumento del rendimiento en condiciones en que la expansión ya no puede llevarse a cabo a base de factores extensivos, contribuye al estancamiento de la renta nacional.

5. *Barrera de la exportación*, es decir, equilibrio precario de la balanza de pagos causado por el aumento de las importaciones procedentes de los países capitalistas y por la incapacidad exportadora de la industria de transformación. El 18 % de la producción de la industria mecánica se destina a la exportación pero el mercado capitalista no absorbe más que el 4 % (y los países occidentales más desarrollados no absorben más que el 1 %), mientras que las transacciones con esos países constituyen cerca del 39 % del total de transacciones del comercio exterior y mientras que la balanza de pagos es particularmente deficitaria en esa rama. Esto está ligado al hecho de que

la industria no cumple sus planes de exportación, al bajo nivel técnico y a la mediocre calidad de sus productos. Debido a su mediocre calidad y a los precios de coste demasiado altos de las materias primas, esos productos no encuentran comprador o se venden en malas condiciones. Se cubre el déficit dejado por la insuficiente exportación industrial aumentando las exportaciones de materias primas, combustibles y productos alimenticios, que es el tipo de exportaciones menos rentable. Así, no solamente se disminuye la renta nacional, sino que se agrava el déficit de materias primas y combustibles (es decir la barrera de las materias primas) y también el déficit de productos alimenticios en el mercado interior (es decir la barrera inflacionista).

Los *síntomas* de la crisis económica enumerados en los párrafos 3, 4 y 5 son originados finalmente por las mismas causas. Las analizaremos en conjunto.

A menudo, se buscan las causas en el *funcionamiento* defectuoso de la economía, en las imperfecciones del sistema de estímulos, en los instrumentos de medida o en los índices del sistema de gestión. Las empresas están interesadas en cumplir los índices "direccionales" y especialmente el índice de base que en nuestra práctica económica coincide generalmente con el valor de la producción global establecido en el plan. El plan se cumple tanto más fácilmente cuanto que fija unos niveles inferiores a las posibilidades de producción de las empresas (es decir, sin tener en cuenta las reservas), produciendo bienes cuyos precios son muy superiores a los costos de producción (lo que asegura una "acumulación elevada"), o bien eligiendo producciones que, por una cantidad inferior de trabajo, aseguran un valor global o mejor dicho, producciones que necesitan una gran cantidad de materias primas o poco elaboradas. La mejora de la calidad, la baja de los costes en materiales, el progreso tecnológico, en resumen, todo lo que aumenta la proporción del trabajo y disminuye la cantidad de materias primas en el valor del producto final, hace más difícil la realización del plan cuantitativo de

producción global. Las modernizaciones y los perfeccionamientos financiados por las empresas suponen el peligro de sobrepasar el índice del fondo de salarios o bien, el de no realizar el plan previsto. De ahí el derroche de materias primas, la inadaptación de la producción a las necesidades, la calidad mediocre, las dificultades de aplicación de los progresos técnicos, el miedo a la producción para exportar y la pequeña exportación industrial. La falta reside, según unos, en el índice de la producción global que opera como un antiestimulante, y según los otros, en el sistema de gestión centralizada que, no sólo crea antiestimulantes, sino que además paraliza la iniciativa de la dirección y del personal obrero, que son los dos factores intensivos de la expansión.

Hemos visto ya que el sistema de gestión centralizada era la expresión de las relaciones de producción en vigor; no puede ser cambiado totalmente en el cuadro de esas relaciones. ¿Las causas de la crisis enumeradas antes no son más profundas? ¿La simple reforma de los índices respetando el cuadro de las actuales relaciones de producción permitirá vencer a la crisis? Esto es precisamente lo que nos proponemos examinar seguidamente.

En primer lugar, no es cierto que la dirección y el personal obrero de las empresas no tengan ningún campo para su iniciativa; lo tienen y lo manifiestan. Un organismo central no puede decidirlo todo; más imposible es aún el controlar y dirigir la ejecución de todas las directivas concretas y de todos los índices; es imposible controlar a una empresa desde 20 puntos de vista diferentes. Por lo tanto, lo mismo la dirección que los obreros tienen campo para su iniciativa. El obrero intenta bajar el rendimiento, disimular las reservas existentes en su zona de trabajo para retardar la revisión de las normas de trabajo o para fabricarse durante las horas de trabajo y a título personal una cosa para él; sacrifica la calidad a fin de cumplir más fácilmente las normas y, obrando "en interés de la empresa", el control técnico aceptará el producto de mala calidad porque lo esencial es el cumplimiento del plan

cuantitativo. La dirección, por su lado, oculta también las reservas de la empresa a fin de que le fijen un plan más modesto, elige producciones que necesitan una gran cantidad de materia bruta o producen gran acumulación a fin de cumplir más fácilmente con el plan, evita la producción para la exportación o toda producción que exija una gran cantidad de mano de obra. De la misma manera, la dirección evita todo progreso tecnológico, todo perfeccionamiento o modernización cuando es a cargo de la propia empresa. Toda esta iniciativa social y de masas que tiende hacia el cumplimiento aparente, ilusorio, de las directivas fijadas por el plan, está dirigida en el fondo contra esas mismas directivas. Está dirigida por tanto contra el objetivo de clase de la producción. Como toda iniciativa social, constituye una actividad consciente dirigida a realizar los objetivos y los intereses propios de un medio social dado. Ese es el sentido en que la tecnocracia habla del "interés de la empresa", interés que expresa antes que nada el suyo propio pero que constituye sin embargo una plataforma de compromiso con el personal obrero que daría a todos facilidades para "arreglárselas" mejor respetando el cuadro de relaciones de producción y de gestión vigentes. Se trata por tanto y finalmente de la contradicción entre el objetivo de clase de la burocracia dominante —la producción por la producción— y los intereses de grupos que juegan un papel esencial en la producción y que tienden a aumentar al máximo sus posibilidades de consumo. Esa es la contradicción y no esa supuesta contradicción entre las consignas del plan y los antiestimulantes aparecidos como consecuencia de una elección desafortunada de los índices. Así, de lo que se trata en fin de cuentas, es de la contradicción entre el objetivo de clase de la producción, de un lado, y el consumo, de otro; contradicción que tiene por causa las relaciones de producción y no un funcionamiento defectuoso del sistema de gestión.

Esta contradicción, inseparable de las relaciones de producción, ha aparecido desde que se instauraron esas

relaciones con todos los síntomas ya descritos: derroche de materias primas y combustibles, inadaptación de la producción a las necesidades (lo que perjudica considerablemente a la exportación), calidad mediocre, detención del progreso técnico y del progreso en el terreno de la organización, falta de explotación de los factores intensivos del crecimiento económico, etc. Durante la etapa de industrialización primitiva, el objetivo principal era el de construir la base industrial y el de emplear la mano de obra desocupada; el objetivo era por tanto la producción por la producción y la vía extensiva del desarrollo. Toda o casi toda nueva producción que significaba la ampliación del aparato productivo era un éxito; el sistema aseguraba la expansión y, por tanto, sus contradicciones eran un problema secundario. Pero, desde el momento en que el aparato de producción ampliado ha absorbido las reservas de mano de obra desocupada, la plena explotación del potencial construído y la elevación del rendimiento, se han convertido en problemas de primer orden. En esas condiciones, el estancamiento de los factores intensivos del crecimiento económico (inadaptación de la producción a las necesidades, mediocre calidad, detención del progreso técnico y del progreso organizativo) se convierte en un freno y un problema primordial. Las desproporciones y contradicciones del sistema han aparecido con toda claridad en el momento en que apareció la *contradicción entre el potencial económico desarrollado y el bajo nivel del consumo social.* Es por tanto esta contradicción la que constituye la razón profunda de la crisis y de todos sus síntomas.

Hay quienes piden que se sustituya el índice de producción bruta por un índice de producción neta. Se propone también, lo que va aún más lejos, que se haga de la rentabilidad el índice principal. ¿Qué se puede esperar de una reforma de ese tipo en el marco de las relaciones de producción y de gestión vigentes? Probablemente una explotación un poco más económica de materias primas y combustibles. Pero las contradicciones principales no

serían eliminadas. Las empresas van a seguir ocultando sus reservas para que se les fije un índice pequeño y fácilmente realizable. Como antes, las empresas preferirán la producción de bienes que necesitan una acumulación elevada a fin de asegurarse una realización más fácil del plan, seguirán tendiendo a producir con calidad mediocre para cumplir con el índice direccional que por su misma naturaleza será siempre cuantitativo. Continuará por tanto la misma inadaptación de los productos y de la calidad con las necesidades, con todas sus consecuencias en el comercio exterior. Sólo el comprador, a fin de cuentas el consumidor, es capaz de medir el grado de adaptación de la producción a sus necesidades; esta medida es imposible de realizar por un centro de decisión económica que, completamente solo e independiente del mercado, establece los precios y juzga de las empresas según que cumplan o no los índices impuestos por el organismo central que no pueden ser más que cuantitativos. El progreso tecnológico, la modernización y todo perfeccionamiento financiado por las empresas mismas son contradictorios con sus propios intereses; las causas que frenan el progreso en el terreno técnico y en la organización, es decir en el terreno de los factores intensivos del desarrollo, seguirían vigentes.

Se ve por tanto que los síntomas de la crisis descritos en los párrafos 3, 4 y 5 (derroche del excedente económico, falta de explotación de los factores intensivos del crecimiento y la barrera de las exportaciones) dependen igualmente de las relaciones de producción y no pueden ser eliminados realmente en el marco de esas mismas relaciones.

Formulemos un momento la hipótesis abstracta de que la burocracia llevase a cabo esa operación. En el caso de que se mantuviesen las relaciones económicas actuales (tendencia a la producción por la producción), la crisis revestiría la forma descrita al principio de este capítulo. Toda la parte derrochada del excedente económico se invertiría en nuevos medios de producción cuya explota-

ción —de acuerdo con los intereses de clase de la producción— traería consigo un incremento considerable de la acumulación mientras se mantendría al consumo por debajo del nivel socialmente indispensable: de ahí que apareciera la barrera inflacionaria que haría imposible el aumento de las inversiones y paralizaría de esta manera la explotación de los nuevos medios de producción. La crisis aparecería entonces con toda claridad; contradicción entre el potencial económico desarrollado y el bajo nivel de consumo social. Se ve así que el derroche del excedente económico, la no explotación de los factores del crecimiento, no son sino diferentes formas bajo las cuales se presenta esta contradicción principal.

Así, cualquier reforma que perfeccionara el funcionamiento de la economía, incluso si su aplicación fuese posible, no sería capaz de suprimir la crisis si no cambiase al mismo tiempo el objetivo de clase de la producción, es decir, si no pasara de la "producción por la producción" a la "producción para el consumo".

¿Existen en el momento actual reservas suficientes capaces de mitigar la crisis aunque sea por un período limitado? Tales reservas económicas existían en los años de la mitad de la década de los cincuenta, en la época en que la realización de los objetivos principales de la industrialización primitiva puso al descubierto por primera vez la contradicción entre el potencial de producción establecido (el aparato productivo industrial se había triplicado desde 1949) y el bajo nivel, del consumo social; es decir en el momento en que la crisis económica del sistema acababa simplemente de iniciarse.

La fuente principal de esas reservas procedía de las grandes inversiones realizadas en el curso del período precedente. Su realización entraba en la fase final precisamente en los años 1956-1959. Estas grandes inversiones se hicieron rentables en esos momentos, lo que permitía obtener aumentos relativamente elevados de la renta nacional, aunque al mismo tiempo se redujera la parte destinada

a la acumulación y se aumentara la parte destinada al consumo.

La agricultura representaba una segunda fuente de reservas particularmente importante desde el punto de vista del consumo. Gracias a la industrialización, una cantidad importante de trabajadores no empleados en el campo había pasado a las ciudades o, al menos, habían encontrado un trabajo secundario en el sector urbano. Esta mejora de la situación demográfica del campo tuvo como consecuencia inmediata una mejora de las estructuras agrarias y el aumento de las rentas de la mayoría de los propietarios del campo. Se habían creado, por tanto, las condiciones que permitirían un aumento en la producción y en la productividad agraria. Ocurre sólo que en las condiciones de la política estaliniana que consistía en arrançar por la fuerza todo el excedente a los campesinos —a los que se amenazaba además con la expropiación colectiva—, estas posibilidades de crecimeinto no eran explotadas pues el aumento de la producción no presentaba el menor interés para los campesinos. El cambio de política agraria, especialmente la renuncia de la colectivización forzada, ha permitido a la vez, un aumento de la rentabilidad de las explotaciones agrarias gracias a un sistema más suave de drenaje del excedente económico —es decir, dándole ventajas al campesino—, y al mismo tiempo permitió la explotación de las reservas. Se ha asistido así a un aumento rápido de la producción agraria sin esfuerzos importantes de inversión por parte del Estado y sin cambios radicales en la base técnica de la agricultura.

En los dos casos había, por tanto, reservas para aumentar el consumo. La puesta en explotación de esas reservas implicaba de por sí un aumento importante del fondo de consumo. Fue, para la burocracia, un mal necesario, una concesión que le permitiría conservar el poder y su dominación de clase en las condiciones de crisis social y política de aquellos años tormentosos. En el terreno político, la razón de la puesta en explotación de esas

reservas debe situarse en el marco de la revuelta general contra las formas estalinianas de la dictadura; ni hay que olvidar, en primerísimo lugar, el papel desempeñado en este sentido por la presión de la clase obrera. Todo ello dio por resultado un aumento del 30 % del salario real medio y un cambio en la política agraria que permitió un aumento de los ingresos del campesinado.

Las concesiones hechas en favor del consumo tuvieron como resultado una atenuación temporal de la tensión entre el potencial de producción instalado y el bajo nivel social del consumo. Es en este punto en donde debe buscarse la causa principal de la mejora de la situación económica en los años 1956-1959. Ocurre sólo que las reservas que permitieron el aumento de los fondos de consumo habían sido creadas en el período precedente, en la fase de industrialización intensa. El sistema, en el momento de la crisis, ya no producía más reservas; y las que quedaban del período precedente se agotarían a la larga.

Al acabar el quinquenio 1956-1960, las fuerzas productivas, cuya instalación se había emprendido en los años anteriores, habían entrado totalmente en servicio; hacía falta, por tanto, para que la expansión se mantuviese, o bien aumentar las inversiones, o bien aumentar la productividad. Es también al final de este período cuando la agricultura alcanzó su "techo" productivo al nivel dado de técnica, tasa de tributación impuesta por el Estado y estructura de las explotaciones. En los años 1956-1958, la producción agrícola aumentó en un 15 %, mientras que en los años 1959-1960 sólo creció en un 5 %; actualmente apenas es capaz de crecer al mismo ritmo de crecimiento de la población. El estancamiento de la producción agrícola se ha convertido así en una barrera frente a todo intento de aumentar el consumo. Para obtener una victoria duradera sobre la crisis habría hecho falta operar un cambio radical en las proporciones de la expansión y de las inversiones: habría hecho falta modernizar y renovar la base técnica de la agricultura y habría hecho

falta también aumentar constantemente la producción industrial de bienes de consumo. En resumen, habría hecho falta cambiar el objetivo de la producción. Al contrario, a lo largo de las luchas de clase de los años 1956-1957, la burocracia consiguió conservar el poder político y su dominación y pudo así durante los años 1958-1959 estabilizar su dictadura de clase. Las relaciones de producción sobre las que se basa su poder, se mantuvieron, como se mantuvo también el objetivo de clase de la producción. No es nada raro, por tanto, que después del agotamiento de las reservas económicas que permitieron la estabilización, la crisis haya entrado en su fase de madurez al comienzo mismo del quinquenio actual. El sistema no dispone ya de ninguna reserva importante; y en cuanto a sus dificultades, ya no son producto ni de una política agraria estaliniana ni, por ejemplo, de la necesidad de construir rápidamente una poderosa industria de armamento a partir de las bases señaladas. La crisis económica tiene así sólo por causa la crisis de las relaciones de producción.

Por consiguiente, ya no existen más medios de paliar la crisis. Bien al contrario, todo nuevo desarrollo de la industria, en las condiciones de la "producción por la producción" sólo servirá para agravar la contradicción entre el potencial de producción desarrollado y el bajo nivel de consumo. La crisis seguirá así desarrollándose.

El programa de inversiones para los años 1966-1970 prevé la creación de cerca de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo para hacer frente a la "explosión demográfica" (harían falta más aún para asegurar el pleno empleo) y gastos de inversiones de 830 a 840.000 millones de zlotys. Esto significa un nuevo aumento de cerca del 20 % de las inversiones en relación con la renta nacional. A pesar de gastos tan grandes, el crecimiento de la renta nacional previsto por el plan se calcula en un 30 % para los 5 años; esto significa que ya desde el momento de fijar el plan, la burocracia ha tenido en cuenta la acción frenadora del sistema: en el período del

plan de seis años la renta nacional aumentó en un 74 %, el empleo en 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo y todo ello con inversiones por un total de 319.000 millones de zlotys (valor 1961). El informe del Comité Central del Partido Unificado Obrero Polaco al IV Congreso señala que el plan se basa en la hipótesis de la estabilización de los salarios reales; dicho de otra manera, las dimensiones del fondo de acumulación se han establecido en el borde mismo de la barrera inflacionista. A pesar de ello, la experiencia muestra que la realización efectiva del programa de inversiones exige gastos sensiblemente superior a los previstos en el plan. Por consiguiente, o bien se irá más allá de la barrera inflacionista, lo que hará disminuir el valor real del salario por debajo del mínimo socialmente indispensable, o bien no se realizará el programa de inversiones, lo que provocará una nueva paralización del crecimiento de la renta y un aumento peligroso del paro. En un caso como en otro, la agudización de la crisis es inevitable.

Las relaciones de producción fundadas sobre la propiedad burocrática se han transformado así en una fuerte traba al desarrollo de las fuerzas productivas; mientras subsistan esas relaciones de producción, la crisis no podrá sino agravarse. La única e inevitable solución de esta crisis es la abolición de esas relaciones de producción y, por ello mismo, la abolición del poder de clase de la burocracia.

VI. Las relaciones de producción en la agricultura y la crisis

Las relaciones de producción en nuestra agricultura tienen su fundamento en la propiedad campesina individual y el monopolio del Estado sobre el mercado (el Estado es prácticamente el único abastecedor de mercancías industriales destinadas al campo y el comprador más importante de la mayor parte de la producción agrícola).

La producción destinada al mercado constituía en 1961 aproximadamente el 60,8 % de la producción neta de las explotaciones individuales (se llama producción neta a la parte del producto global que queda una vez deducidos los gastos materiales de producción). La dependencia de la explotación agrícola con respecto al mercado es fuerte dado que se compone de una familia que produce ella misma sus medios de subsistencia. Dependencia que resulta de dos causas fundamentalmente diferentes: si se trata de una empresa agrícola especializada, dirigida racionalmente y cuya producción está destinada totalmente al mercado, en este caso el consumo de la familia se satisface por medio del mercado. En el caso de una explotación poco desarrollada, la relación entre los precios de los productos industriales y agrícolas es desfavorable para estos últimos, a lo que se suma la presión fiscal que obliga a la familia campesina que quiere que su empresa subsista a restringir su consumo.

Según los datos de las explotaciones que comunican su contabilidad al IER [1] (y que en general son explotaciones sensiblemente superiores a la media), los gastos de las familias campesinas en alimentación, vestido y ropa aumentan al aumentar la importancia de la explotación. Salvo alimentación y ropa, no hay diferencia notable en los gastos de los diferentes grupos. Pero si separamos de los gastos totales por alimentación los correspondientes a la carne, aparecen unas diferencias sorprendentes: durante los años 1961-1962, el consumo de carne por persona en una familia campesina era: en el grupo de explotaciones de hasta 3 ha (44,6 % de la totalidad de las explotaciones) de 26,2 kg; en el grupo de 3 a 7 ha. (28,9 % de la totalidad) de 27,7 kg; en el grupo de 7 a 10 ha (12,7 % de la totalidad) de 34,3 kg; en el grupo de 10 a 15 ha (7 % de la totalidad) de 39,3 kg y en el grupo de más de 15 ha (2,8 % de la totalidad) de 46,6 kg.

Según la norma A citada anteriormente (apenas suficiente), se prevén 37 kg de carne y embutidos por persona y año. Resulta que más del 85 % de las familias campesinas, que son los principales productores de carne, consumen una cantidad inferior a la norma mínima. No es pues de extrañar que las diferencias de rentas impliquen, en primer lugar, diferencias importantes en el consumo de carne.

Además de la carne, el segundo producto alimenticio cuyo consumo varía según los grupos es la patata. El consumo de patatas suele disminuir al aumentar el nivel de vida. En el caso de las familias campesinas se produce lo contrario. En los años 1961-1962 el consumo de patatas por cada individuo de una familia campesina era en las explotaciones de menos de 3 ha de 216 kg; de 3 a 7 ha, 217 kg; de 7 a 10 ha, 239 kg; de 10 a 15 ha, 251 kg; más de 16 ha, 269 kg.

De los datos anteriores, se deduce que la dependencia de la explotación agrícola respecto al mercado no es un modo de aumentar el consumo sino que por el contrario

[1] Instituto de Economía de la Agricultura.

implica la *limitación del consumo de base de la familia campesina.*

¿Qué es lo que obliga a una familia campesina a limitar de este modo el consumo individual?

En primer lugar, una *presión fiscal directa*, es decir los impuestos y las entregas obligatorias. Claro que las entregas obligatorias son pagadas pero a precios dos veces más bajos que los del mercado libre. En 1961, las explotaciones que comunicaron su contabilidad indican que del conjunto de sus ingresos sólo el 7 % procedía de entregas obligatorias, lo que significa que el Estado acapara gratuitamente gracias a las entregas obligatorias el 7 % del valor de la producción destinada al mercado de una explotación campesina media. Durante el mismo año 1961, los impuestos representaban el 7,5 % de los ingresos de la producción de una explotación agrícola media.

En segundo lugar, la *presión ejercida por el monopolio del Estado* sobre el mercado. El Estado es el *abastecedor* único de cuanto compra una explotación campesina en el mercado. Siendo al mismo tiempo comprador. En 1961, el 76 % de los ingresos de la producción destinada a la venta (en una explotación media) procedían de la venta al Estado (hemos visto que las entregas obligatorias representaban el 7 %).

Además de las entregas obligatorias, el Estado compra a los campesinos sus productos según acuerdos y contratos, a precios en un 30 % inferiores a los del mercado libre.

¿Qué obliga a las explotaciones agrícolas a vender "voluntariamente" al Estado la mayor parte de su producción en condiciones desfavorables?

En ciertas regiones, la compra no obligatoria y los contratos son la única forma de venta posible. Sin embargo, otro factor desempeña el papel decisivo: la presión ejercida por el Estado en cuanto monopolizador del abastecimiento de objetos de origen industrial e indispensables para las explotaciones agrícolas y para la familia. Unicamente las explotaciones que firman contratos tienen dere-

cho a comprar carbón que es indispensable para la cría del ganado (y es esta producción la que proporciona más del 69 % de los ingresos de una explotación media), y lo mismo ocurre con la posibilidad de compra de abonos.

Gracias a este monopolio del mercado por el Estado, la burocracia dominante abre artificialmente "el compás de los precios" y despoja al campo de su excedente económico. Hoy en día se discute con razón del problema del compás de precios (es decir la relación de precios desfavorable al campo entre las dos guerras). Comparemos los precios expresados en kilos de centeno de ciertos artículos industriales comprados por el campo en 1927-1928 y en 1962.

Por un arado de reja, el campesino pagaba en 1927-1928 100 kg de centeno. Hoy lo paga 112 kg de centeno, al precios del mercado no obligatorio o de contratos (69 % de los ingresos procedentes de las ventas de una explotación media), o 73,3 kg, precio del mercado libre (24 % de los ingresos).

Por 100 kg de superfosfato, el campesino pagaba antes de la guerra 31 kg de centeno, mientras que hoy paga 47 kg, precio del mercado no obligatorio y 31 kg según los precios del mercado libre.

Antes de la guerra, un par de zapatos le costaban 99 kg de centeno; hoy 133 kg (mercado no obligatorio) o 90 kg, mercado libre.

Por...[1] de azúcar, pagaba 36 kg de centeno, hoy 53 kg mercado no obligatorio, o 36 kg— mercado libre.

Desde 1928, el potencial productivo industrial ha crecido 6 veces. El rendimiento ha aumentado mucho más y los costos de la producción han bajado más que en la agricultura. Mantener los precios de venta de los productos agrícolas de un modo artificial a un nivel tan bajo es el instrumento más eficaz para obtener excedentes económicos, no por la vía del crecimiento de la producción agrícola sino por la disminución del nivel de consumo necesario de la población campesina. Lo que conduce ade-

[1] Cifra ilegible en el original.

más a limitar las posibilidades de inversión de las explotaciones campesinas.

¿Cuál es el origen de estas tendencias?

Se ha visto (capítulo III) que la compra de abastecimientos al campesinado constituye desde el punto de vista de la burocracia una componente de los gastos para la compra de la fuerza de trabajo de los sectores industrial y servicios. Hemos visto también que la producción para el consumo (y es la característica de la producción agrícola) era para la burocracia un mal necesario, siendo el objetivo la producción por la producción. De este modo y desde el punto de vista de la realización del objetivo de clase, las dimensiones de la producción agrícola quedan determinadas por el nivel del empleo y del mínimo vital, no se trata pues de desarrollar al máximo esta producción sino de obtener con el gasto mínimo el abastecimiento necesario a la conservación de la fuerza de trabajo empleada en la industria, la construcción, las comunicaciones y los servicios. El sistema de drenaje del excedente mediante la disminución de los precios de venta de los productos de las explotaciones individuales (con la consecuente limitación del consumo y de las posibilidades de inversión de los campesinos) es pues un medio de disminuir los gastos de la fuerza de trabajo y es una consecuencia del objetivo de clase de la producción; de este modo la explotación del campesino deriva de la explotación del obrero y está indisolublemente ligada a las relaciones de producción que imperan en la industria.

A pesar de todo esto, el nivel de vida de los campesinos es hoy superior al existente entre las dos guerras, y lo mismo sucede con el rendimiento en la agricultura y sobre todo el rendimiento por individuo. Es el resultado de la industrialización del país que ha liberado el campo de la plaga económica principal que entre las dos guerras no era otra que los millones de personas inútiles en la agricultura y que hoy han pasado a las ciudades y han encontrado salarios en otros sectores. Este proceso tuvo lugar durante los años 1949 y 1955. Pero en esta época, la polí-

tica agrícola que consistía en obtener por la fuerza el producto excedente y que amenazaba a los campesinos con la colectivización forzada, es decir con la expropiación, no permitía utilizar la supresión del excedente de población para lograr un aumento de la producción agraria y del consumo de los campesinos.

En 1956, se renunció a la política de colectivización y se cambiaron las formas de drenaje del excedente. La presión económica debida al monopolio del Estado sobre el mercado y el compás de precios han sustituido a la presión administrativa y policíaca. Esta concesión hecha de mala gana ha permitido sin duda al campo explotar las reservas creadas por la desaparición del exceso de población en beneficio de un aumento de la producción y del consumo.

De todas formas, las relaciones entre productores campesinos y el Estado no han cambiado, los métodos son diferentes, pero el drenaje del excedente económico y la obtención de la masa necesaria de mercancías se logra por la limitación del consumo familiar y de las posibilidades de inversión, y no por la vía del desarrollo de la agricultura. De todos modos, no podía suceder de otra manera ya que las relaciones de producción en la industria tampoco han cambiado. Por estas razones, el crecimiento de la producción agrícola debía detenerse y efectivamente se ha parado una vez agotadas las reservas creadas durante el período del plan de 6 años. Durante los años 1956-1960, la producción agrícola global aumentó aproximadamente en un 20 %, pero los 3/4 de este incremento corresponden a los años 1956-1958. Durante los últimos 4 años, 1961-1964, la producción agrícola apenas sigue el aumento de población y las variaciones accidentales adquieren el carácter de cataclismos económicos. Se ha llegado a un nivel de estancamiento semejante al del período 1949-1955, con la diferencia de que hoy no pueden crearse nuevas reservas que pudieran servir en el futuro de base para un desarrollo rápido: el plan para 1966-1970 prevé mantener el empleo en el sector privado de la

agricultura al nivel actual y una cierta disminución de la superficie total de las explotaciones.

Hoy la causa del estancamiento no estriba en una "política agrícola inadecuada", es decir en la *forma* del drenaje del campo, sino en el *principio* mismo del drenaje de los excedentes que quita al campo las bases materiales de su expansión (el Fondo de Desarrollo de la Agricultura no cambia en nada la situación: por ejemplo, el precio de la hectárea trabajada con un tractor del Círculo Agrícola es, según la tarifa de 220 zlotys, o sea 100 kg de centeno (precio del mercado no obligatorio) o si se quiere el valor de un arado de reja. Para la mayor parte del campesinado esta vía de mecanización es demasiado cara: durante los años 1959-1962 el Fondo de Desarrollo de la Agricultura fue explotado en sólo el 22 %. Así pues la crisis de la agricultura procede directamente de las *relaciones de producción actuales.*

¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? Para responder a esta pregunta, hay que tener en cuenta un factor del que hemos prescindido hasta el momento cuando hemos hablado de las relaciones entre los productores campesinos y el Estado. Nos referimos a la división del campesinado en capas diferentes.

En 1960, las explotaciones pequeñas (entre 0,5 y 5 ha) constituían el 52,5 % del total (entre las cuales las explotaciones de menos de 3 ha representaban más del 40 %) y ocupaban 27,5 % de la superficie cultivada.

Las explotaciones de más de 10 ha constituían el 10,7 % de la totalidad y ocupaban el 32,6 % de la superficie explotada: entre éstas, las explotaciones mayores, más de 15 ha, deben ocupar un puesto importante pero el GUS no da información sobre el tema.

Por cada 100 explotaciones pequeñas, se cuentan 87,5 cabezas de ganado y 23,3 caballos, mientras que por 100 explotaciones de más de 15 ha, se cuentan 590 cabezas de ganado y 216,2 caballos. Además, por 100 pueblos estudiados en 1962 por el Instituto de la Economía de la Agricultura, contaban con 98 tractores privados, y esto

únicamente en las explotaciones de más de 15 ha. Los datos sobre la estructura y el equipo de las explotaciones parecen indicar la existencia de un embrión de relaciones capitalista-aparcero. Sin embargo el proceso de concentración de las propiedades es sumamente lento y el trabajo asalariado no desempeña un papel importante, apenas el 3 % de las explotaciones lo emplean (a lo más 300 días por año). ¿Cómo explicar esto?

Las condiciones para que una explotación de tipo capitalista llegue a realizarse son las siguientes:

1. Las propiedades mayores deben disponer de medios de acumulación suficientes.
2. Debe haber una oferta de tierra abundante y barata, procedente de la quiebra de las pequeñas explotaciones.
3. Debe existir una fuerza de trabajo abundante y barata.

En el período 1950-1955, la explotación del campo se realizaba principalmente mediante entregas obligatorias y los impuestos. Es decir, cargas económicas crecientes con la importancia de la explotación agrícola. Si a esto se añade la política antikulak, las grandes explotaciones carecían de posibilidades de acumulación y estaban condenadas a la quiebra.

Desde 1959, el drenaje del campo se ha efectuado principalmente mediante el compás de precios cuya apertura está determinada por el monopolio del Estado sobre el mercado. Es una forma de explotación que pesa uniformemente sobre cada productor y que es más fácil de soportar cuanto mayor y más rica sea la explotación, resultando lo contrario para las pequeñas. Si la masa de las explotaciones pequeñas (52,5 % del total) perdiese las fuentes de ingreso extra-agrícola en las condiciones de una gran apertura de la tijera de precios, no podrían soportar las cargas fiscales y quebrarían. Así aparecería una mano de obra abundante y barata y una oferta importante de tierras, condiciones indispensables de una explotación capitalista de la tierra.

Lo que salva la masa de las explotaciones pequeñas

de la quiebra y pone un freno a la instauración de relaciones capitalistas en el campo es el trabajo asalariado de los campesinos en las empresas del Estado. Lo que se llaman campesinos-obreros, constituye el 26 % de los asalariados de la economía nacionalizada, mientras que sus explotaciones forman el 45,5 % de las explotaciones individuales agrícolas del país. De este modo, es decir empleando en la industria a personas que viven en el campo y poseen pequeñas explotaciones agrícolas, se ha efectuado en gran parte la absorción del excedente de fuerza de trabajo.

Las reducciones de horario que se han producido en los últimos años en las empresas industriales han demostrado que estos campesinos-obreros forman un grupo particularmente sensible a los peligros de despido. Al mismo tiempo se ha podido comprobar en 1962, por primera vez desde el final de la guerra mundial, una disminución del 15 % de la fuerza de trabajo en el campo.

El programa de inversiones para el período 1966-1970 prevé la creación de 1,5 millones de puestos nuevos de trabajo, pero incluso la realización efectiva de este plan no podrá compensar el aumento de la población en edad de trabajar. En las condiciones de paro y de una presión importante sobre el mercado del trabajo, es fácil prever que se concederá una prioridad al empleo de los habitantes de los centros industriales y que por el contrario los campesinos-obreros serán las primeras víctimas de las reducciones. Es por eso por lo que aparece como utópico el intento de mantener el nivel del empleo en la agricultura privada, incluso si el Plan se realiza plenamente. Aunque esta última hipótesis nos parece inverosímil, ya que como siempre los fondos de inversión previstos serán seguramente insuficientes para la realización del programa material de inversiones; sin embargo estos fondos han sido fijados en el límite de la barrera inflacionista y su superación puede traer consecuencias graves; y por otro lado, la posibilidad de no realización del programa material de inversiones significa una elevación violenta

del nivel de paro y, como consecuencia, el despido masivo de campesinos-obreros.

Como ya se ha indicado, el tanto por ciento elevado de campesinos-obreros es el signo de un equilibrio demográfico en el campo y al mismo tiempo un factor favorable a la masa de las pequeñas explotaciones. Y es además el obstáculo principal que se opone al establecimiento de relaciones capitalistas en el campo. Por consiguiente, la crisis creciente de la industria va a hacer aparecer inevitablemente un excedente de mano de obra en el campo (despido de campesinos-obreros) y la quiebra de numerosas explotaciones pequeñas; lo que significa una vuelta parcial a una superpoblación campesina (por lo tanto una regresión con respecto a las adquisiciones logradas por el campo durante el período de industrialización), creándose así las condiciones para la transformación de las explotaciones más ricas en granjas capitalistas.

Como puede verse, la crisis de la economía agrícola está estrechamente ligada con la crisis económica del sector de la gran industria y debe necesariamente aumentar, en el marco de las relaciones actuales de producción. La única manera de combatir con éxito la crisis en la agricultura como en la economía en general resulta ser la supresión de las relaciones de producción sobre las que está fundado el dominio de clase de la burocracia.

VII. La primera revolución antiburocrática: 1956 - 1957

Nuestro texto debía contener un capítulo consagrado al análisis de la lucha de clases durante los años 1956-1957. Debido a la intervención de los órganos del MSW[1], no hemos tenido tiempo de escribirlo. Pero como tiene una importancia considerable para la comprensión de nuestra posición política y como además nuestro intento de reflexión sobre los acontecimientos de octubre y las causas de la caída de la tendencia de izquierdas así como sobre la derrota de la revolución de 1956, fue el punto de partida de la evolución de nuestras ideas, consideramos oportuno presentar brevemente las tesis fundamentales del capítulo no escrito.

Durante los años cincuenta estalló la crisis internacional del estalinismo, primera fase de la crisis general de la dictadura de la burocracia. Esto tuvo como cosecuencia las primeras manifestaciones revolucionarias de la clase obrera: la huelga general en RDA, las manifestaciones y los combates callejeros del 17 de junio de 1953 en Berlín, una serie de huelgas en los campos de concentración en la URSS, los acontecimientos de junio de 1956 en Poznan y las primera revoluciones antiburocráticas en Polonia y en Hungría.

El origen económico de los acontecimientos de este

[1] Organos de seguridad.

período era el comienzo de la crisis económica del sistema. Desde el momento en que terminó la etapa de la construcción de la infraestructura económica y el empleo de los excedentes de fuerza de trabajo, apareció la contradicción entre el potencial productivo creado y el bajo nivel de consumo social. En estas condiciones para la mayor parte de la sociedad las perspectivas de mejora de su existencia dejaban de estar ligadas al paso de las clases y capas inferiores hacia las clases y capas más favorecidas material y socialmente; dependían a partir de este momento de la mejora de las condiciones materiales, sociales y culturales de su propio medio. El interés específico de la clase campesina desposeída por la fuerza de sus excedentes, de la clase obrera con salarios de hambre, de los vigilantes del trabajo con bajos salarios y sin poder de decisión, se reducía en cada caso a una cierta forma de aumento del consumo, o que entraba en contradicción con el objetivo de clase de la producción burocrática.

Así desde el momento en que todos estos intereses de clase han alcanzado una importancia decisiva en la práctica económica y social y en la conciencia de los individuos, toda la sociedad se encontró en conflicto con la burocracia dominante. El sistema estalinista de dictadura policíaca total que tenía como objetivo desposeer a todas las clases y capas sociales de las posibilidades de formular sus intereses propios y de luchar por su realización, llegó a ser el objeto de un odio general y provocó la rebeldía en lugar de asegurar la sumisión. Dejó de ser un instrumento eficaz de dominio de la burocracia y por consiguiente la conservación posterior de esta forma de dictadura carecía de objeto. Y en ese momento tiene lugar el XX Congreso.

Como la crisis social había aparecido en la primera fase de la crisis económica del sistema, la industria disponía aún de reservas considerables acumuladas durante el período de la industrialización primitiva. Han sido mencionadas en los capítulos anteriores: se recor-

dará que eran reservas destinadas al consumo y su puesta en circulación ha sido motivada por la amenaza que pesaba sobre el poder y la presión directa de la clase obrera. Pero el hecho mismo de la existencia de esas reservas ha permitido una estabilización temporal y la posibilidad de una reforma interna al sistema; lo que permitió a la burocracia encontrar un medio objetivo de mantener y fortalecer su dominación de clase.

La explotación de estas posibilidades exigía un cierto plazo. Por esto en los países donde estalló la revolución, la burocracia tuvo que mantener su poder a corto plazo mediante medidas políticas con el objetivo de alcanzar a largo plazo la estabilidad del sistema apoyándose en las reservas económicas.

La burocracia húngara fue salvada por la intervención del ejército soviético con relativa facilidad gracias al frenazo de la revolución en Polonia, al retraso de la crisis social en la URSS y a la ausencia de situación revolucionaria en Checoslovaquia, en una palabra, al aislamiento de la revolución húngara.

En Polonia, la burocracia ha conservado su poder por medios pacíficos. ¿Por qué razones?

El desenlace de la revolución está determinado por el combate de dos clases sociales esenciales: la clase obrera y la burocracia. Los acontecimiento de Poznan han demostrado con claridad suficiente que son estas dos las fuerzas principales del conflicto. El resultado de la revolución está condicionado por la hegemonía de la clase obrera, fuerza antiburocrática más potente y más consecuente.

Para que la clase obrera sea capaz de desempeñar el papel dirigente, es necesario que sea consciente de sus propios objetivos y capaz de formularlos en un programa político. Debe por lo tanto organizar, en tanto que clase luchando por el poder, su partido (o partidos).

El embrión de la vanguardia política del movimiento de las masas obreras hubiera podido ser lo que se llamó la Izquierda de Octubre, corriente política compuesta en gran parte por los dirigentes naturales de la opinión

de los medios obreros, jóvenes e intelectuales. La izquierda se distinguía de la corriente liberal esencialmente por sus posiciones respecto a los consejos obreros en los cuales veía la base de las nuevas relaciones de producción y la vertebración del nuevo poder político. Sin embargo era una corriente heterogénea. La izquierda no se separó de la corriente tecnocrática en los consejos obreros (la reivindicación de gestión de la empresa por los consejos no superaba el marco del programa de la tecnocracia); tampoco se separó de la burocracia liberal en el juego político a escala nacional. No supo distinguirse netamente del frente social antiestaliniano en cuanto movimiento específicamente proletario. En esta situación la izquierda no era evidentemente capaz de formular su propio programa político, de propagarlo de modo organizado entre las masas, de formar partidos. Todo esto le faltó a la izquierda para transformarse en una fuerza política autónoma y evitar el convertirse en la fuerza de apoyo de izquierda de la burocracia liberal en el poder.

El VIII Pleno del Comité Central del Partido Obrero Unificado Polaco fue una victoria del ala liberal en el seno de la burocracia. Este ala se proponía atenuar la crisis social y estabilizar el sistema mediante su reforma interna y concesiones económicas, encabezando así el movimiento de masas para mantenerle dentro de límites inofensivos para el sistema.

Se eligió una dirección que fuese popular y se presentó una plataforma que contenía reformas y promesas, lo que era indispensable para los fines de la burocracia. La renuncia a la colectivización y el cambio de la política agraria fueron eco de las aspiraciones campesinas (aunque esto responde más bien a los intereses de los campesinos ricos); la ampliación del margen concedido a la iniciativa privada responde a los deseos de la pequeña burguesía; el acuerdo con el episcopado eliminaba un factor importante de tensión política y creaba una nueva posibilidad para la propaganda política (el acuerdo electoral con Wyszynski). La política de aumentos salariales

y de ingresos de los directores y cuadros tenía a vincular la tecnocracia al sistema; la crítica del Plan de 6 años y el anuncio de una nueva política económica despertaron una esperanza general de aumento de nivel de vida; y sobre todo fue el problema nacional el que popularizó a la nueva dirección: las masas estaban dispuestas a considerar la soberanía recientemente conquistada por la burocracia polaca como su propia soberanía. Por el contrario, no habían prometido a la clase obrera el aumento de salarios que ella misma conquistó posteriormente. Se reconoció el hecho consumado de los consejos obreros en las fábricas pero no se les concedió ningún derecho efectivo, y la nueva dirección de la burocracia se opuso primero a escondidas y luego abiertamente a su desarrollo.

Octubre de 1956 fue, sin embargo, no solamente el mes del VIII Pleno sino también el punto culminante de la revolución. En los meses siguientes la nueva dirección de la burocracia se encontraba sin medios suficientes para aplastar la revolución por la fuerza. La única posibilidad que tenía la burocracia de conservar el poder residía en conquistar la confianza y la autoridad para la nueva dirección, la hegemonía sobre las masas mediante maniobras y concesiones hasta el momento en que la estabilización económica atenuase la gravedad de la crisis social o hasta que el aparato del poder recuperase su fuerza de represión y pudiese ejercer de nuevo su control sobre la sociedad. La única posibilidad de desarrollo de la revolución residía en la formulación de un programa de clase proletario y la organización en torno al mismo de un movimiento capaz de combatir el poder de la burocracia liberal.

En ese momento decisivo, la izquierda no sólo no propuso tal programa ni organizó su propio partido sino que por el contrario apoyó a la burocracia liberal que era la principal fuerza contrarrevolucionaria. Toda la enorme autoridad de que gozaban en sus medios los militantes de la izquierda fue así transferida a la nueva dirección. Así la izquierda contribuyó a mantener en el poder a la

burocracia y preparó su propia muerte política y la derrota de la revolución. En la primavera de 1957, en la tribuna del IX Pleno, la dirección de la burocracia podía proclamar "la lucha en dos frentes", para el restablecimiento del monolitismo en el partido, y condenar abiertamente la concepción del desarrollo de los Consejos obreros y del Congreso Nacional de Consejos calificándolos de "utopía anarquizante". En otoño de 1957, la burocracia podía ya pasar a la batalla decisiva. Comenzó por aplastar con la ayuda de medios policíacos la huelga de los empleados de los tranvías de Lodz; continuó clausurando *Po Prostu* y ordenando a la policía que disolviese violentamente las manifestaciones de masas de Varsovia (del 4 al 7 de octubre de 1957), liquidando la libertad de prensa, depurando el partido, lo que suprimía la libertad de discusión en el seno del mismo y le concedía de nuevo su carácter monolítico, y finalmente sometiendo en la primavera de 1958 los consejos obreros moribundos al control directo del partido por el intermedio de los comités de empresa y a su control indirecto por el aparato sindical (la creación de lo que se llama la Conferencia de las secciones autónomas obreras). Así todas las conquistas de octubre que salían del marco de la reforma interna del sistema fueron liquidadas y la izquierda de octubre definitivamente aplastada.

La explotación de las reservas económicas y el aumento de los salarios reales conquistados por la clase obrera crearon las bases de la estabilización de la dictadura reformada de la burocracia, pero como ya hemos visto, estas reservas tenían un carácter temporal; las relaciones de producción no habían cambiado y por ello una vez agotadas las reservas al final del último Plan quinquenal la crisis económica alcanzó su madurez. El sistema carecía de reservas económicas y de bases para una maniobra reformista: las reformas que no pusiesen en peligro el carácter de clase del régimen habían sido aplicadas. Con la reaparición de la crisis económica, comienza la crisis social general.

VIII. La crisis social general del sistema

La historia conoce un sinnúmero de regímenes fundados en la injusticia y que han durado largos siglos. Ningún régimen ha caído por la simple razón de explotar y oprimir a las masas. Pero ninguna clase ha podido conservar el poder durante un plazo largo si ha tenido que apoyarse únicamente sobre la violencia ejercida sobre el resto de la sociedad. Para conservar su poder, ha tenido que realizar un programa con ciertos valores sociales que le permiten imponer a las otras clases y capas sociales sus propias opiniones e ideas. En una palabra, ha impuesto su hegemonía. Si esto falta, ni las bayonetas pueden sustituirlo.

¿Qué debe conceder la clase dominante a las otras clases y capas sociales para obtener su apoyo que le es indispensable? La posibilidad de realizar en el marco del sistema a lo menos lo que cada sector considera como el mínimo de prosperidad: la mejora de las condiciones materiales y culturales, las posibilidades de promoción, etc. En la base de todo esto, se encuentra el desarrollo económico. Mientras las relaciones de producción sobre las que está fundada la dominación de clase de la burocracia favorecen el desarrollo rápido de la economía, es decir durante el período de industrialización intensa, la promoción social en masa ha mejorado la situación de millones de personas, elevado el nivel cultural de toda

la sociedad y ha asegurado así una base social amplia a la hegemonía de la burocracia. Durante el período de estabilización que siguió a octubre, la movilidad de las masas fue limitada, pero la clase obrera y casi todos los medios sociales vieron aumentar de modo substancial sus ingresos. Pero hoy en día, en la época de la crisis económica del sistema, ¿qué puede ofrecer la burocracia a las otras clases y capas sociales?

La clase obrera, por razones objetivas, es el enemigo principal de la burocracia. El obrero se encuentra en el escalón más bajo de la escala social. De los capataces al primer ministro, todo el mundo le domina, y él no domina a nadie. La explotación del obrero constituye la base material del mantenimiento del sistema. Por ello, todo el aparato estatal y su fuerza de coerción están dirigidos en primer lugar contra la clase obrera, para la protección política de la explotación. Esto era así antes y lo sigue siendo hoy. Pero durante los años 1949-1955 y 1956-1959 la situación de los obreros mejoró aunque cada vez de modo distinto. Las estadísticas oficiales que hemos citado (capítulo III) muestran que durante los años 1960 al 1963, el ingreso medio real *per capita* en una familia de obreros industriales aumentó el 2,6 % es decir el 0,6 % por año.

Si tenemos en cuenta: 1) el aumento oculto del costo de vida debido a los cambios acaecidos en la calidad y tipos de mercancías; 2) el hecho de que en los últimos años, los precios que más han subido son los de los artículos de primera necesidad (que absorben la parte más importante del presupuesto de las familias más pobres), constataremos que durante los últimos 4 años el nivel de vida de la clase obrera ha tenido tendencia a disminuir; este hecho ha sido percibido sobre todo en las familias que no se beneficiaron de una promoción social o en las que no ha aumentado el número de asalariados.

Como ya hemos señalado, el plan para los años 1966-1970 prevé la creación de 1,5 millones de nuevos puestos de

trabajo al precio enorme de 830 a 840.000 millones de zlotys dedicados a las inversiones. Sin embargo según el cálculo de los demógrafos (artículo de Holzer publicado en *Trybuna Ludu* antes del XV Pleno del Comité Central del POUP) el incremento de la población en edad de trabajar será de dos millones, lo que significa que incluso la realización del Plan implica una insuficiencia de 500.000 empleos. En el IV Congreso del Partido, no se ha prometido ningún aumento de salarios reales; pero a partir de datos publicados (aumento del consumo individual del 28 % y aumento del empleo del 18 %) se puede deducir que si el Plan es perfectamente realizado, el salario real medio aumentará en los futuros 5 años de un 10 % aproximadamente, es decir un 2 % por año. Sin embargo como ha demostrado el profesor Kalecki, las promociones necesarias cada año absorben aproximadamente el 2 % del fondo salarial. Al mismo tiempo el abanico de salarios entre obreros, cuadros superiores, ingenieros y personal técnico se abre; durante los años 60 a 63, el ingreso real medio por cabeza en las familias de los cuadros técnicos de la industria aumentó el 11,6 %, y en las familias obreras, el 2,6 % según las estadísticas oficiales.

En el informe del Comité Central del IV Congreso del Partido se indica que el fondo de inversiones ha sido establecido para obtener por lo menos "la estabilización del salario real", es decir al límite de la barrera inflacionista. Esto no significa otra cosa que los salarios reales de los obreros deben disminuir ligeramente durante el próximo quinquenio si el Plan se realiza bien.

Pero durante los 20 años de existencia de la República Popular Polaca, jamás las inversiones han correspondido a la cantidad prevista y nunca se llevaron a cabo a tiempo. Nada indica que el quinquenio próximo sea una excepción. La cantidad de 840.000 millones de zlotys será con toda seguridad insuficiente para la realización del programa material de inversiones, y el fracaso de este programa significa un aumento importante del paro. Será

necesario encontrar los medios suplementarios para realizar el programa de inversiones; pero estos medios no pueden obtenerse más que del fondo de consumo, lo que conducirá a un resultado contrario a las hipótesis, los salarios reales no serán estabilizados, sino que por el contrario sufrirán una baja importante.

Las posibilidades de completar el fondo de acumulación, disminuyendo los salarios reales, son muy limitadas tanto por razones políticas como económicas. Es pues probable que el programa material de inversiones de 1966-1970 no se realice; y no se conseguirá crear a tiempo el 1,5 millones de puestos de trabajo previstos en el Plan. Sin duda el número de personas desocupadas será superior al medio millón.

Las dimensiones de este paro masivo van a obligar, seguramente, a los dirigentes de la economía a emplear una parte de esas personas a pesar de la falta de empleos. Entonces el fondo de salarios reales va a aumentar, pero no la producción. Lo que a su vez provocará una perturbación en el equilibrio del mercado con subidas de precios y disminuicnón de los salarios reales. A pesar de todo, centenares de miles de individuos en edad de trabajar no encontrarán empleo.

Como puede verse, en las condiciones de maduración de la crisis, el sistema no solamente despoja a la clase obrera de las perspectivas de mejora de sus condiciones materiales, sino que resulta incapaz de asegurarle la conservación de su nivel de salario y de trabajo, o dicho de otro modo, la seguridad del futuro.

Al considerar el consumo social como un mal necesario, la burocracia está obligada a mantener los salarios de numerosas categorías sociales en el límite del mínimo vital. Esto no concierne únicamente a los obreros de la industria, de la construcción y del transporte sino también a la mayor parte de los trabajadores de las comunicaciones, de los empleados de ayuntamientos y del comercio, de la Salud Pública, de la Enseñanza, y buena

parte de los empleados de la Administración. Desde el punto de vista de la situación material y de las perspectivas para el futuro, toda esta masa de asalariados mal pagados no se diferencia en nada de la clase obrera. Por ello, todo lo que hemos dicho sobre las condiciones materiales de existencia de la clase obrera en los períodos de crisis económica del sistema se aplica perfectamente a la mayor parte de los asalariados de los sectores no agrícolas.

La industrialización mejoró considerablemente las condiciones de vida sociales y culturales de la clase obrera; favoreció la generalización de la enseñanza y las posibilidades de promoción a los jóvenes por la apertura a todos de la Enseñanza Superior. Muchas de estas adquisiciones —las viviendas baratas del Estado, la asistencia médica gratuita, los servicios sociales—, constituyen, dado el bajo nivel salarial, un componente indispensable del mínimo vital históricamente formado. En las condiciones de la crisis, la burocracia limita en primer término todos los gastos dedicados a las inversiones consagradas "al hombre", lo que recae fundamentalmente sobre las clases más pobres de la población, la clase obrera, los asalariados mal pagados y los campesinos más pobres.

A pesar de las condiciones particularmente malas de la vivienda, Polonia ocupa en Europa uno de los últimos puestos en lo que respecta a la construcción de viviendas. Además se está pasando al sistema de cooperativas de construcción que según el nuevo Plan Quinquenal deben proporcionar el 60 % de las viviendas construídas. De este modo los gastos de construcción pasan de estar a cargo del presupuesto del Estado a estar a cargo de los ingresos privados. Esto significa que las viviendas no serán para los que tienen más necesidad de ellas sino para los que puedan pagárselas. La probabilidad de obtener una vivienda del Estado es reducidísima y un obrero cuyo salario apenas cubre sus necesidades mínimas no es muy probable que pueda ahorrar.

La limitación de los gastos culturales así como el au-

mento de precio de este tipo de servicios y bienes crea una regresión en el dominio de su difusión. El número de espectadores en los teatros disminuye, las tiradas de los libros y periódicos, incluídos los libros escolares, han disminuído de un modo impresionante. Esto repercute particularmente sobre las familias obreras que se encuentran al nivel del mínimo vital y para las cuales el aumento de precio de las entradas de teatro y cine, de los libros, periódicos, etc., significa la renuncia a estos bienes culturales elementales.

La limitación de los gastos para la enseñanza superior, sobre todo de becas, cantinas y ciudades universitarias, hará el acceso a ésta más difícil a la juventud obrera, campesina y de las ciudades pequeñas. El tanto por ciento de hijos de obreros y campesinos en los centros de enseñanza disminuye la barrera del dinero, limita el derecho a la enseñanza, y por consiguiente, las posibilidades de promoción.

La agudización de la crisis agrava inevitablemente la condición del obrero en los centros de trabajo. La amenaza de paro que apunta ya aumenta la arbitrariedad de la dirección de los vigilantes y capataces y facilita la presión oficial sobre el obrero. En el pasado, el poder se vestía de mono azul, alardeaba de su origen obrero, condecoraba a los mejores obreros y se encontraba, en cierto modo, molesto al pagar diez veces más a un director que a un obrero. Hoy el poder viste con elegancia, los directores, que extraen la plusvalía a los obreros, son los héroes positivos de la construcción del socialismo y su coche y su residencia en el campo son el testimonio elocuente de su prestigio social y de sus virtudes cívicas. Hoy la explotación es manifiesta y todo el mundo la ve. Y se consigue no a través de la propaganda y el entusiasmo obligatorio sino abiertamente mediante la sanción económica y la presión administrativa y, en los casos de tentativas organizadas de resistencia, con la ayuda de la policía. Hoy los sindicatos toman con el gobierno

y aplican con los directores las decisiones de despedir al personal (acción "R")[1].

Como se ha visto la crisis agrava no sólo la condición material de la clase obrera sino también su situación social y cultural; aumenta su dependencia en los lugares de trabajo, y le suprime la menor posibilidad de producción y de las relaciones sociales actuales.

La crisis obliga a la clase obrera a alzarse contra la burocracia y el sistema para defender el nivel actual de su existencia material y cultural.

La burocracia espontáneamente no concedería ni un zloty a la clase obrera; incluso bajo presión, en las condiciones de crisis y de falta de reservas, no tiene nada que conceder. Toda acción de huelga de gran amplitud debe, en estas condiciones, transformarse en un conflicto político con la burocracia. Es el único medio que tiene la clase obrera de cambiar su situación. Hoy día, en la época de la crisis general del sistema, el interés de la clase obrera es la revolución: suprimir la burocracia y las relaciones de producción, hacerse cargo del control de su propio trabajo y del producto del mismo, del control de los objetivos de la producción, es decir el establecimiento de un sistema económico, social y político fundado en la democracia obrera. Los intereses de la mayor parte de los asalariados, dada su situación proletaria, coinciden con los de la clase obrera.

En el campo, la crisis significa ante todo la reducción masiva del número de campesinos-obreros, así como la reaparición del exceso de población agrícola, la pérdida de una fuente de ingresos extra-agrícolas que ayudan a vivir a las familias de los campesinos pobres, que son en nuestro país las más numerosas, y que permitían la existencia de un número elevado de granjas pequeñas. Para la mayoría de los campesinos, todo esto no significa solamente una pérdida de perspectivas de mejora y de progreso social, sino también la degradación de su situación material, y la amenaza de desaparición de su

[1] "R", inicial de "recukcja".

propiedad agrícola. Unicamente gana una minoría reducida: los campesinos ricos a quienes una mano de obra abundante y tierras baratas abrirá el camino hacia la capitalización. Pero incluso este grupo sufre la presión fiscal del país como una limitación de sus posibilidades de acumulación y de desarrollo capitalista, y por esta razón, aunque la política sea en este momento muy suave para ellos, son hostiles al sistema o a lo menos no prestan un apoyo activo a la burocracia gobernante.

Si toda la sociedad carece de perspectivas, es la *juventud* la más sensible a esta situación. Ya que esas perspectivas constituyen su futuro y su vida. El paro es una calamidad para toda la clase, pero lo es sobre todo para los jóvenes que llegan a la edad de trabajar. Es precisamente para ellos para los que faltará trabajo. El desarrollo de la construcción en copropiedad elimina a la mayoría de la población la posibilidad de mejorar su vivienda. Pero aquí también los jóvenes en edad de casarse y fundar una familia son los que sufren más. Son ellos los que no encontrarán una casa donde vivir.

La amenaza de aumento de la población campesina es una plaga para la inmensa mayoría de los agricultores; pero sobre todo lo es para las generaciones jóvenes que no encontrando empleo en la industria tendrán que limitarse a un puesto de criado en la granja de sus padres o de sus hermanos mayores. La limitación de los fondos concedidos a la educación es perniciosa para el desarrollo de toda la sociedad, pero los que sufren más directamente son los jóvenes obreros y campesinos y los jóvenes de las pequeñas ciudades que de este modo pierden todas las posibilidades de promoción. Dadas las dificultades crecientes para encontrar un puesto en la vida social, la juventud es en cada medio el grupo que sufre más de la crisis económica, social, ideológica y moral y constituye por ello el núcleo potencialmente revolucionario.

Aparentemente, podría creerse que la tecnocracia, en cuanto capa social ligada a la clase en el poder por las ventajas de que disfruta y su puesto en la producción,

constituye hoy el principal apoyo del poder burocrático en la sociedad. Sin duda esto sucedería si en el marco del sistema existente la tecnocracia pudiese realizar sus aspiraciones naturales. Anteriormente a 1956, era una capa de vigilantes malpagados, cuyos salarios eran mucho más bajos que los concedidos a la casta reducida de los administradores especializados que estaban al servicio del capital antes de la guerra. Pero paralelamente a la industria, se ha construído el equipo dirigente y los sillones de director están ocupados por una masa de personas que lo deben todo al sistema. La tecnocracia es hoy una capa social estabilizada y consciente de sus intereses. Ha obtenido su parte de privilegios, de consumo elevado, y al mismo tiempo se opone a la clase obrera por sus funciones diarias de vigilancia y por sus aspiraciones a un "socialismo de directores". Sin embargo, como vimos en el capítulo III, el objetivo de clase de la producción en el sistema actual es ajeno a los intereses de la tecnocracia, y cuando ésta tiene la posibilidad de manifestar su propia iniciativa, actúa contra los objetivos determinados por la burocracia. Los tecnócratas carecen de toda posibilidad de participación en las decisiones económicas generales, y no tienen derecho a tomar decisiones importantes en sus empresas y su trabajo. En el sistema actual, los tecnócratas están reducidos a ser meros ejecutantes y vigilantes; y por ello, no pueden realizar sus aspiraciones. Proclaman y sostienen la reivindicación de descentralización según el modelo yugoeslavo y tienden así a cambiar las relaciones de producción. La consigna, popular en este medio, "el poder a los especialistas", expresa claramente la posición de los directores, sobre el alcance social de la democracia en su socialismo, al tiempo que su encono hacia el sistema y la burocracia política dirigente.

Hemos visto que los intereses de la tecnocracia superan el marco del sistema actual y oponen esta capa a la burocracia dirigente. También hemos visto que la inmensa mayoría de la población, es decir toda la clase obrera, la mayor parte de los asalariados, casi todos los campe-

sinos (excepto los más ricos), la juventud, se encuentran hoy sin perspectivas de desarrollo y de mejora de sus condiciones de vida en el marco del sistema, y que la crisis en pleno desarrollo degrada irreversiblemente las condiciones sociales y culturales de estas clases y capas. En esta situación, la burocracia no puede imponer su hegemonía a las otras clases y capas sociales más que mediante la presión económica, administrativa y policíaca, revelando así el carácter de clase de su dictadura. El control de la sociedad por la policía es cada día más severo, no porque la policía sea un organismo autónomo y con tendencias a absorber el partido mismo, sino porque el encono contra la burocracia en todos los medios es cada día más agudo y en estas condiciones, el riesgo de una posible organización de las fuerzas populares es mortal para el sistema actual. Han sacado del cesto las leyes penales de la dictadura estaliniana (Pequeño Código Penal, MKK), se vuelve a las acusaciones basadas en el artículo 22 de este código (el rumor, la escucha por la policía de las conversaciones privadas), y del artículo 23 (control de notas y correspondencia privada).

La burocracia por su naturaleza suprime la iniciativa popular, pues su reino se funda en el monopolio de la organización de la sociedad y la destrucción de las fuerzas populares e independientes. Esta tendencia se refuerza en los períodos de crisis del sistema: cuando las clases y capas sociales carecen de perspectivas de mejorar sus condiciones de vida e incluso de conservar las actualmente existentes, una iniciativa popular puede transformarse en una acción contra la burocracia y es por lo tanto peligrosa. Particularmente, todas las iniciativas en relación con la cultura y la vida ideológica (clubs de discusión, sociedades culturales, etc.) están sometidas a un control severo y consideradas por el poder como peligros potenciales. Lo mismo sucede con toda actividad política e ideológica independiente y las discusiones en el seno de las células más activas de la organización juvenil y del partido. Los miembros del partido y de las Juventudes

Socialistas de la Universidad lo saben por experiencia.

Al carecer de posibilidad de imponer su hegemonía al resto de la sociedad, la burocracia carece hoy de ideología propia. Nada ha sustituído a la doctrina estalinista oficial destruída en los años 1955-1957. La burocracia justifica en general sus acciones políticas y económicas por "el interés nacional". Este último cuando no es el interés de las clases y capas sociales que constituyen la sociedad, no es otra cosa que el interés de la clase que controla el poder del Estado. La burocracia oculta su interés de clase bajo adornos nacionalistas intentando presentarlo como el interés general del país. Pero en las condiciones de crisis económica, este nacionalismo del poder tiene pocas probabilidades de encontrar eco y apoyo en la población. Careciendo de un sistema ideológico oficial consistente y controlando por su monopolio de organización la administración y la policía, así como la vida social y todas las formas de vida ideológica en el país, la burocracia en el momento de crisis general persigue toda forma de ideología independiente. La ideología es la conciencia de los individuos que tienen una acción social, y en las condiciones de crisis, en que los intereses de la mayoría aplastante de la sociedad no pueden realizarse en el marco del sistema y se encuentran en oposición con él, toda actividad social auténticamente unida a los intereses de un medio y toda ideología auténtica son peligros terribles para la burocracia.

Esta situación repercute de modo particularmente sensible en el medio intelectual creador, pues su función social es la formulación científica del pensamiento social y la expresión artística de la ideología. La crisis ideológica significa para este medio una crisis de creación y todas las tentativas para salir de esta situación, todos los síntomas de independencia ideológica, al nivel de la actividad creadora, son aplastados por medios administrativos.

Los científicos, los escritores, los artistas revolucionarios son objeto de una discriminación bajo pretexto de la política de edición y cultural. Se les suprime los medios

de información moderna, privándoles así de la posibilidad de ejercer su profesión; los periódicos que tratan de problemas literarios y sociales, y que expresen la mínima independencia son suprimidos y sustituidos por otros que a su vez son boicoteados por los intelectuales. La severidad creciente de la censura preventiva reduce el margen, ya escaso, de las libertades profesionales concedidas a la "intelligentsia". De este modo la crisis ideológica llega a ser una fuente de crisis de creación cultural.

La crisis ideológica lleva consigo también una crisis de valores y de criterios morales que se manifiesta particularmente en la juventud en el momento en que se forja su concepción del mundo y su ideal de vida. De esta situación se deduce la actitud cínica, el oportunismo, el "huliganismo", etc.; los robos colectivos no son únicamente un fenómeno económico.

El origen de esta crisis en general de las relaciones sociales se encuentra en el hecho de que las relaciones de producción que fundan el poder de la burocracia han llegado a ser un freno para el desarrollo de la economía y fuente de la crisis, y del hecho de que toda la sociedad carece de perspectivas de desarrollo y de posibilidades de satisfacer sus necesidades mínimas en el marco del sistema. Como en el caso de la crisis económica, que no puede superarse dentro de las relaciones de producción actuales, la crisis social general tampoco puede superarse en el marco de las relaciones sociales actuales. La solución sólo es posible por la supresión de las relaciones de producción y sociales actuales. *El desarrollo pasa necesariamente por la revolución.*

En las condiciones de la crisis general del sistema, la burocracia está aislada en la sociedad; a lo más los campesinos ricos y la pequeña burguesía permanecerán neutros, pero ninguna clase social puede estar al lado de la burocracia. Pero sólo la clase obrera por el hecho de sus condiciones de vida y de trabajo siente la necesidad de suprimir la burocracia. Las fuentes esenciales de la crisis económica y social se sitúan, como hemos visto, en las

relaciones de producción del sector de la gran industria, es decir en las relaciones que se establecen durante el proceso de producción entre la clase obrera y la burocracia política central. Por ello, la clase obrera debe ser la fuerza principal y dirigente. La revolución que suprimirá el sistema burocrático ha de ser por naturaleza proletaria.

Se repite con frecuencia que el potente aparato del poder dispone de todos los medios modernos de presión material y que es en sí un apoyo suficiente para la clase dominante y que le permite mantenerse y de modo permanente en el poder incluso en el caso de ausencia total de apoyo social. A pesar de la argumentación en apariencia moderna, esto no es más que un malentendido tan antiguo como la sociedad de clase y el Estado. Hemos visto en octubre de 1956, cómo en Hungría la poderosa máquina de presión social quedó paralizada y se volatilizó en muy pocos días. La clase obrera produce y transporta las armas, sirve en el ejército, crea toda la potencia material del Estado. Si los muros de las cárceles, de los cuarteles y de los arsenales permanecen en pie, no es porque están construídos con materiales sólidos, sino porque están protegidos por la hegemonía de la clase dominante, la autoridad del poder, el miedo y la resignación ante el orden social existente. La existencia de estos muros psíquicos permiten al poder instalarse con plena seguridad detrás de los muros de ladrillos. La crisis social quita al poder su hegemonía, su autoridad, y le opone la mayoría aplastante de la sociedad, y además levanta a la clase obrera contra la burocracia dominante. La agudización inevitable de la crisis socava los muros psíquicos que son el verdadero baluarte del poder. La situación revolucionaria los derriba. Y entonces los muros de ladrillo no son ya un obstáculo. Es imposible superar la crisis económica y social en el marco del sistema burocrático: *la revolución es inevitable.*

IX. Los problemas internacionales de la revolución

Hay quienes nos dicen: "Vivimos en el centro mismo de los conflictos europeos; el mundo se halla dividido en dos campos equipados ambos con armas nucleares. En esta situación, cualquier movimiento revolucionario representa un crimen contra la nación y contra la humanidad. La posición internacional de Polonia, así como su situación geográfica, nos imponen la pasividad y la sumisión ante el poder; de lo contrario, corremos el riesgo de una aniquilación por bombas nucleares o, en el caso más favorable, de la intervención de un país hermano, como ocurrió en Hungría. En estas condiciones, es innecesario e incluso nocivo efectuar un análisis de la estructura social, meditar sobre la plusvalía o formular programas políticos. Para construir el socialismo, es preciso en primer lugar *existir.*"

Esto constituye una argumentación política: importa pues saber quién la difunde, y con qué objetivos. Encontramos en primer lugar a los representantes del poder, a pesar de que no siempre saben poner los puntos sobre las íes; tenemos luego a gentes que sólo a pesar suyo reconocen sus vínculos con el poder, y en cambio tratan siempre de sugerir que, en el fondo, se sienten en la oposición. A pesar de ello, preconizan siempre la subordinación al poder, colocándose así de su parte. En tanto que propa-

gandistas del sistema, hablan; en tanto que hipotéticos miembros de la oposición, se callan. Su rebelión es algo meramente espiritual. De hecho, desempeñan el papel de portavoces de la burocracia dominante, y aparecen así al lado del poder.

Para decirlo con palabras corteses, la argumentación anterior tiene cierta ambigüedad: los propagandistas y los dirigentes de un sistema que tiene a su disposición todos los medios de coacción y de exterminio exhortan a las masas a permanecer en orden en nombre de la paz. Como argumento típico de una "postura de fuerza", este chantage puede ser racional e incluso convincente; tratemos pues de analizarlo tranquilamente, rechazando en primer lugar la ilusión de que se trata de una persuasión por medio de la dulzura.

1) El razonamiento en cuestión parte de la hipótesis de que la revolución, como resultado de un simple complot, constituye un crimen tanto contra la paz interior como contra la paz mundial. Es el argumento tradicional de todas las ideologías contrarrevolucionarias, proclamado por los dictadores de todo género, esgrimido en procesos judiciales y bien conocido, en parte gracias a ello, por la historia del movimiento obrero; se trata de un característico razonamiento policíaco. En realidad, las revoluciones son siempre consecuencia de una crisis de las estructuras económicas y sociales, constituyen pues un fenómeno inevitable y un aspecto periódico del desarrollo de la sociedad. Desde el punto de vista social, la revolución se presenta siempre como un acto de fuerza, porque al dirigirse contra la dominación de la clase que ejerce el poder, opone la fuerza del movimiento social a la fuerza del aparato de opresión y de coacción del Estado. Pero es una lucha de la inmensa mayoría contra la dominación de una minoría; va acompañada de la crisis del poder político y de la impotencia del aparato represivo. Así pues, no debe tomar necesariamente la forma de una lucha armada. La posibilidad de evitar una guerra civil

depende de los factores que limitan los desórdenes nacidos en el curso de las luchas revolucionarias y paralizan la reacción armada de la clase dominante: depende pues de la fuerza y del grado de conciencia y de organización del movimiento revolucionario.

No existimos fuera de la historia, sino que estamos sometidos a sus leyes. La revolución es una consecuencia inevitable de la crisis del sistema, y el nivel de preparación (organización, elaboración del programa) determina los costes sociales que exigirá. Sólo hay un crimen contra la paz interior, y es la política de la burocracia dominante que trata en primer lugar de desorganizar a las masas y de privarlas de conciencia política, y recurre luego a los medios de coacción militares para intentar atajar los movimientos revolucionarios. El recuerdo de Poznan y de Budapest permanece fresco en nuestra memoria.

2) *El argumento de los tanques soviétivos.* Se dice que un eventual estallido de la revolución en Polonia provocaría fatalmente una intervención armada de la URSS, cuyo resultado, desde el punto de vista militar, estaría fuera de duda. Los defensores de este razonamiento suponen que todo ocurre en "un país aparte", un país que, como por excepción, está desgarrado por conflictos de clase, mientras que en los países vecinos no existirían clases, sino únicamente ejércitos regulares con un número bien determinado de tanques y de aviones. Según ellos, una revolución no tendría ningún efecto más allá de las fronteras del país donde se produciría.

Este "realismo político" muy particular queda totalmente invalidado por la experiencia histórica. Las crisis revolucionarias han tenido siempre un carácter internacional. El año 1956 no fue una excepción de esta regla. Pero ya hemos visto que en esta época la burocracia disponía de reservas económicas y sociales, lo que le permitía resolver la crisis mediante una maniobra reformista. Ello frenó el movimiento revolucionario en Polonia y permitió evitar una situación revolucionaria en Checoslovaquia y

en la URSS, de modo que la burocracia pudo aislar y a continuación aplastar la revolución húngara.

La fase actual de la crisis se caracteriza por la inexistencia de las reservas indispensables para efectuar una nueva maniobra. Esto es válido tanto para Polonia como para Checoslavaquia, la República Democrática Alemana, Hungría o la URSS. Es difícil decir en cuál de esos países se iniciará la revolución; en cambio, es seguro que no se limitará a él. En ninguno de estos países la crisis social puede ser superada —ni siquiera temporalmente— mediante reformas y concesiones: ya no hay nada que reformar. En estas condiciones, el movimiento revolucionario se extenderá a todo el bloque, y la posibilidad de una intervención armada de la burocracia soviética se expresará por el grado de gravedad de los conflictos de clases en la URSS y no por el número de tanques y de aviones de que dispone actualmente.

La revolución antiburocrática resquebrajará sin duda la estabilidad política del neocapitalismo, aunque para éste no constituye un peligro tan inmediato como para la burocracia. Sea lo que fuere, es poco verosímil que el imperialismo occidental, que de buen grado remplazaría a la burocracia abolida, esté dispuesto a proceder para ello a una intervención militar.

La clase obrera de los países occidentales han conseguido para sí y para la sociedad un margen relativamente grande de libertades democráticas; en estas condiciones, no se puede empezar una guerra sin preparar de modo conveniente a la opinión pública. Desde esta perspectiva, una intervención armada contra los países que habrían hecho la revolución antiburocrática sería imposible, pues provocaría las protestas de la opinión pública, la resistencia de las masas y una lucha activa contra la guerra, encabezada por la clase obrera, que en estos países constituye una fuerza política poderosa y organizada. Además, el neocolonialismo se ve amenazado por la revolución colonial. Finalmente, una guerra de intervención contra la revolución antiburocrática podría convertirse en un

conflicto nuclear a escala mundial, lo cual equivaldría a un suicidio.

3) *El argumento de la bomba atómica* es la más reciente adquisición para el arsenal tradicional de argumentos contrarrevolucionarios. En una época en la que los stocks de armas nucleares son suficientes para destruir nuestro planeta, toda revolución constituye un crimen, no ya contra la paz interior, sino contra la humanidad. Este argumento con diversas variantes, lo emplean las élites dirigentes de los dos grandes bloques que se reparten el poder en el mundo; disponiendo de arsenales de medios nucleares de exterminio, los círculos dirigentes del imperialismo y de la burocracia internacional piden a las masas obediencia para evitar una guerra mundial nuclear.

La guerra es un acontecimiento de carácter económico, que se funda sobre ciertos cálculos. Desde el punto de vista de los intereses de ambos bloques, la guerra sería una aberración, pues conduciría a la aniquilación de toda la humanidad o, en el mejor de los casos, a la de las potencias principales, es decir las partes más pobladas y desarrolladas del mundo. Sería pues un suicidio. Por otra parte, los dos bloques principales no aspiran a una exterminación recíproca. Mantienen una competencia en el reparto del mundo en esferas de influencia respectivas. El arma nuclear constituye un medio de chantage contra los movimientos revolucionarios. Es sin embargo bien sabido que, desde el fin de la segunda guerra mundial, se han desarrollado sin cesar guerras revolucionarias en diversas partes del mundo y que simultáneamente, y al margen de ellas, los dos bloques han seguido practicando su política de tensiones y aproximaciones. Este hecho evidente ha quedado patente recientemente, cuando los dirigentes de la burocracia china se han inclinado a una alianza con las fuerzas de la revolución colonial, con motivo de su conflicto con la burocracia soviética y a consecuencia de su interés en reforzar su independencia y su postura internacional.

La burocracia habla mucho de la necesidad de salva-

guardar la paz a base de mantener el *statu quo* es decir, manteniéndose sumisa. Pero cada vez que su propio poder se hallaba en peligro, no dudó un instante en emplear la fuerza armada. Lanzó sus tanques sobre las manifestaciones obreras de Berlín en junio de 1953, de Poznan en 1956 y de Novocherkask en 1962, y desencadenó una verdadera guerra contra el proletariado húngaro en 1956. Los dirigentes de los países imperialistas rivalizan con la burocracia en cuanto a fraseología pacifista, pero la historia de los últimos veinte años está llena de intervenciones armadas y de guerras contra la revolución colonial: el aplastamiento de los resistentes griegos, Corea, Argelia, Cuba, Viet-Nam y finalmente el Congo y los recientes actos de agresión contra la República Democrática de Viet-Nam.

Entonces se comprende por qué los portavoces ideológicos de las clases dominantes no quieren que se piense acerca de las motivaciones sociales de los peligros bélicos y consideran nocivas las consideraciones acerca de la plusvalía. En realidad, el problema no ha sido nunca tan urgente como ahora. Actualmente la alienación del trabajo reviste una forma material amenazadora para la existencia de la humanidad; el excedente producido por los obreros occidentales, por los pueblos explotados por el imperialismo, y por los obreros soviéticos se resuelve contra ellos no sólo bajo la forma clásica de la policía, de las cárceles, de los "marines" y de los blindados, sino que se yergue ante toda la humanidad con la forma amenazadora de los medios nucleares de exterminio. La causa del peligro de guerra reside en el crecimiento de los conflictos sociales en el seno de las dictaduras antipopulares, crecimiento paralelo a la crisis de dominación mundial de estas dictaduras. Esto concierne en primer lugar al imperialismo, que, incapaz de mantener su dominación sobre los países subdesarrollados, multiplica las guerras de intervención y las maniobras políticas aventuristas "al borde de la guerra". Pero concierne también a la burocracia internacional: recuérdese sino la crisis de Berlín de 1961, la empresa aventurista que representó

la instalación de cohetes soviéticos en Cuba, hecho que puso en peligro a la revolución cubana; recuérdese igualmente la acción de los tanques soviéticos en Berlín en 1953 y la intervención —que fue una verdadera guerra— contra la revolución húngara. Los círculos dirigentes de los dos grandes bloques no ignoran, sin duda, que una guerra nuclear a escala mundial sería una aventura insensata. Esto no les impide sin embargo fabricar y almacenar armas nucleares, lo cual les sirve de medio de chantage político. Por consiguiente, su dominación causa y agrava la crisis interior e internacional, multiplica las tensiones, los conflictos y las guerras contrarrevolucionarias, y crea con ello un auténtico peligro para la humanidad.

Toda desorganización de los movimientos revolucionarios en el mundo refuerza a las dictaduras antipopulares, así como sus posibilidades de intervención armada dan al proceso un carácter espontáneo y aumentan el peligro de guerra. Este no podrá ser definitivamente eliminado mientras existan sus bases sociales: el imperialismo y la dictadura de la burocracia. Un movimiento revolucionario organizado y consciente de sus objetivos ofrece a la humanidad la perspectiva de limitar este peligro en lo inmediato y de eliminarlo definitivamente en el futuro.

4) *La burocracia y el movimiento revolucionario en el mundo.* La joven república soviética pudo defenderse con éxito frente a la intervención de los países imperialistas gracias a las luchas de la clase obrera occidental y a la ola de movimientos revolucionarios que se desencadenó en el mundo al término de la primera guerra mundial, después de la revolución rusa. El desarrollo ulterior de la Rusia soviética en tanto que *Estado obrero* dependía de los resultados de las luchas revolucionarias que tenían lugar en los otros países y sobre todo en las naciones industrializadas de Europa occidental. Lenin, Trotsky y los otros dirigentes bolcheviques eran perfectamente conscientes de ello: sabían que sólo otra revolución podía

constituirse en auténtico aliado del país de la dictadura del proletariado. Así, la ideología y la política exterior de la Rusia soviética tenían, durante este período, un carácter internacional.

A medida que el Estado soviético se iba burocratizando y que el nuevo poder se convertía en el poder de una nueva clase dominante, la situación fue modificándose. El movimiento revolucionario dejó de ser su aliado natural. En la medida en que estaba subordinado a las directrices de la burocracia soviética, podía servir de moneda de cambio, de instrumento al servicio de los intereses de estado de la URSS (es decir, de los intereses de la burocracia dominante) en su enfrentamiento con el bloque imperialista. La estabilización del capitalismo y el reflujo del movimiento revolucionario en Occidente contribuyeron a la burocratización de los partidos comunistas y a su subordinación a las directrices del partido comunista bolchevique, lo cual significaba, en la práctica, la subordinación de los intereses de la revolución y de la clase obrera de los países capitalistas a los intereses diplomáticos momentáneos de la burocracia soviética, con las consecuencias que todos conocemos.

Por el contrario, toda victoria de una revolución autónoma representa un peligro para la burocracia. Por su naturaleza misma, una revolución de este género aparece como un acto soberano de las masas populares. En consecuencia, su ejemplo y sus ideas contagiosas amenazan la hegemonía ideológica de la burocracia sobre sus propias masas. Además, las revoluciones victoriosas no se someten a los dictados de la burocracia soviética y violan así el monolitismo internacional de su dominación, lo cual es igualmente peligroso para el monolitismo interior. La victoria de una revolución autónoma tuvo lugar, por primera vez después de la segunda guerra mundial, en Yugoeslavia. El segundo país que la realizó fue China. Todos hemos visto sus consecuencias. He ahí por qué la burocracia soviética actúa de acuerdo con el principio: "el socialismo no irá más allá de donde vaya nuestro

ejército". En nombre de este principio, la burocracia trató primero de subordinar a sus propios dirigentes y a su policía la revolución española; en nombre de este principio, la traicionó más tarde; ella misma prohibió a los comunistas franceses e italianos que se lanzaran a una lucha revolucionaria por el poder cuando se produjo una situación revolucionaria, en los años 1945-1946; traicionó a la revolución griega, y finalmente trató de obligar a los comunistas chinos a renunciar a su lucha contra los ejércitos de Chang Kai-shek.

La liberación de un grupo importante de países de la dominación capitalista era —y no ha dejado de serlo— un factor que favorecía las luchas revolucionarias contra el imperialismo. Pero la burocracia de estos países representa un freno para el desarrollo de la revolución colonial y la lucha de la clase obrera de los países capitalistas económicamente avanzados. Por su política exterior fundada en el reparto de zonas de influencia con el imperialismo y en el deseo de mantener el *statu quo*, por su ideología, que trata de justificar esta política, y finalmente por su influencia sobre los partidos comunistas oficiales, la burocracia internacional se opone a la revolución anticapitalista. Pero la revolución colonial escapa a su control, y más de una vez ha sido organizada y dirigida con éxito por grupos exteriores a los partidos comunistas oficiales. Mencionemos los ejemplos de Cuba y Argelia.

Por otra parte, el control de la burocracia internacional sobre el movimiento comunista mundial atraviesa una crisis que sin duda se agravará. No es por casualidad que sus inicios coinciden con el comienzo de la crisis interna de nuestro campo y con las primeras revoluciones antiburocráticas de Polonia y Hungría. La lucha contra la dictadura de la burocracia ayuda al movimiento obrero mundial a liberarse de su tutela. La revolución antiburocrática triunfante acabará con esta tutela; ella es el aliado natural del movimiento revolucionario mundial.

X. Programa

Hasta aquí hemos analizado a la revolución en tanto que sepulturera de la antigua sociedad. Pero es, al mismo tiempo, creadora de la nueva sociedad. La clase obrera, que por su naturaleza es la fuerza principal y dirigente de la revolución, ¿es capaz de proponer un programa válido?

I. Consideramos válido el programa de la clase social cuyo interés particular de clase coincide mayormente con las exigencias del desarrollo económico y cuya dominación abre perspectivas de desarrollo y de satisfacción de sus necesidades a las demás clases sociales o, dicho de otro modo, permite la realización de los intereses de toda la sociedad. El interés de clase del proletariado exige la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Esto no quiere decir que el salario del obrero deba ser igual al valor total del producto de su trabajo. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en las sociedades modernas crea la necesidad de una división del trabajo que comporta la existencia de sectores no productivos sustentados por el producto material creado por los obreros. En régimen de democracia obrera, será también necesario sustraer del producto del trabajo de los obreros una parte destinada a la acumulación, a sostener y desarrollar los servicios sanitarios, la enseñanza, la cultura; otra parte estará destinada a las prestaciones

sociales, a la administración, y al aparato del poder. Pero todo esto se hará en la medida en que la clase obrera lo juzgue necesario a sus intereses propios. La explotación, en realidad, no consiste en el hecho de que el salario obrero no representa más que una parte del valor producido, sino en que el producto excedente le sea arrebatado y empleado en actividades que le son extrañas u hostiles, en que el sector no productivo sirve para mantener y reforzar la dominación de la burocracia (o de la burguesía) sobre la producción, sobre la sociedad y la vida social de la clase obrera. La supresión de la explotación significa por consiguiente la creación de un sistema en el que la clase obrera organizada será dueña de su trabajo y del producto mismo, determinará los objetivos de la producción social y decidirá acerca de la distribución del producto nacional. Dicho de otro modo, determinará las proporciones y la dirección de las inversiones, la proporción y el destino de los gastos para las prestaciones sociales, los servicios sanitarios, la enseñanza, la cultura, el volumen de los gastos a efectuar por el aparato del poder y las funciones corrientes de este poder. Entonces la clase obrera ejercerá el poder económico, social y político en el Estado.

El grado actual de desarrollo de las fuerzas productivas implica una división social del trabajo en la que las funciones de producción están separadas de las funciones de dirección. Es necesario que existan obreros y directores. En el proceso de producción la clase obrera no tiene que dirigir, sino producir. Para dirigir, tiene que organizarse por sí misma y estar organizada por su Estado. ¿Cómo debe crear la clase obrera su organización propia y el Estado a fin de poder dominar su trabajo y su producción?

Si la democracia obrera no existe en la fábrica, no puede existir, *a fortiori*, en el Estado. En efecto, sólo en la fábrica el obrero está en su medio propio, pues es allí que efectúa su función social esencial. Si el obrero es un esclavo en su trabajo, la libertad de que podría

gozar fuera del mismo es una "libertad de los domingos", es decir, una libertad ficticia. La clase obrera no puede ser dueña de su trabajo y de la producción si no controla las condiciones y los objetivos de su trabajo en la fábrica. En este sentido, debe organizarse en las fábricas y formar Consejos Obreros para dirigir la empresa. El director debe ser un funcionario subordinado al Consejo, controlado, empleado y despedido si es preciso por él. En la actualidad, todas las decisiones clave que constituyen la dirección de la empresa son dictadas por el poder central. En tales condiciones, los Consejos Obreros carecerían prácticamente de poder. El director está naturalmente ligado a los organismos dirigentes, al aparato central de la dirección económica. En estas condiciones, los Consejos Obreros serían inevitablemente una dirección secundaria, comparable a las Conferencias Autónomas Obreras. Para que los Consejos puedan dirigir la empresa, la clase obrera debe independizarlos de estas empresas. Así creará la condición preliminar de la democracia obrera, y al mismo tiempo dará nuevas directrices para realizar su verdadero objetivo de clase de la producción (como hemos mostrado en el capítulo III, la centralización es el instrumento para organizar la producción por la producción, mientras que la producción de bienes de consumo exige la descentralización). De este modo la clase obrera, comenzando a realizar su programa, realiza de paso lo que está muy avanzado en el programa de la tecnocracia: la independencia de la empresa. Pero la clase obrera y la tecnocracia dan a esta noción un contenido social totalmente diferente. Para la tecnocracia, la independencia de la empresa significa la plenitud del poder para la dirección. Para la clase obrera, esta noción significa la independencia de los trabajadores. Por ello la clase obrera no puede limitarse a dirigir la empresa por medio de los Consejos. En efecto, en tal caso realizaría exclusivamente el programa de la tecnocracia y se impondría así un nuevo yugo.

Las decisiones principales referentes a la distribución

y utilización de la renta nacional presentan, por definición, un carácter económico general, es decir, se sitúan, al nivel de la economía nacional; dicho de otro modo, sólo pueden ser adoptadas por el poder central. Si estas decisiones emanadas del poder quedan fuera del alcance de la clase obrera, ésta no podrá dominar la producción, ni su trabajo, por consiguiente. La autonomía obrera reducida a la empresa se convertiría rápidamente en una ficción para disimular el poder de la dirección de la fábrica y la dominación de una nueva burocracia, políticamente ligada a la tecnocracia en el Estado. La explotación persistiría y el antiguo desorden se reproduciría bajo una nueva forma.

II. Por ello es preciso que la clase obrera organice, además de los Consejos Obreros en las empresas, delegaciones de las empresas, es decir, que organice *Consejos de Delegados Obreros* encabezados por un Consejo Central de Delegados. Por este sistema de Consejos, la clase obrera decidirá del plan de la economía nacional, es decir, fijará los objetivos de la producción social, tomará las decisiones necesarias y controlará en todo instante la ejecución del plan. Así, en todos los niveles, los Consejos serán los órganos del poder económico y político, ejecutivo y legislativo. Serán organismos verdaderamente electivos, pues los electores, organizados sobre la base de la empresa de producción, podrán en todo momento, independientemente de las fechas fijadas para las elecciones normales, revocar a sus representantes y remplazarlos por otros. De esta forma, los obreros de las empresas serán la armazón del Estado proletario.

III. Si los delegados obreros en el Consejo Central de los Delegados dispusieran únicamente de un proyecto de distribución de la renta nacional presentado por el gobierno o por la dirección del partido único, su función no consistiría más que en un voto mecánico. Como hemos mostrado en el capítulo I, el poder monopolista no puede tener un carácter obrero, se transforma inmediatamente

en una dictadura sobre la clase obrera, una organización burocrática que sirve para desorganizar y mantener en la sujeción a los obreros y a toda la sociedad.

A fin de que el sistema de los consejos pueda reflejar la voluntad, la opinión y la actividad de las masas obreras, éstas *deben organizarse sobre la base de la pluralidad de partidos.* ¿Qué significan en la práctica la pluralidad de partidos obreros? El derecho para cada grupo reconocido por la clase obrera de editar su propio periódico, presentar su programa por los modernos medios de difusión, organizar cuadros, hacer agitación, constituirse en partido, en definitiva. La pluralidad de partidos obreros exige la libertad de palabra, de prensa y de reunión, la *supresión de la censura preventiva,* una libertad absoluta para la investigación científica y la creación literaria y artística. Sin la libertad de expresión de las diversas corrientes de pensamiento en la prensa, en la investigación científica, literaria y artística, no hay democracia obrera. En el caso de la pluralidad de partidos obreros, los distintos partidos expresan en el Consejo Central de los Delegados sus propuestas sobre el reparto de la renta nacional; entonces existen realmente las condiciones necesarias para distinguir los elementos reales de un programa electoral. Todo esto debe servir a los representantes centrales de la clase obrera, así como a las masas que eligen y revocan a sus delegados. Cuando hablamos de pluralidad de partidos obreros no pensamos en eliminar el acceso a los mismos exclusivamente a los obreros. El carácter obrero de la pluralidad de partidos refleja el carácter del poder de Estado, organizado según el sistema de los Consejos. En estas condiciones, los partidos que tratan de ejercer una influencia sobre el poder político sólo pueden hacerlo ganándose la audiencia de las masas obreras.

Nos oponemos por las mismas razones al sistema parlamentario. La experiencia de los dos períodos de veinte años muestra que este régimen no constituye ninguna garantía contra la dictadura y que, en su forma más perfecta, no constituye un poder popular. En el sistema

parlamentario incluso, los partidos combaten entre sí para atraerse los votos de los electores: así que las elecciones han tenido lugar, el programa electoral puede ser arrojado al cesto de los papeles. En el parlamento, los diputados sólo se sienten ligados a la dirección del partido que los ha nombrado candidatos. Los electores se agrupan en circunscripciones creadas según criterios puramente formales. Por consiguiente, se hallan atomizados. El derecho de revocación de los diputados es una pura ficción. La participación del ciudadano en la vida pública se reduce a leer en la prensa las declaraciones de los dirigentes, o oírles por radio y a verles en la televisión, y, una vez cada cuatro o cinco años, acudir a las urnas para escoger el partido que debe gobernarles. Todo lo demás se hace en su nombre, pero sin su participación. Además, el parlamento ejerce sólo el poder legislativo. En estas condiciones, el aparato del poder ejcutivo es el único poder real, poder controlado por los que disponen de la potencia material, es decir, de la plusvalía.

El sistema parlamentario es pues un sistema en el cual la clase obrera y toda la sociedad se hallan, como efecto de su voto, privados de toda influencia sobre el poder. Al voto formal cada cuatro o cinco años, contraponemos nosotros la participación permanente de la clase obrera organizada en Consejos, en los partidos políticos y en los sindicatos, haciéndose cargo de la corrección y el control de la ejecución de las decisiones políticas y económicas a todos los niveles.

En la sociedad capitalista, la burguesía, que dispone de la plusvalía, se encuentra por encima del parlamento. En el sistema burocrático, la ficción parlamentaria encubre el dominio indiscutido de la burocracia política central. En el sistema de democracia obrera, si la representación del conjunto de los ciudadanos toma la forma parlamentaria, la clase obrera se encontrará por encima del parlamento, organizada en Consejos, y disponiendo de la base material de la existencia de la sociedad, es decir, del producto de su trabajo.

IV. La clase obrera no puede decidir directamente del reparto de los productos de su trabajo, tiene que hacerlo a través de su representación política central. Por otra parte, la clase obrera no es absolutamente homogénea en cuanto a sus intereses. Por consiguiente, son inevitables los conflictos entre las decisiones de las representaciones obreras y los intereses y las tendencias de obreros de determinadas empresas y de sectores particulares de la clase obrera. El mero hecho de la separación entre funciones de dirección y de producción trae consigo la posibilidad de que cristalice un poder electo, en cierto modo independiente, tanto al nivel de la empresa como al del Estado. Si los obreros no tuvieran, además del derecho de voto, la posibilidad de defenderse frente a las decisiones de su propio sistema de representación, éste degeneraría y finalmente actuaría contra los intereses de sus representados. Si la clase obrera no pudiera defenderse contra su propio Estado, la democracia obrera no sería más que una ficción. Esta posibilidad de defenderse debe ser asegurada por *sindicatos completamente independientes del Estado y gozando del derecho de organizar huelgas económicas y políticas*. Los diversos partidos políticos velarán por mantener el carácter obrero de los sindicatos y tratarán de ejercer una influencia en ellos.

V. A fin de que los órganos de la democracia obrera no se transformen en una fachada detrás de la cual pudiera reconstituirse todo el antiguo "tinglado", es preciso que a las formas de la democracia corresponda el contenido vivo de la actividad de las masas obreras. Los asuntos públicos son una profesión para los administradores, los especialistas y los políticos. El obrero es, en el proceso de producción, un ejecutante. Su trabajo consiste en servir a la máquina. Para que pueda participar en la vida pública, es preciso darle tiempo y proporcionarle una instrucción.

Con este fin, es preciso que algunas horas a la semana, deducidas del tiempo de trabajo e igualmente remuneradas, sean dedicadas a la *instrucción general obrera*.

Durante este tiempo, los obreros, agrupados en unidades de producción, discutirán sobre las variantes de los planes económicos propuestos para el país, la región y la empresa por los diversos partidos políticos. Estos son asuntos difíciles e ininteligibles para un hombre normal solamente en cuanto se intenta disimular el carácter de clase de la distribución de la renta nacional. Los representantes de los partidos políticos que participen en las horas de instrucción obrera acercarán a la clase obrera a sus programas, y sus programas a la clase obrera.

VI. En el sistema de democracia obrera, la policía política, el ejército regular (permanente), no pueden ser de ningún modo mantenidos. El carácter antidemocrático de la policía política es evidente para todo el mundo. En cambio, en torno al ejército regular de la clase dominante se crea una serie de mitos que son aceptados, en cierta medida, por la sociedad.

¿En qué consiste este ejército regular? Es una organización dentro de la cual centenares de miles de jóvenes arrancados a su ambiente son aislados en cuarteles por procedimientos brutales, extirpándoles de la cabeza toda veleidad de independencia de pensamiento, y enseñándoles a ejecutar mecánicamente cualquier orden procedente del mando jerarquizado y profesional. Esta organización es el fundamento de la fuerza armada del Estado; esta organización, separada de la sociedad, está preparada para oponerse a ella en cualquier momento. Por ello no basta con cambiar a los oficiales: el ejército regular, del mismo modo que la policía política, es por su esencia misma un instrumento de la dictadura antipopular. Mientras subsista, un grupito de generales podrá siempre imponerse a cualquier partido o consejo.

Se dice que el ejército regular es indispensable para la defensa de la patria. Esto ocurre en una dictadura antipopular, en que es difícil obligar a las masas a luchar para defender un Estado que no les pertenece; sólo puede conseguirse esto entonces por la intimidación y el terror, apoyándose en un ejército regular. Entregar armas a las

masas fuera de esta organización representa un peligro mortal para el sistema, por ello el único medio de organizar la fuerza armada por parte de un poder de este tipo es el ejército regular.

En cambio, el ejemplo de las guerras revolucionarias en Viet-Nam, en Argelia y en Cuba demuestra que los obreros y campesinos armados, cuando saben por qué se baten e identifican sus intereses a los de la revolución, no tienen nada que envidiar ni siquiera desde el punto de vista militar a los ejércitos regulares. Esto se refiere sobre todo a los pequeños países que tienen que hacer frente a la agresión contrarrevolucionaria de potencias extranjeras: atacados por un ejército regular, sólo pueden defenderse eficazmente con los métodos de la guerra popular. El ejército regular es necesario a los agresores para llevar a cabo sus guerras coloniales y sus intervenciones; es también necesario a las dictaduras antipopulares para sujetar a las masas. En América latina, por ejemplo, el ejército tiene las funciones de una policía interior. Esta función la desempeña, en realidad, en todos los países donde existe, y Polonia no es una excepción, como lo prueban los acontecimientos de Poznan. El ejército regular, haya o no combate, es un instrumento de dominación brutal sobre la clase obrera y sobre toda la sociedad, del mismo modo que la porra es un instrumento para aporrear, se sirva o no de ella su propietario. En un régimen de democracia obrera, el ejército regular no sirve para aplastar la contrarrevolución, sino todo lo contrario, puede convertirse él mismo en un instrumento de los contrarrevolucionarios. Por consiguiente, debe ser suprimido.

Para impedir que su democracia sea derrocada, la clase obrera tiene que armarse. Esto concierne especialmente a los obreros de las grandes industrias, que deberían organizarse en milicias obreras subordinadas al sistema de los Consejos.

Los especialistas militares deberían ejercer la función de instructores bajo la dependencia y el control del Con-

sejo. De este modo la fuerza militar de represión estará estrechamente ligada a la clase obrera, que estará siempre dispuesta a defender, con las armas en la mano, su Estado y su revolución.

Por razones técnicas, es preciso mantener unidades especializadas permanentes (cohetes, aviación, marina, etc.). Sin embargo, los soldados de estas unidades deberían ser reclutados dentro de las grandes industrias y, mientras durase su servicio militar, deberían permanecer en contacto con los obreros de su empresa, y conservar sus derechos como tales obreros.

VII. La producción agrícola y el campesinado tienen un papel demasiado importante en la economía y en la sociedad para que el programa obrero pueda omitir las cuestiones agrarias.

El porvenir del campesinado reside sin duda alguna en las grandes empresas estatales especializadas e industrializadas. La base técnica de esta organización de la producción agrícola tiene que ser creada por la industrialización rural. Ello exige grandes inversiones, y su realización llevará tiempo. En las condiciones técnicas y económicas actuales cualquier tentativa de colectivización generalizada significaría la expropiación de los campesinos y, por lo tanto, tendría que realizarse contra ellos, por métodos de dictadura policíaca. Ello tendría como consecuencia una caída de la producción agrícola y la vuelta al sistema de dictadura policíaca contra la clase obrera. Una colectivización realizada en estas condiciones solamente convendría al sistema burocrático. Para una democracia obrera, sería fatal; es, por lo tanto, inaceptable.

Las estructuras actuales de la agricultura, en la que subsiste la propiedad privada de la tierra, conducen al establecimiento de explotaciones de tipo capitalista si las leyes del mercado actúan libremente, es decir, sin limitaciones. Como están desmenuzadas, las pequeñas explotaciones tienen pocos recursos para invertir —cosa indispensable para su desarrollo—, y la mayor parte de las

inversiones se efectúan en las grandes explotaciones. La racionalización de la propiedad campesina significa pues una profunda crisis, la quiebra de los más pobres agricultores y la falta de perspectivas para los pequeños propietarios campesinos. Para la clase obrera industrial, esta situación significa un alza de precios para los artículos de primera necesidad y paro forzoso. Esta eventualidad es aceptable para la tecnocracia (partidaria por naturaleza de la tendencia a la concentración agrícola) pero inaceptable para un régimen de democracia obrera.

VIII. El objeto de la producción consiste para la clase obrera en desarrollar el consumo de la inmensa masa de aquellos que actualmente sólo reciben el mínimo vital. Como hemos visto en el capítulo VI, la burocracia hace descender el consumo de la mayor parte del campesinado por debajo de este mínimo vital; arrebata sus excedentes a la economía rural y al campesinado sus perspectivas de desarrollo, porque tiende a reducir en lo posible el coste real de la fuerza de trabajo y considera el consumo social como un mal necesario.

A la clase obrera le interesa suprimir estas relaciones entre el campesinado y el Estado. El interés de la clase obrera exige un desarrollo rápido de la producción agrícola (base del consumo) mediante el desarrollo de la masa de empresas pequeñas y medianas individuales, con el consiguiente aumento de sus posibilidades de inversión y consumo. Esto convierte precisamente a la clase obrera en portavoz de los intereses de la mayoría de los campesinos, y a la vez establece las bases de una sólida alianza con ellos.

Para poner en práctica los intereses comunes de la clase obrera y de la mayoría de los campesinos, es preciso: *Primero:* disminuir la amplitud del abanico de precios que el poder burocrático mantiene artificialmente, lo cual priva en particular a las pequeñas y medianas explotaciones de las bases materiales de su desarrollo, y establecer además un impuesto progresivo sobre las explotaciones mayores.

Segundo: que la parte del producto del trabajo campesino percibida por el Estado en forma de impuestos, o en cualquier otra forma, sea devuelta (después de deducir la parte correspondiente al campesinado en el mantenimiento de la administración) al campesinado bajo forma de inversiones sociales y culturales, y de ayuda económica y técnica del Estado destinada en primer término a intensificar la productividad de las más pequeñas explotaciones.

Con este fin, el campesinado debe organizarse sobre bases económicas, y hacerse representar políticamente. Debe crear sus propias organizaciones de producción. Esto es decisivo para abrir perspectivas al 60 % de los campesinos, que vegeta sobre sus pequeñas explotaciones y representa un excedente de fuerza de trabajo; al mismo tiempo hay que impedir un aumento excesivo de las inversiones industriales. Ello exige que esta fuerza de trabajo excedentaria sea utilizada en una producción intensiva suplementaria: cría de ganado, cultivos hortofrutícolas, industrias de transformación de los productos agropecuarios. Esto no se realizará fácilmente, y es imposible construir una industria de transformación a partir de las fuerzas dispersas de las pequeñas explotaciones. Por consiguiente, la condición del éxito radica en la creación de asociaciones de explotaciones individuales pequeñas y medianas, con lo cual se dispondrá de un excedente de fuerza de trabajo suficiente. Estas asociaciones, gracias a la tierra que poseen, a la cooperación en los trabajos que facilitan, y a la ayuda del Estado (que concede créditos a bajo interés, participa en las pequeñas inversiones, se encarga de los transportes, etc.), pondrán en marcha pequeñas empresas de transformación, y organizarán la distribución y la venta. Es el camino más sencillo para aumentar la producción de artículos alimenticios actualmente insuficiente, para superar el subdesarrollo de la industria de bienes de consumo y para incrementar el rendimiento de las más pequeñas explotaciones empleando el excedente de la fuerza de trabajo.

Hay que crear en la agricultura las premisas de una especialización de la producción sin la cual no hay economía racional. Al mismo tiempo, en sus contactos con los organismos estatales compradores, los campesinos productores deben organizarse para prevenir las bajas de precios artificiales. El campesino aislado, aunque concluya acuerdos "libres" con el Estado, es impotente frente al monopolio que éste ejerce. Por ello, además de las organizaciones de producción, los campesinos deben crear su propia organización general de distribución y de venta. Con relaciones de este tipo, las grandes explotaciones, poco numerosas pero que desempeñan un papel económico importante a causa de sus dimensiones y de su fuerza económica, no podrán transformarse en explotaciones capitalistas; les faltará la fuerza de trabajo y las tierras a bajo precio que les proporciona la ruina de las explotaciones más débiles. En cambio, podrán aumentar su producción gracias a sus propias inversiones y en la medida en que remplacen la fuerza de trabajo que les falta por medio de la mecanización.

Dado que la industria es el sector decisivo de la economía, las opciones del desarrollo de la producción industrial fijan la línea general de desarrollo de toda la economía nacional. La clase obrera, disponiendo del producto de su trabajo, determinará los rasgos generales del desarrollo de los otros sectores y por consiguiente también el de la agricultura. Pero dentro del marco general del conjunto de la economía, determinado por el nivel, la estructura y el desarrollo de la producción industrial, los campesinos deben poder controlar el producto de su trabajo. Los planes de desarrollo del campo, de la distribución de la ayuda económica facilitada por el Estado, de la aplicación del fondo rural de inversiones sociales y culturales, no pueden ser elaborados unilateralmente por el Estado y ofrecidos luego al campesinado. En este caso, en efecto, el poder sobre el campesinado sería ejercido por un aparato desarrollado y aislado, que prácticamente escaparía

al control de la clase obrera e incluso podría acabar imponiéndose a ella.

La convergencia de los intereses de la clase obrera y de la mayoría de los campesinos permite la *autonomía política del campesinado*, autonomía que de hecho es una exigencia de la democracia obrera. Las organizaciones económicas de los productores campesinos de que antes hemos hablado no bastarán para asegurarles el control de la parte de su producción de que se apropia el Estado y que debe serles devuelta en forma de diferentes tipos de inversiones financieras inmediatas y de ayuda económica. Esta tarea sólo puede ser llevada a cabo por *una representación política de los productores campesinos a escala nacional*, creada con el apoyo de las organizaciones económicas y de los partidos políticos campesinos. Por ello la clase obrera está profundamente interesada en que el movimiento campesino goce de una completa independencia, que le permita representar los intereses de la mayoría de los campesinos y no sólo los de la estrecha capa de propietarios poderosos.

IX. No consideramos que la revolución antiburocrática sea un asunto exclusivamente polaco. Las contradicciones económicas y sociales que hemos analizado se dan en todos los países burocráticos industrializados: Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Hungría y Unión Soviética.

Tampoco consideramos que esta revolución afecte exclusivamente a la clase obrera de los Estados de dictadura burocrática. En efecto, el sistema burocrático, asimilado al socialismo por la propaganda oficial tanto del este como del oeste, por los partidos burgueses como por los partidos comunistas oficiales, compromete el socialismo a los ojos de las masas populares de los países capitalistas desarrollados.

La burocracia internacional y su fuerza dirigente —la burocracia soviética—, teme todos los auténticos movimientos revolucionarios que se producen en el mundo, pues amenazan el monolitismo de su sistema a escala

internacional, y también el monolitismo interior que le permite ejercer su dictadura sobre su propia clase obrera. Deseosa de estabilizar nacional e internacionalmente su sistema, sobre el principio de reparto del mundo en esferas de influencia con el capitalismo, la burocracia aplasta los movimientos revolucionarios en su propio territorio y frena, gracias a su influencia sobre los partidos comunistas oficiales, el desarrollo de los movimientos revolucionarios en América latina, Asia y Africa. La revolución antiburocrática afecta pues al movimiento revolucionario mundial y a todos los movimientos en favor de la revolución colonial en Africa, en Asia y en América latina. Es parte integrante del movimiento revolucionario mundial.

Como toda revolución, amenaza el orden establecido en el mundo y se ve a su vez amenazada por las fuerzas que lo defienden. La burocracia internacional, en la medida en que todavía sea fuerte en el momento de producirse la crisis, tratará de ahogar la revolución victoriosa en los primeros países donde se produzca. El imperialismo occidental tratará de aprovechar nuestra revolución para substituir la dictadura de la burocracia por una dictadura de los monopolios que no es mejor que aquélla.

Nuestra aliada contra la intervención de los tanques soviéticos es la clase obrera rusa, ucraniana, húngara, checa. Nuestra aliada frente a la presión y las amenazas del imperialismo es la clase obrera del Occidente industrializado, la revolución colonial ascendente en los países subdesarrollados. Contra la alianza de la burocracia internacional con la burguesía imperialista internacional que mantienen sistemas de dictadura antipopular en sus respectivas áreas de influencia, lanzamos la consigna tradicional del movimiento obrero: "¡Proletarios de todos los países, uníos!".

La clase obrera debe efectuar estas transformaciones en todos los terrenos, políticos, económicos y sociales, para llevar a la práctica sus objetivos de clase, a saber, el dominio sobre su propio trabajo y sobre los productos de éste. ¿Es válido su programa?

Comenzando a realizarlo, es decir, haciendo autónomas a las empresas, la clase obrera crea las condiciones necesarias para adaptar la producción a las necesidades, suprimir el despilfarro de los excedentes económicos, explotar los factores que intensifican el crecimiento económico. La tecnocracia haría lo mismo. Pero el objetivo de la producción para la clase obrera es el consumo sobre la más amplia base social y no el consumo de lujo de las capas privilegiadas. Por ello el dominio de la clase obrera sobre la producción asegura del modo más radical la superación de la contradicción económica principal que actualmente frena el desarrollo económico y social: la contradicción entre el potencial productivo desarrollado y el bajo nivel del consumo social. Por consiguiente: las relaciones de producción fundadas sobre la democracia obrera abren las más amplias perspectivas al desarrollo de la economía y de la sociedad.

Por su interés específico de clase, los obreros representan al mismo tiempo los intereses económicos de la masa de asalariados mal pagados y de los pequeños y medios campesinos, es decir, de la aplastante mayoría de la población rural y urbana.

La esclavitud de la clase obrera es la fuente principal de la esclavitud de las demás clases y capas sociales: liberándose a sí misma, la clase obrera libera a toda la sociedad.

Para liberarse, debe suprimir la policía política, y al hacer esto, libera a toda la sociedad de la dictadura y del miedo:

—Debe suprimir el ejército regular, y al hacerlo liberar a los soldados del envilecimiento de la vida de cuartel;
— Debe instaurar la pluralidad de partidos, con lo cual da la libertad política a toda la sociedad;
— Debe suprimir la censura preventiva, introducir total libertad de prensa, de creación científica y cultural, de creación y propagación de diversas corrientes del pensamiento social; haciendo esto, libera al escritor, al artista, al periodista, y crea las condiciones en las cuales los inte-

lectuales podrán realizar su función social de la manera más profunda;

— Debe someter el aparato administrativo a un control constante y a una dependencia permanente respecto de las organizaciones democráticas, es decir, debe cambiar las relaciones que existen actualmente dentro de este aparato; al hacerlo, libera a los simples funcionarios de su dependencia feudal y humillante de la jerarquía burocrática;

— Debe asegurar al campesino el control sobre su producción, la autonomía económica, social y política; haciéndolo, transforma a los campesinos de eternos súbditos impotentes, sometidos a todos los poderes, en ciudadanos activos, organizados, y con participación en las decisiones que fijan las condiciones de su vida y de su trabajo.

En el proceso de producción, el obrero ocupa el lugar más ingrato. A causa de ello, la clase obrera tiene mayor necesidad que ninguna otra de democracia: cualquier renuncia a la democracia repercute en primer lugar contra los obreros. Por ello, la democracia obrera es la más amplia socialmente, y crea las mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad.

El interés específico de la clase obrera es pues el que mejor corresponde a las necesidades del desarrollo económico y por consiguiente representa del modo más completo los intereses de toda la sociedad. El programa de la clase obrera es, pues, válido.

¿Será puesto en práctica?

Esto ya depende del estado de preparación ideológica y organizativa de la clase obrera en el momento en que se produzca la crisis revolucionaria, y por consiguiente de lo que hacen ya ahora los que consideran que el programa de la democracia obrera es el suyo.

BIBLIOTECA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

XI. Contrargumentos

En el último capítulo de nuestro documento (¿Qué hacer?), hemos enumerado, entre otras, las tendencias político-sociales actuales y futuras con las que la clase obrera debe entablar una polémica y a las que debe combatir políticamente: la tecnocracia, es decir el "socialismo de los managers", el partido de los granjeros, es decir el "socialismo de los buenos pequeños propietarios agrícolas", y la pequeña burguesía, es decir la "democracia cristiana".

Ese punto, así como el programa, y el capítulo "¿Qué hacer?" mismo, han provocado objeciones importantes, a las que trataremos de responder ahora. La primera de esas objeciones es la concerniente a nuestra actitud ante la tecnocracia.

El "socialismo de los managers" no cambia la situación del obrero en el proceso de producción, y mantiene la explotación; es pues una nueva forma de dictadura sobre la clase obrera, la mayoría de los campesinos y los intelectuales. No nos declaramos enemigos suyos después de pesar el pro y el contra, sino porque, conscientemente, hemos escogido el otro lado de la barricada. Se nos ha reprochado también el haber escogido el camino de la revolución proletaria, cuando, dicen algunos, el programa de la tecnocracia resuelve igualmente la crisis y puede, además, ser realizado por la conjunción de presiones

viniendo de abajo y de reformas por arriba, es decir, sin revolución, y sin los riegos que ésta trae consigo.

Observemos en primer lugar que los partidarios de esa concepción han *escogido* también el lado de la barricada en la que se sitúan, y que por lo tanto, discutimos partiendo de dos puntos de vista opuestos. Por otra parte, aún cuando utilicen argumentos llamados realistas, creemos que son verdaderos utopistas. En Yugoeslavia, el sistema tecnocrático no ha remplazado a un sistema burocrático ya estructurado, sino que proviene directamente de la fluidez postrevolucionaria de las relaciones sociales y políticas en un contexto internacional específico, y con las necesidades económicas que provenían de éste. Podría creerse que en nuestro país se encontraban en 1956-1957 todas las condiciones para la aplicación de una reforma tecnocrática: ésta hubiera traído consigo una solución a la crisis y una estabilización duraderas. Sin embargo, la burocracia no lo ha permitido. Creemos que eso era inaceptable para ella por dos razones.

En primer lugar, la burocracia constituye una clase dominante estructurada, y defendía por todos los medios las relaciones de producción que se encuentran en la base de su dominio. Ya hemos dicho (capítulo III) que la reforma tecnocrática implica *un cambio de las relaciones de producción.* Si ese argumento parece anacrónico a los "marxistas de antaño", llamaremos la atención sobre una segunda razón igualmente importante. Vivimos en la época de la crisis general del sistema, en la que la posición de la clase dominante se ve sacudida por la tensión y la maduración de los antagonismos de clase. La reforma tecnocrática significa el afrontamiento de fuezas sociales, la lucha política por el poder, una crisis política aguda y una ampliación, aunque sólo fuera por un corto período, de las libertades políticas. Además, concede autonomía a la empresa, con lo cual los obreros no se enfrentan ya con poder anónimo del Estado, sino con la dirección, a la que conocen bien. En medio de la tensión de las luchas de clases, que existía ya en 1956, esto hubiera acarreado muy probablemente un desarrollo ulterior de la

revolución y la caída del poder burocrático. Si la burocracia no se ha decidido en aquella época a efectuar esa reforma, cuando el sistema disponía aún de reservas económicas y la nueva dirección gozaba aún de una autoridad innegable, no puede *a fortiori* hacerlo ahora. En efecto, le faltan tanto reservas —en otras palabras, las bases materiales de una maniobra reformista— como autoridad y apoyo en la sociedad. Esa reforma no ha sido aplicada hace ocho años, y no se tiene la intención de realizarla hoy en día, a pesar de los síntomas evidentes de la crisis de la economía. En todo caso, es este un hecho con el que debe contar, no ya un marxista, sino hasta un simple realista.

El "socialismo de los managers" existirá quizá, pero no evitará la revolución, y sólo podrá triunfar aprovechándola, o después de ella: sería para la democracia obrera una especie de "Thermidor". No vemos por qué razones militaríamos en favor de esa solución; al contrario, en el capítulo sobre el programa, hemos tratado de encontrar los medios de evitarla.

Se nos ha reprochado igualmente el ser inconscientes al hablar de la necesidad de la vía revolucionaria, arguyendo que eso sólo podría conducir al triunfo de fuerzas antisocialistas, ya sea porque la mayor parte de la clase obrera es reaccionaria, ya sea porque los elementos burgueses en la sociedad son muy poderosos. Los mismos argumentos son empleados contra las otras medidas que proponemos, como la pluralidad de partidos, la liquidación de la policía, etc.

Es fácil ver que los autores de ese razonamiento han escogido igualmente el lado de la barricada en el que se sitúan. En efecto, desea defender el sistema actual, calificado de socialista, contra la clase obrera, calificada de antisocialista; en ese razonamiento, la burocracia ha sido identificada con el socialismo, y la defensa de su dominio de clase sobre las masas presentada como la defensa del socialismo.

Estimamos que hay que considerar el problema desde

un punto de vista estrictamente opuesto —y es lo que hemos tratado de demostrar en la parte de nuestro documento que concierne al análisis. La burocracia dominante es una fuerza antiobrera, y por lo tanto antisocialista. Es ella el elemento reaccionario más poderoso, ya que dispone del poder político, y domina la producción. Los elementos de la derecha tradicional no tienen base alguna en los sectores decisivos de la economía— industria, construcción, transportes, banca. Los elementos de la pequeña burguesía, la "iniciativa privada" en los sectores urbanos, y lo que se suele llamar explotaciones de kulaks en el campo, se sitúan al margen de la economía y de las estructuras sociales. Por el contrario, no hay que cometer el error de subestimar la influencia de los grupos y corrientes, *políticamente de derecha,* encabezados por la jerarquía de la Iglesia, que se aferran a los viejos símbolos de la ideología reaccionaria.

El sistema burocrático despierta, muy justificadamente, las protestas y el odio de las masas: se identifica con el socialismo y asfixia sin escrúpulos toda oposición de izquierda —creando así condiciones favorables a la penetración de la ideología de derecha en las masas. En efecto, la gente busca símbolos ideológicos que sean la expresión de su protesta contra el sistema de explotación y de dictadura; y como falta una oposición de izquierda que represente sus intereses esenciales, se vuelve hacia los viejos símbolos de la derecha tradicional. Por lo tanto, la dictadura burocrática y reaccionaria *favorece* a la derecha política tradicional; añádase a eso el establecimiento con algunas de esas tendencias de acuerdos fundados en principios de colaboración (PAX), y con otras (la jerarquía de la Iglesia) de acuerdos tácitos fundados en compromisos.

El único medio eficaz de combatir a la derecha tradicional no consiste pues en defender la dictadura burocrática, sino en combatirla y desenmascararla de manera consecuente partiendo de una posición de izquierda. El programa de la clase obrera no utiliza símbolos nebu-

losos, sino que se sirve de realidades sociales: se opone a la naturaleza misma de la dictadura de la burocracia y corresponde a los intereses vitales de las masas. El radicalismo de su crítica y de sus propuestas le confiere una ventaja evidente sobre la fraseología nacionalista y clerical de la derecha, le garantiza todas las posibilidades de obtener el apoyo de las masas. Las luchas contra la derecha que está en el poder y contra la derecha tradicional son inseparables.

A los que se imaginan que la democracia obrera abre el acceso al poder a las fuerzas de la derecha porque acepta el pluripartidismo y se priva de un instrumento como la policía política, les respondemos: no hablábamos de un Estado por encima de las clases, sino de una democracia obrera de clase. Son las representaciones de los obreros de las empresas lo que constituye en este caso los fundamentos del poder político y económico; es pues la clase obrera el elemento decisivo en el afrontamiento de los partidos políticos. Hay también una organización que reúne los medios de coerción, la milicia obrera; contrariamente a lo que ocurre en el sistema actual, la fuerza militar y represiva del Estado no está, en una democracia obrera, opuesta a la clase obrera, sino estrechamente ligada a ella. Pensamos que ese conjunto de medidas da a la clase obrera la posición clave en el Estado, y por lo tanto es una garantía contra la derecha. No creemos que valga la pena discutir la tesis que sostiene que la clase obrera es en nuestro país una fuerza reaccionaria, ya que lo único que expresa es una conciencia de clase antiobrera. Nuestro programa ha provocado igualmente, en los medios universitarios, otras críticas: que exigíamos todo el poder para la clase obrera excluyendo al resto de la sociedad, que era un programa antiintelectual, y que no era "actual".

Estamos convencidos de que los autores de esas críticas no pueden tener en la cabeza, como ideal de "modernismo", el "Estado de todo el pueblo", que no existe en ninguna parte, y que, como todo hace creer, no existirá nunca, salvo en el programa del PCUS.

Es pues posible que esa crítica venga a querer decir que, en el marco del Estado obrero, no hemos hablado de las formas de representación política de la sociedad en su conjunto. Es en efecto difícil el preveer por adelanlantado los detalles de la organización política y jurídica de la próxima sociedad. No hemos escrito la constitución del próximo Estado, sino un programa político. Es pues natural que sólo hayamos incluido en él los elementos esenciales que determinan la naturaleza de la democracia obrera. Hemos tratado únicamente de dar una respuesta a la cuestión de saber cómo debería la clase obrera organizarse y cómo debería organizar el poder del Estado para realizar su interés fundamental: el dominio de su propio trabajo y del producto de éste, es decir la supresión de la explotación.

Teniendo en cuenta el papel decisivo del sector industrial en la economía, el dominio de la producción industrial, o sea el dominio del trabajo de la clase obrera, es el equivalente en una sociedad moderna del dominio de clase y del poder político. Mientras subsistan en la sociedad grupos de individuos que se diferencian por el lugar ocupado en el proceso de producción, la situación material y social, los intereses, el parlamento —o cualquier otra forma de representación de la sociedad en su conjunto— sancionará el poder de la clase que ejerce el control real sobre la actividad del trabajo y la distribución del producto en los sectores decisivos de la economía. Y justamente por eso la supresión de la explotación del proletariado debe significar la apropiación del poder del Estado en manos de la clase obrera. Todas las objeciones que reprochan a la democracia obrera el tener un aspecto de clase están desprovistas de sentido. Se le podría únicamente reprochar el ser obrera: pero ese reproche sólo podría hacerlo otra clase que aspirara al poder.

Si esa "sociedad moderna" que conocemos mal, y que nuestros contradictores oponen a la democracia obrera, no es ni la dictadura burocrática, ni el neocapitalismo, sólo puede tratarse del sistema tecnocrático. Seguimos

sin ver en qué se funda la convicción de que en ese sistema el papel de la *intelligentsia* sería más importante que en las condiciones de una democracia obrera. Mientras subsista la explotación, subsistirá la necesidad de tener los medios policíacos, administrativos y propagandísticos de su mantenimiento. Esto no se reduce solamente a la existencia de la policía política, por ejemplo, sino que implica igualmente una función apologética de la ciencia y de la cultura. Todo sistema fundado en la esclavitud del obrero priva de una u otra manera a la *intelligentsia* de su libertad. Sólo la emancipación de la clase obrera podrá cambiar esa situación. Por su propia naturaleza, la democracia obrera puede garantizar a la *intelligentsia* una libertad mucho más amplia que la que es posible en la más parlamentaria de las repúblicas burguesas —o en el más "moderno" de los reinos de los managers.

El desarrollo económico y social conduce, en su perspectiva lejana, a la desaparición de las diferencias entre el trabajo productivo y el trabajo no productivo, el trabajo intelectual y el trabajo manual, el trabajo industrial y el agrícola. Esto se sitúa en el mismo terreno que las perspectivas y los objetivos de la clase obrera. Pero el camino que conduce a la sociedad comunista que abolirá el asalariado y la explotación del productor inevitablemente ligada a éste, pasa por la democracia obrera. No hemos proporcionado una visión de la sociedad comunista del siglo XXI; sobre ese punto, poco tendríamos que añadir a lo que ha escrito Marx. Hemos tratado, eso sí, de dar un primer esbozo de un programa de democracia obrera de la segunda mitad del siglo XX. Entre las críticas más vehementes que nos han sido hechas, la mayor parte van dirigidas contra las propuestas prácticas contenidas en el capítulo "¿Qué hacer?", y que se refieren al derecho de huelga y a la formación de círculos obreros —embriones del próximo partido—. Deformando nuestro análisis y silenciando casi totalmente el programa, los informadores oficiales citaban abundantemente el último capítulo para despertar la indignación ante las intenciones, expresa-

mente proclamadas, de violar el derecho penal; esto nos dispensa de la necesidad de presentar ese capítulo detalladamente. Vamos pues a limitarnos a exponer los motivos de nuestro punto de vista, y la respuesta a las objeciones que se nos han hecho.

Estimamos que la crisis de la economía y de la sociedad lleva infaliblemente a la revolución. El poder de la burocracia no está ya fundado hoy en día en el apoyo de la sociedad, sino en la desorganización de las fuerzas sociales, mantenida por la coerción en primer lugar, y gracias a la atomización de la clase obrera privada de programa y de partido.

La revolución es indispensable para el desarrollo de la sociedad .Es también inevitable. Pero su desarrollo y su resultado dependen en primer lugar del nivel de preparación de la organización y del programa de la clase obrera. De eso sobre todo dependen las posibilidades de limitar el desorden ligado a la revolución —y por consiguiente, las posibilidades de su desarrollo pacífico, así como la minimización de sus costes sociales. Privada de organización propia y de programa, la clase obrera no sabría jugar un papel dirigente en la revolución; podría a lo más llevar al poder a fuerzas no proletarias, es decir a sus nuevos opresores.

Hay que considerar por lo tanto que la transformación de la clase obrera en una clase "para sí", es decir en una fuerza organizada y consciente de sus objetivos, se efectúa tanto en interés de esa clase como en el del desarrollo social; esa transformación sólo puede ser el resultado de una *actividad consciente*. Estimamos que es éste uno de los deberes políticos y morales que tienen todos aquellos que quieren luchar por la realización del interés de la clase obrera.

Creemos que el eje de esa actividad debe ser el agrupar los intereses de la clase obrera expresándolos en forma de un programa, y propagarlo en la clase obrera para que tome conciencia de sus objetivos: por medio de la

discusión sobre el programa, por medio de la integración de los obreros en la lucha por la defensa de sus intereses inmediatos, es decir en movimientos huelguísticos. Esto conduce a la organización de la clase obrera en partidos y sindicatos que le sean propios.

Esta posición ha provocado la indignación de los que sostienen que esa perspectiva significa una actividad ilegal. En otras palabras, podría ser reprimida en función de la legislación vigente. Pero llamemos a las cosas por su nombre: ni la huelga, ni la formación de un programa, ni tampoco las discusiones se encuentran prohibidas legalmente. Sin embargo, es efectivamente cierto que la ley penal vigente —creada o conservada por la burocracia— permite que se castiguen, con medios policíacos, esas actividades. En nuestro país se aplica el código penal de 1932 que era el instrumento de la dictadura semifascista del período de "renovación nacional" (Snacja), y el Pequeño Código Penal, el instrumento de la dictadura estalinista. Los dos códigos, sobre todo el pequeño, son tan vagos y elásticos que prácticamente no ponen límites a la actividad represiva del poder, y le dejan las manos libres. Por lo tanto, es posible el castigar, con toda la respetabilidad que da la ley, al organizador de una huelga, aún cuando la huelga no esté prohibida, al que participa en una discusión, aunque la discusión esté permitida, y al autor de una carta personal, a pesar de que todo el mundo escriba cartas. Pero, puesto que discutimos de asuntos de derecho, recordemos que el acto legislativo principal es la constitución. El derecho penal (y particularmente el del Pequeño Código Penal), está en contradicción con ella, y de manera flagrante, y sin embargo sigue teniendo vigencia a pesar de ser anterior a ella. La censura previa es anticonstitucional, así como todas las medidas que suprimen la libertad de palabra, de edición, de reunión; el poder mismo de la burocracia es anticonstitucional. Desde el punto de vista de la Constitución, las huelgas, las discusiones políticas, la formulación de un programa y la organización de los obreros

no están en contradicción con la legislación actual, sino más bien con la legitimidad del poder.

Los móviles de nuestra acción no son solamente de orden constitucional, sino que representan también el que estamos comprometidos en la lucha por la emancipación de la clase obrera y de la sociedad. Pero puesto que se nos reprocha una actividad ilegal, nos hemos visto obligados a mostrar que la ley misma se ve interpretada de manera arbitraria por el poder y por sus defensores: es calificado de obligatorio todo aquello que les conviene. Así pues, lo que de hecho se nos reprocha no es una actividad ilegal, sino una actividad que se opone a las prohibiciones arbitrarias del poder burocrático. Ese género de moral que tolera exclusivamente lo que el poder tiene la bondad de autorizar, erigiendo así a la *sumisión* como virtud suprema, nos es extraño en razón de nuestro compromiso y en razón de las tradiciones que consideramos nuestras. Era contra las prohibiciones del poder burgués contra lo que militaba el Partido Comunista Polaco reducido a la clandestinidad; contra las prohibiciones del poder burocrático contra lo que luchaba la oposición comunista de izquierda de la URSS cuando combatía a la dictadura totalitaria estalinista en formación. Así actuaban todos los grupos y partidos que luchaban contra las dictaduras antipopulares, por la emancipación de la clase obrera. La gente a la que no interesa la lucha de clases y que piensa que el análisis marxista es anacrónico, "a la luz de las realidades contemporáneas", nos atacaba ayer por infracción de la disciplina del partido; hoy nos ataca por infracción de la disciplina exigida por el poder de Estado: esto corresponde a un cambio de pensamiento espectacular: educados en el marxismo dogmático, han abandonado el marxismo para conservar el dogma: ponen en duda el valor de la teoría marxista, pero no ponen en duda, sin embargo, el que el Partido no pueda tolerar fracciones, y el que haya que someterse al poder.

Esperamos que esta carta servirá para disipar la igno-

rancia que existe a propósito del contenido de nuestro texto, y que hará más fácil una polémica abierta sobre nuestras tesis, tanto para los miembros del partido como para los de la Juventud Socialista en la Universidad. Nos gustaría igualmente tener la seguridad de que, esta vez, los comités universitarios del partido y de las Juventudes Socialistas —que poseen sus propios ejemplares de esta carta abierta— permitirán que sus verdaderos destinatarios conozcan su contenido, es decir todos los miembros que lo deseen.

Ignoramos evidentemente si, a causa de esta carta, las autoridades nos aplicarán nuevas medidas de represión administrativas, o se decidirán a organizar nuestro proceso. Sea lo que sea, estimamos tener pleno derecho a dirigirnos a las organizaciones políticas que nos han excluido de sus filas con una carta abierta que explica a todos sus miembros nuestros puntos de vista y los motivos de nuestra acción.

[1] El proceso se ha desarrollado a puertas cerradas. Según las leyes polacas han podido sin embargo asistir al mismo "hombres de confianza" designados por los imputados. Modzelewski eligió al filósofo Leszek Kolakowski (expulsado del partido en octubre de 1966 por su pública conmemoración del decenio del octubre polaco), Kuron al notable escritor Kazimiers Brandys (excluído del POUP por protestar contra las precedentes medidas disciplinarias). Un denso grupo de estudiantes esperaba fuera de la sala el veredicto y saludó a los dos condenados cantando la Internacional. Al proceso siguieron numerosas tomas de posición e iniciativas de solidaridad en los ambientes estudiantiles y culturales polacos, entre las que se destacan, además de las de los intelectuales ya citados, las del historiador Witold Kula y las de los sociólogos Zygmunt Bauman y María Ossowska, viuda de Stanislaw Ossowski, cuyo libro *Estructura de clase y conciencia social,* recientemente traducido al italiano y al español contiene una punzante desmistificación de la ideología social staliniana. Kuron ha sido recientemente liberado de la cárcel.

[2] "El Estado —escribía Rizzi (*La bureaucratisation du monde,* p. 251)— se vuelve el patrón y el director económico por conducto de una nueva clase privilegiada, a la cual la Sociedad, en el curso de un nuevo capítulo de la Historia, deberá pagar los gastos de esta dirección. Esta nueva clase dirigente, sin embargo, no persigue como fin la acumulación de la riqueza individual; se contenta con buenos salarios, con una vida feliz y persigue el programa económico de servir al público organizando la producción no en el sentido de la especulación, sino con una tendencia al aumento absoluto de la producción misma, sin cálculos capitalistas... Ella debe demostrar ser capaz de mejorar las condiciones de los productores directos... su función histórica estará terminada cuando se revele incapaz de perseguir este fin...

"No tenemos ninguna simpatía por esta clase burocrática, pero comprobamos la necesidad histórica de ella... La clase dirigente termina por identificarse con esta burocracia política, sindical y técnica, que, en la sociedad pasada, actúa en función de los intereses del patrón capitalista, feudal o patricio, y también en su propio interés. La última clase dirigente de la historia está así próxima a la sociedad sin clases que niega su propia naturaleza de clase y propietaria."

En la posguerra Rizzi se ha vuelto más pesimista, en la carta enviada a *Tempi moderni* (n. 9, abril-junio 1962), define el colectivismo burocrático como fase regresiva, triunfo del monopolio, que es enemigo de la clase obrera tanto cuando es privado como cuando es estatal; "el monopolio de los medios de producción y de la fuerza de trabajo con la consiguiente extinción del mercado genera una explotación más bestial que la capitalista... El capitalismo al menos nos dejaba la libertad de nuestros brazos; el proletariado puede elegir entre un capitalista u otro, discute el salario y puede negarse a trabajar."

Vuelve a proponer así, paradójicamente, el libre mercado e interpreta a la NEP como la última, desesperada batalla antiburocrática de Lenin y Bujarin.

Índice

Introducción 5

Presentación 21

I. El poder de la burocracia 27

II. Salario, producto excedente y propiedad 33

III. Objeto de clase de la producción 49

IV. El origen del sistema 65

V. La crisis económica del sistema 71

VI. Las relaciones de producción en la agricultura y la crisis 89

VII. La primera revolución antiburocrática: 1956-1957 99

VIII. La crisis social general del sistema 105

IX. Los problemas internacionales de la revolución 119

X. Programa 129

XI. Contrargumentos 147

Notas 159